



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO



TESIS

**DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
PÚBLICOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES**

Presentada para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho **con
Mención en Ciencias Penales**

PRESENTADA POR:

BLANCA GENOVEVA PAREDES GUEVARA

ASESOR:

M. Sc. MARIANO LARREA CHUCAS

LAMBAYEQUE-PERU-2017

**DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
EN LOS GOBIERNOS LOCALES**

BLANCA GENOVEVA PAREDES GUEVARA
AUTOR

M. Sc. MARIANO LARREA CHUCAS
ASESOR

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado de: MAESTRO EN DERECHO
CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES

APROBADO POR:

DR. VICTOR ANACLETO GUERRERO
PRESIDENTE DEL JURADO

M. Sc. WALTER RAMOS MANAY
SECRETARIO DEL JURADO

M. Sc. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA
VOCAL DEL JURADO

Febrero, 2017

DEDICATORIA

Primero quiero agradecer a Dios, quien es el ser que ha guiado mis pasos durante toda mi vida.

Quiero Agradecer a mi Padre, que desde el cielo siempre me ilumino y me dio fortaleza, para permitirme llegar a este momento.

Quiero agradecer a mi Esposo por el optimismo que me impulso a seguir adelante, y también por su apoyo y comprensión.

A mis hijos por todas las veces que no pudieron tener a una mamá de tiempo completo.

A mi Madre y Hermanos por su valioso apoyo en todo momento.

A mis familiares y amigos que tuvieron una palabra de apoyo para mí, durante mis estudios.

EL AUTOR

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer sinceramente aquellas personas que compartieron sus conocimientos conmigo para hacer posible la conclusión de esta Tesis. Especialmente al Dr. Mariano Larrea Chucas, por su asesoría, siempre dispuesto apoyarme, a mis Profesores Max Ugarte Centeno y Víctor Rodríguez Monteza por las enseñanzas.

INDICE	
RESUMEN	PÁG 6
ABSTRACT	PAG 8
INTRODUCCIÓN	PAG 10
CAPÍTULO I	PÁG 12
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	PAG 12
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	PAG 21
OBJETIVOS	PAG 22
HIPÓTESIS	PAG 23
VARIABLES	PAG 23
ANTECEDENTES	PAG 24
TIPO DE INVESTIGACIÓN	PAG 43
DISEÑO DE EJECUCIÓN DEL PLAN	PAG 43
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	PAG 44
POBLACIÓN Y MUESTRA	PAG 44
TIPO DE MUESTREO	PAG 46
TRATAMIENTO DE DATOS	PAG 48
CAPÍTULO II	PAG 49
2.1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES	PAG 49
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PAG 64
CARACTERÍSTICAS	PAG 66
FUNCIONARIO PÚBLICO	PAG 67
IMPREScriptIBILIDAD Y LA INHABILITACIÓN EN DELITOS DE CORRUPCIÓN	PAG 70
ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES DE CORRUPCIÓN MÁS REALIZADOS	PAG 73
CAPÍTULO III	PAG 90
RESULTADOS Y DISCUSIÓN	PÁG 90
CONCLUSIONES	PÁG 119
RECOMENDACIONES	PÁG 122
REFERENCIAS	PÁG 124
ANEXO N° 01-CUESTIONARIO	PÁG 126
ANEXO N° 02-PROPUESTA N° 01	PÁG 134
ANEXO N° 03-PROPUESTA N° 02	PÁG 136

RESUMEN

La presente tesis titulada “**DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES**” es un trabajo que busca aportar a la comunidad científica conclusiones concretas sobre un tema que viene generando debates y divergencias de importancia para nuestro país, convirtiéndolo en un asunto de gran relevancia en la sociedad peruana, por la implicancia jurídica, social y económica que tiene el crecimiento de los índices de comisión del delito de corrupción. En este contexto el presente estudio hace un análisis prolijo de la situación jurídica de la normatividad que regula el delito de corrupción, con el propósito de identificar los Empirismos Aplicativos e Incumplimientos que actualmente inducen a una deficiencia generalizada en la erradicación y prevención del delito en mención, provocando contingencias que requieren propuestas inmediatas.

Asimismo, se hace un análisis en el contexto nacional e internacional, recurriendo a la legislación de algunos países de América Latina y Europa, con el propósito de establecer comparativos y tomar sus experiencias para proponer una alternativa de solución a la problemática generada.

Para el recojo de datos hemos recurrido al análisis documental como técnica principal que sustenta el presente trabajo, además se ha recopilado información mediante encuesta aplicada a una muestra representativa de los ciudadanos de la provincia. Analizada dicha información se ha evidenciado la existencia de empirismos aplicativos e incumplimientos.

La presente Tesis se encuentra dividida en 3 partes:

En la primera parte, analizamos el objeto de estudio describiendo como surge el problema, posteriormente recurrimos a la fundamentación de la

investigación; se desarrolla el denominado Marco Teórico que contiene los Planteamientos Teóricos, Normas y Legislación Comparada relacionada al tema de investigación.

La segunda parte, resultados; comprende la estructura metodológica, a su vez la descripción de las partes del problema identificadas, desde la opinión de los informantes: Comunidad Jurídica y Responsables del Derecho y el análisis de los resultados.

La tercera parte comprende las conclusiones a la que arribamos de la realidad analizada. En este apartado se plantea, entonces, el resumen de las apreciaciones resultantes del análisis, las conclusiones parciales, fundamentadas según la contrastación de cada una de las sub-hipótesis y la respectiva conclusión general que está fundamentada con la contrastación de la hipótesis global, asimismo se consignan las recomendaciones.

Para finalizar hacemos una referencia de la bibliografía citada en la presente investigación, así como presentamos los anexos resultantes; entre los que se encuentra la propuesta final;

Palabras clave: delito, corrupción, impunidad, derecho penal, Lambayeque, fenómeno jurídico, problema latente.

ABSTRACT

This thesis entitled "**CORRUPTION OFFENSES OF OFFICIALS AND PUBLIC SERVANTS IN LOCAL GOVERNMENTS**" is a work that seeks to contribute to the scientific community concrete conclusions on a topic that has generated debates and divergences of importance for our country, making it a matter of Great relevance in Peruvian society, due to the legal, social and economic implications of the growth of corruption commission rates. In this context the present study makes a detailed analysis of the legal situation of the regulation that regulates the crime of corruption, with the purpose of identifying the Empiricisms Application and Default which currently induce a general deficiency in the eradication and prevention of the crime mentioned, provoking contingencies that require immediate proposals.

An analysis is also carried out in the national and international context, using the legislation of some countries of Latin America and Europe, with the purpose of establishing comparatives and taking their experiences to propose an alternative solution to the problems generated.

For the collection of data we have used documentary analysis as the main technique that supports the present work, in addition has collected information through a survey applied to a representative sample of the citizens of the province. Analyzed this information has been evidenced the existence of empiricisms applications and non-compliances.

The present thesis is divided into 3 parts:

In the first part, we analyze the object of study describing how the problem arises, later we resort to the basis of the investigation; The so-called Theoretical

Framework is developed which contains the Theoretical Approaches, Norms and Comparative Legislation related to the research topic.

The second part, results; Includes the methodological structure, in turn the description of the parts of the problem identified, from the opinion of the informants: Legal Community and Law Enforcement and analysis of the results.

The third part comprises the conclusions we arrive at from the analyzed reality. This section then presents a summary of the findings resulting from the analysis, the partial conclusions, based on the contrasting of each of the sub-hypotheses and the respective general conclusion that is based on the contrasting of the global hypothesis, The recommendations are recorded.

Finally, we make a reference of the bibliography mentioned in the present investigation, as well as we present the resulting annexes; Among which is the final proposal;

Key words: *crime, corruption, impunity, criminal law, Lambayeque, legal phenomenon, latent problem.*

INTRODUCCIÓN

La corrupción con el devenir de los años se ha convertido en un fenómeno generalizado en nuestra nación, constituyéndose como uno de los mayores peligros que atenta contra la institucionalidad del país, limitando su crecimiento y la proyección de confianza que tiene el ciudadano para con la Administración Pública; llevándolo incluso a considerar que la corrupción es un acto común y corriente; que si bien no es positivo, sirve para agilizar ciertos procesos burocráticos en la Administración.

La corrupción si bien la observamos a diferentes escalas, desde una llamada coima o dádiva para salvarse de una multa o para agilizar un trámite, hasta el ofrecimiento de grandes millones para sobrevalorar obras públicas, entre otros casos conocidos; ello en todas sus vertientes nos indica que la corrupción nos involucra a todos, desde al ciudadano de a pie tanto como al Presidente de la República, y por ende la solución debería partir también de todos los actores involucrados.

Que, las instituciones competentes para prevenir y reprimir tales acciones ilícitas, están constantemente buscando nuevas estrategias y mecanismos que permitan coadyuvar a su erradicación; sin embargo estas parecen no ser las adecuadas para restablecer el orden público, considerando además que no es novedad que los corruptos a su vez con el pasar del tiempo también desarrollan mejores estrategias para realizar sus actos ilícitos, los mismos que en múltiples ocasiones son facilitados por la cultura de impunidad, donde algunas autoridades competentes para reprimir tales hechos, por el contrario protegen e incluso son cómplices de la corrupción; haciendo cada vez más difícil la lucha contra sus embates.

Que, como miembros de la sociedad y a la vez operadores del derecho, no solo es nuestro deber, sino nuestro derecho aportar con la construcción de nuevas estrategias jurídicas tanto teóricas como prácticas que se constituyan como posibles soluciones ante el problema identificado; en tal sentido la presente

investigación pretende analizar y determinar si los mecanismos legales existentes están contribuyendo de manera óptima a erradicar el delito de corrupción de funcionarios en nuestro departamento, para lo cual primero pretendemos identificar y hacer un análisis de la corrupción como delito, así como de la normativa que lo regula y de las diversas medidas aplicadas en la actualidad para su represión, lo cual nos permitirá conocer y explicar la evolución de este fenómeno; para poder concluir con el planteamiento de una serie de medidas teóricas y prácticas para enfrentar este problema.

CAPÍTULO I

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Ubicación

A. Planteamiento del Problema

Para llegar al problema de investigación referido a los “Delitos de Corrupción de funcionarios en los Gobiernos locales”, debemos empezar considerando que la Administración Pública, se constituye como una herramienta necesaria para la supervivencia del Estado y una necesidad para los fines del mismo. La Administración Pública entonces tiene que basar su actuación dentro de los parámetros otorgados por la Constitución Política; la cual va a contener los principios que rigen su existencia y actuar. A su vez debemos resaltar que la Administración Pública se limita al poder ejecutivo, y es la acción de sus diversas partes, o lo que es lo mismo, el conjunto de medios con los cuales las leyes se ejecutan, lo que hace una actividad administrativa.

Ahora la investigación nos remite a los delitos de corrupción de funcionarios, y por ende a una relación con el derecho penal, para esto debemos entender que éste derecho entiende actualmente a la Administración Pública. Los actos realizados en la Administración Pública deben tratarse de “actos funcionariales”, aunque los realicen sujetos que en el sentido administrativo no serían propiamente “funcionarios públicos”. Y además para que estos actos tengan trascendencia en la interpretación de los tipos penales, deben tener un “ámbito externo”, referido esto a la relaciones entre la administración y los administradores.

Ante esto, la administración pública se constituye desde una perspectiva teleológica en el mecanismo puente entre el Estado y la Sociedad Civil, entre las formas y el contenido humano de los países. Su existencia jurídica, en dicha perspectiva, cobra legitimidad social en la medida que se identifique con sus

cometidos y destino: el servicio a la sociedad y a ciudadanos, bajo estándares de igualdad, eficacia, sometimiento al ordenamiento jurídico y reafirmación del derecho de los seres humanos a convivir e interactuar en condiciones de racionalidad y dignidad, así como de recibir por parte del Estado, bajo el cual se acogen, gratificaciones que potencien su condición existencial y eleven su calidad de vida.

Considerando entonces que la administración pública es tenida en cuenta por el derecho penal, en la realización de actos funcionariales que escapan del fin de la misma ¿Cómo debe ser entendido este fin específicamente en los gobiernos locales a los cuales se dirige la aplicación de la investigación?.

La administración pública, en este caso los gobiernos locales, deben basar su actividad funcional teniendo en cuenta a sus usuarios, a los administrados y esto basándose en el denominado Estado de Derecho; convirtiéndose la misma en un instrumento puesto al servicio de los interesados; originando un criterio de responsabilidad en su ejercicio.

Sin embargo, a pesar de los principios que deben reinar en la actuación administrativa y por ende de sus funcionarios, se evidencia la existencia de corrupción en la administración pública, la cual puede ser entendida siguiendo a la doctrina mayoritaria (así lo señala Hurtado Pozo en su libro Corrupción: El caso peruano, en Pena y Estado. Corrupción de Funcionarios Públicos) desde dos perspectivas: por un lado es posible entender la corrupción como actos o manifestaciones concretas del uso particular de la función pública delimitados en la legislación administrativa o penal, pero por otro lado, es necesario entender la corrupción en un sentido más amplio, esto es, como un clima de mentalidad colectiva, sentimientos y práctica histórica que denominamos “fenómeno de la corrupción”.

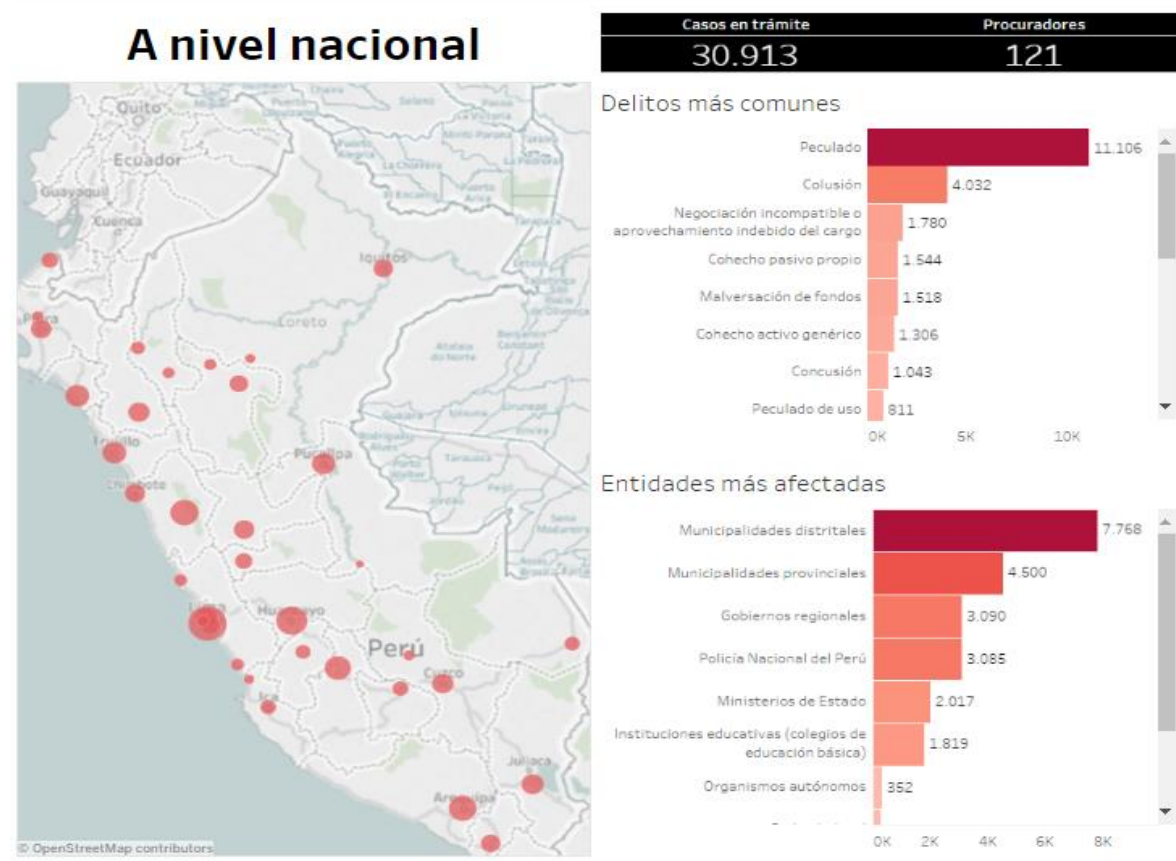
De ahí que vincular actos de corrupción dentro de una administración pública es de suma gravedad, considerando la segunda acepción de corrupción, las repercusiones negativas sobre la sociedad que tendrían los actos corruptos de funcionarios en ejercicio de función pública, serían de tal gravedad que las mismas afectan por ende al bien público y al interés general de la sociedad inmersa en la dirección administrativa sujeta, como es en este caso de los gobiernos locales. Es por este motivo que es necesario y urgente encontrar los mecanismos extrajurídicos y jurídico-penales para la contención de las manifestaciones concretas de la corrupción.

La corrupción desde una perspectiva generalizada es entendida como uno de los grandes problemas de lo que se conoce como democracia, pero ésta no entendida desde la perspectiva formal, como una noción de mayoría, sino desde un punto de vista material como decisiones democráticas tomadas en beneficio del interés general. El fenómeno de la corrupción nos puede llevar a situaciones extremas y graves como lo es la criminalidad organizada, y como lo es el uso del avance tecnológico e industrial en campos como la banca o las finanzas permiten modalidades nuevas y encubiertas de corrupción que hacen difícil su develamiento y persecución. Finalmente, la globalización y los procesos de integración supranacional han conllevado la configuración de una forma de criminalidad de carácter transnacional con enorme capacidad de desestabilización de mercados, así como de corrupción internacional de funcionarios públicos. Todos estos supuestos inciden en el progreso y asimilación de la democracia como conjunto de actos que conlleven al interés general y por ende al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos que la conforman.

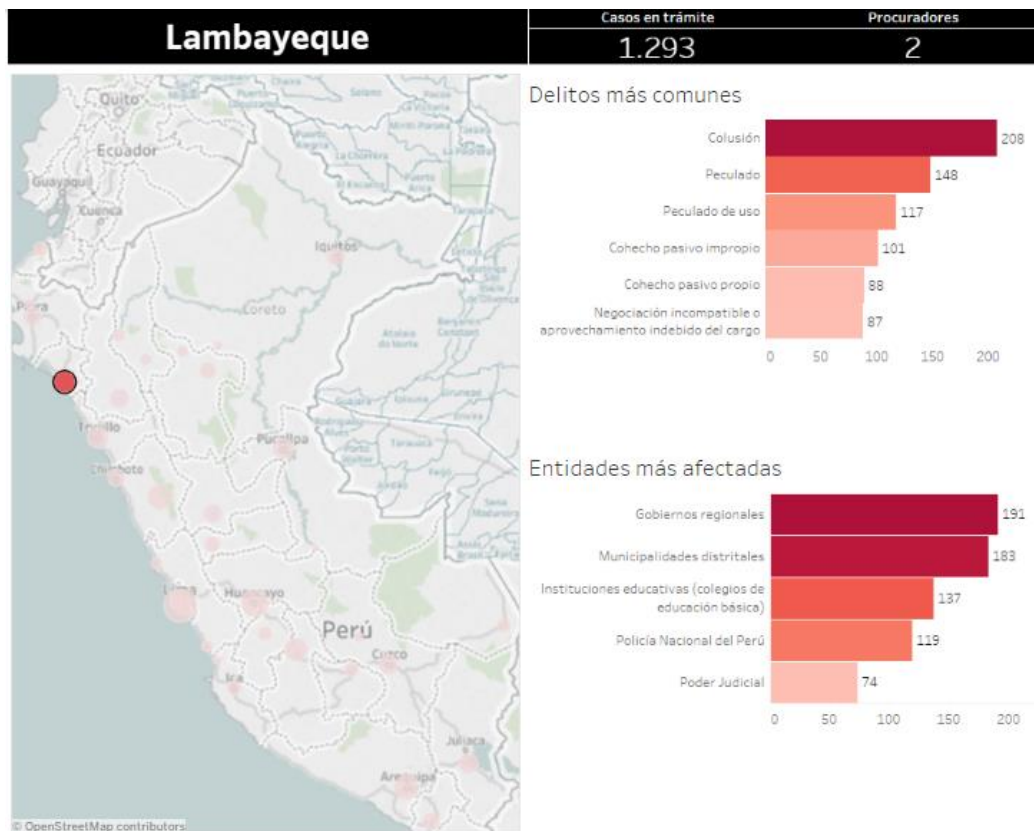
A su vez, este panorama general nos lleva a plantearnos el porqué de la existencia de corrupción en una parte de la administración como lo son los gobiernos locales. Se suele decir, para justificar el fenómeno de la corrupción, que determinadas prácticas desviadas o ilegales redundan en una mayor “eficacia” en el funcionamiento de las instituciones. Así, hay corrupciones toleradas en sus

niveles inferiores e incluso fomentadas. Contra este argumento Olaizola Nogales (al respecto la jurista realiza un análisis de la corrupción en la función pública en el libro “Delitos contra la administración pública”) constata en primer lugar que en el clásico debate entre la eficacia y legalidad resulta obvio que no puede socavarse los fundamentos de una institución para hacerla eficaz y en segundo lugar debe advertirse que la falta de respuesta adecuada y la concurrencia de mayores tentaciones de perversión de lo público en beneficio de ganancias privadas (económicas, de poder y de prestigio) pueden facilitar la extensión de prácticas ilícitas hasta convertirse en endémicas, provocando una deslegitimación institucional.

Para situarnos un poco más en la realidad peruana, el Diario el Comercio en su edición del 08 de setiembre de 2016 nos muestra una infografía estadística de los casos de corrupción a nivel nacional y de nuestra Región Lambayeque¹:

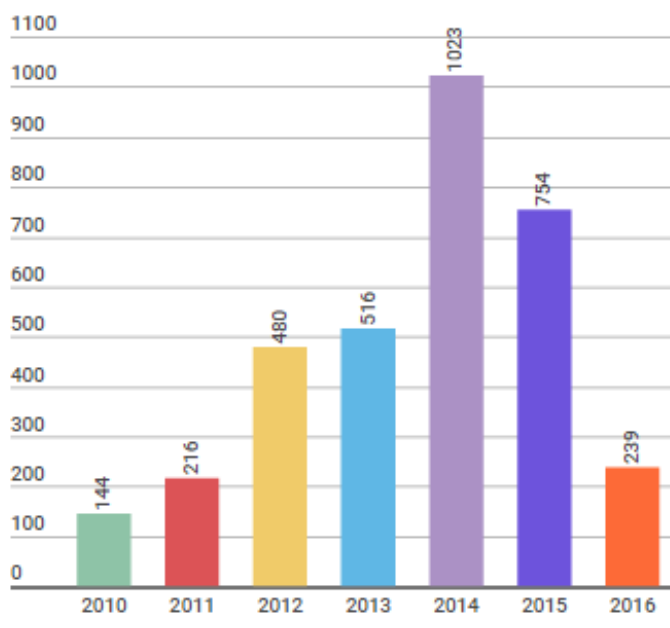


¹ Extraído de <http://elcomercio.pe/politica/gobierno/mapa-que-muestra-casos-corrupcion-que-hay-peru-noticia-1930002>



Ahora, como vemos el tema de la corrupción en los gobiernos municipales o locales, es una problemática enquistada en el sistema actual de la administración pública, en donde se viene evidenciando las actividades de funcionarios públicos que hacen mal uso, se apropian indebidamente y malversan los recursos de las Municipalidades. Y a pesar que la infografía citada previamente nos muestra que los Municipios Distritales, Provinciales y Gobiernos Regionales son los más afectados, es también cierto que esas cifras a pesar de ser alarmantes, no corresponden a la totalidad del perjuicio derivado de corrupción dado que ***en el camino van quedando muchas de dichas conductas ilícitas sin denunciarse, es decir, en la cifra negra de hechos de corrupción cometidos por funcionarios municipales. Ello sin contar de que de los casi 31 mil casos en trámite, muchos quedarán archivados o con sentencias irrisorias.***

Otra estadística, no menor, es que en los últimos seis años y medio, 3372 personas han sido condenadas por delitos de corrupción (a razón de una persona al día), una cantidad muy baja si se compara con el número de casos que existen. El siguiente gráfico nos muestra por año la cantidad de sentencias por corrupción que se han dictado.



Fuente: Diario El Comercio, edición 08 de setiembre de 2016. (La información de 2016 está actualizada a junio)

Las causas de la corrupción pueden ser diversas, entre las cuales podemos mencionar a grandes rasgos: a) La ausencia de valores en la sociedad, b) La distribución política del poder en la administración pública de forma intolerablemente concentrada, discrecional y sin ejercicio transparente del mismo, c) La coyuntura de una sociedad subdesarrollada que encara un periodo de crecimiento y de modernización, d) Factores sociales y políticos.

A esto, a pesar de la intervención del Derecho Penal, basado en el principio de legalidad con los delitos tipificados de corrupción de funcionarios, existe un gran número de hechos ilícitos que llegan a ser conocidos por las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, siendo procesados diversos funcionarios por sistemáticos robos en obras públicas – peculado y malversación de fondos –

adquisición de equipos y maquinarias sobre valuadas, tráfico de influencias, defraudación de rentas de aduana, evasión tributaria, conciertos para encubrimientos, etc, sin embargo estos procesos penales no han tenido resultados positivos, pues no han sancionado a los responsables de los hechos ilícitos (mayormente por falta de prueba), ni se ha recuperado el dinero apropiado ilegalmente por parte de estos malos funcionarios o ex funcionarios, y esto se debe a que mayormente existían normas procesales obsoletas, falta de especialización en materia de corrupción por parte de los operadores del derecho y por falta de recursos de parte del sistema de justicia para poder elaborar las respectivas pericias..

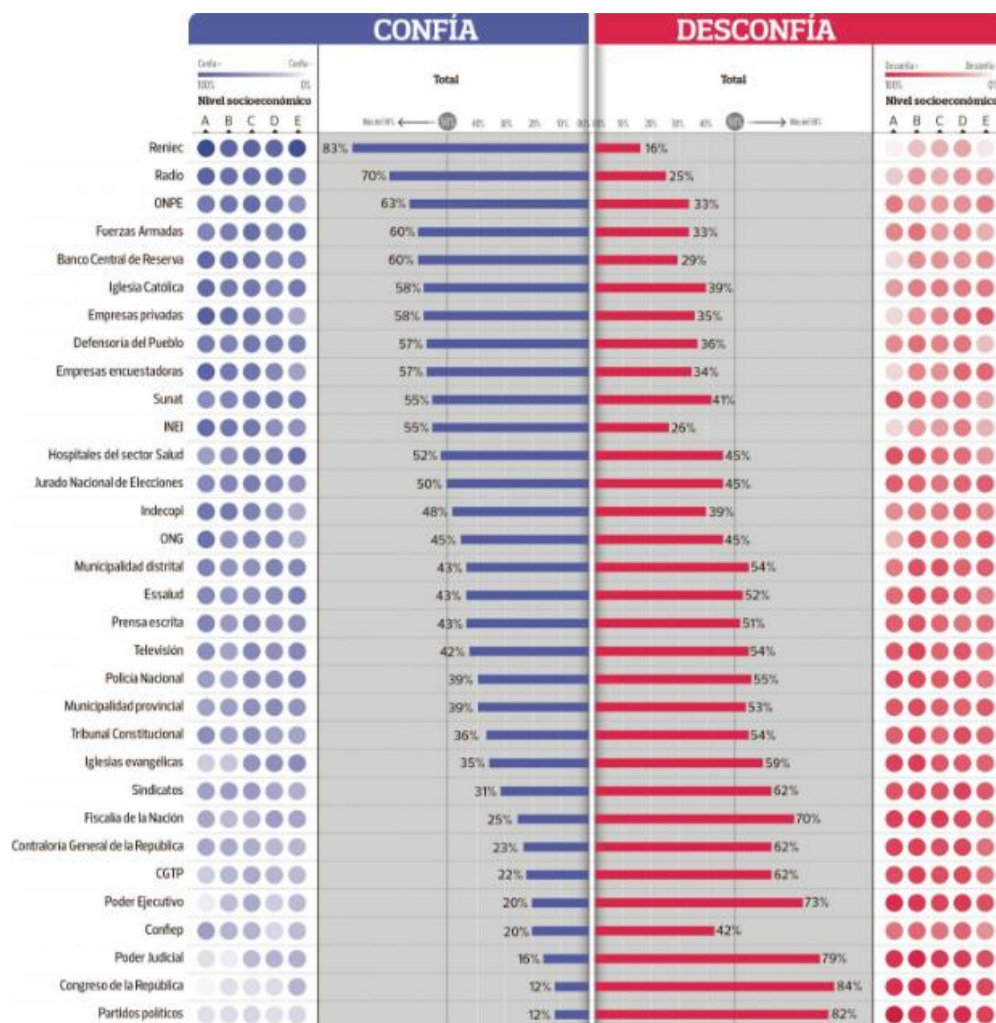
Ahora bien, de los procesos penales seguidos por delitos de corrupción de funcionarios que terminan en sentencia condenatoria (*3372 en casi siete años*); los procesados son condenados a penas privativas de la libertad mínimas, en la mayoría de casos suspendida en su ejecución, es decir menor a cuatro años y por si fuera poco las reparaciones civiles son irrisorias y que dicho de paso, casi nunca se pagan, pues prescriben. El diario Gestión, dentro de un informe publicado en su edición del 05 de diciembre de 2016 nos muestra cifras preocupantes referente a las sentencias dictadas; pues indica que de todos los funcionarios y servidores públicos denunciados penalmente por la Contraloría General, solo 648 fueron condenados por corrupción entre los años 2009 y setiembre del 2016, y de ellos **el 92% fueron sentenciados a prisión suspendida²**, es decir que se encuentran en libertad condicional a pesar de haberse demostrado su culpabilidad en los tribunales.

Todo esto es un mal precedente para futuros hechos, dado que no genera motivación alguna-prevención general de la pena- en los futuros potenciales funcionarios que intenten apropiarse de los caudales de la administración de justicia.

² <http://gestion.pe/politica/contraloria-advierde-que-importantes-casos-corrupcion-podrian-quedar-impunes-prescripcion-2176470>

Lo señalado conlleva a la existencia de efectos negativos para la sociedad, referente a la actividad corrupta en este caso de los gobiernos locales que generan una problemática urgente a solucionar. Entre los efectos podemos constatar: a) La generación de inestabilidad política del gobierno local que conlleva a la desconfianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones políticas, generando insatisfacción social; b) Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como un factor de ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en la implementación de las políticas públicas. ***El costo de la corrupción alcanza los 11 mil millones de dólares, que llegan a ser más del 8 por ciento del PBI del Perú; es decir, mucho más de lo que se invierte en temas tan importantes en nuestro país como es la Educación***³; y por último siendo a nuestro parecer el efecto más grave de la problemática, c) La corrupción atenta contra una de las condiciones necesarias de la vida en sociedad; la confianza recíproca entre los ciudadanos y en la colectividad, debido a lo imprevisible del comportamiento entre unos y otros. Este sentimiento de desconfianza en las instituciones y entre los propios conciudadanos quiera las bases del contrato social, llevándonos a un clima de anomia y desestructuración social. Ello nos muestra el siguiente cuadro:

³ RPP Noticias, edición del 04 de mayo de 2016: <http://rpp.pe/politica/judiciales/contraloria-detecto-a-25-mil-funcionarios-implicados-en-casos-de-corrupcion-noticia-959565>



De las entidades involucradas en el tema de la corrupción y aquellas que se dedican a procesar dichos casos, podemos obtener un panorama preocupante referente a la confianza que les genera su accionar a los ciudadanos. Si bien la estadística citada es de setiembre de 2015⁴, no consideramos que haya variado favorablemente; por el contrario se ha acentuado debido a los últimos acontecimientos de corrupción descubiertos en nuestro país.

- Las Municipalidades Distritales generan desconfianza en el 54% de los ciudadanos.

⁴ <http://elcomercio.pe/visor/1842421/1204395-tremenda-desconfianza-opinion-ciudadana-sobre-instituciones-noticia>

- La Policía Nacional genera desconfianza en un 55% de la ciudadanía.
- Las Municipalidades Provinciales en un 53% de la población.
- La Contraloría General de la República en un 62% de los ciudadanos.
- La Fiscalía de la Nación genera desconfianza en un 70% de los ciudadanos.
- El Poder Ejecutivo en un 73%.
- El Poder Judicial registra un 79% de desconfianza en la población.

Que, dichas estadísticas tanto nacionales como locales respaldan nuestra descripción del problema; por lo que una vez habiendo conocido la realidad problemática, procederemos a formular el problema de estudio.

B. Formulación del Problema

Del planteamiento general presentado se deduce la siguiente formulación interrogativa del problema:

¿Cuáles son los mecanismos idóneos para denunciar los hechos de corrupción de servidores y funcionarios públicos de los gobiernos locales; que permitan llegar a una efectiva sanción hacia los responsables de dichos actos delictivos que afectan a la administración pública y sociedad en general?

Sistematización

- ¿Cuál es el índice de los actos de corrupción en los gobiernos locales?
- ¿Qué delitos de corrupción de funcionarios son los más comunes?
- ¿Cuál es la razón de que la mayoría de procesos penales, terminan absolviendo a los denunciados por casos de corrupción?

C. Objetivos

a. General:

Determinar cuáles son los mecanismos idóneos para denunciar los hechos de corrupción generados en los gobiernos locales, que permitan llegar a una efectiva sanción hacia los responsables de dichos actos delictivos que afectan a la administración pública y sociedad en general.

b. Específicos:

- Determinar cuál es el índice de los actos de corrupción en el gobierno local de la región Lambayeque.
- Determinar qué delitos de corrupción de funcionarios son los más comunes en la región Lambayeque.
- Conocer los mecanismos de denuncia para actos de corrupción.
- Conocer las estadísticas de casos por corrupción denunciados y no denunciados.
- Analizar sentencias existentes para poder determinar cuál es la razón para que en la mayoría de procesos penales se termine absolviendo a los denunciados por casos de corrupción.
- Establecer si el Código Procesal Penal y demás normas, así como las entidades encargadas de procesar los casos denunciados, están aportando a luchar contra la corrupción.

D. Hipótesis

“Los mecanismos idóneos para denunciar los hechos de corrupción generados en los gobiernos locales se encuentran en el ámbito penal a través del ejercicio de la acción penal que conllevará a una efectiva sanción a los responsables de dichos actos delictivos, no sin antes tener en consideración el principio de última ratio, el cual nos marcará un límite en el uso indiscriminado del derecho penal en aras de evitar la corrupción en los gobiernos locales”.

E. Variables

E.1. Independiente: Corrupción en la Administración Pública de los Gobiernos Locales.

Indicadores

- Ausencia de valores en la sociedad
- Deficiente distribución política del poder
- Sociedad subdesarrollada ante las innovaciones tecnológicas y de control.
- Factores sociales y políticos de incidencia.

E.2. Dependiente: Mecanismo Idóneo

Indicadores

- La participación de la población en la gestión municipal.
- Mecanismos para denunciar los hechos ilícitos.
- El proceso penal rápido, transparente y eficaz.
- Penas en los delitos de corrupción de funcionarios.

1.2. ¿Cómo surge el problema?

1.2.1. Antecedentes en torno al fenómeno de la corrupción

El fenómeno de la corrupción está muy anclado y arraigado desde la existencia de la humanidad misma, en razón de que sus raíces responden precisamente a consideraciones sociológicas y modernamente a ámbitos de ciencia política por la vinculación que tiene la corrupción con el poder, por ser su ámbito de germinación y relevancia⁵.

¿Cuál fue el primer caso documentado de corrupción?⁶:

➤ **EGIPTO:**

Algunos historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX, 1100 a.C., en Egipto. Un tal Peser, antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas.

➤ **GRECIA:**

Los griegos tampoco tenían un comportamiento ejemplar. En el año 324 a.C. Demóstenes, acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir. Y Pericles, conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de construcción del Partenón.

⁵ Hurtado Pozo, José. "Corrupción el caso peruano". En revista Pena y Estado, año 01, n° 1, Buenos Aires, 1995, p. 156, citando a Reátegui Sanchez.

⁶ <http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20120803/54331562523/historia-de-la-corrupcion.html>

Pero la corrupción existía ya mucho antes de estos episodios. De hecho, en la época del mundo clásico, las prácticas que hoy consideramos ilegales eran moneda corriente.

➤ **MESOPOTAMIA:**

“En la antigüedad, engrasar las ruedas era una costumbre tan difundida como hoy y considerada en algún caso incluso lícita”, escribe Carlo Alberto Brioschi, autor de Breve historia de la corrupción (Taurus). “Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, en el año 1500 a.C., establecer un trato económico con un poderoso no era distinto de otras transacciones sociales y comerciales y era una vía reconocida para establecer relaciones pacíficas”.

➤ **ROMA:**

En Roma, el potente caminaba seguido por una nube de clientes: cuanto más larga era su corte, más se le admiraba como personaje. Esta exhibición tenía un nombre: **adesectatio**; a cambio, el gobernante protegía a sus clientes, con ayudas económicas, intervenciones en sede política, etcétera. Y los clientes, a su vez, actuaban como escolta armada. También había acuerdos entre candidatos para repartirse los votos (coitiones) y para encontrar un empleo solía recurrirse a la commendatio, que era el apoyo para conseguir un trabajo.

Con todo, la corrupción pública estaba mal vista. Los romanos tenían un concepto de la política diferente: lo más importante era el honor. Para llegar a la cumbre, el candidato tenía que tener currículum: haber ocupado cargos, tener una educación y proceder de una buena familia. Pero además, tenía que tener patrimonio ya que había de presentar una fianza a principio del mandato. Y cuando finalizaba, se hacían las cuentas. Si te habías enriquecido, tenías que devolverlo todo. “En caso de corrupción, había dos penas muy severas: una era el exilio; la otra era el suicidio. Esta última, de alguna manera, era más recomendable porque por lo menos te permitía mantener el honor”. En la antigua Roma había una doble moral: se diferenciaba claramente la esfera pública de la privada. Desviar los recursos públicos era una práctica reprobable, pero en los negocios particulares se hacía la vista gorda.

La crónica de la época fue testigo de varios escándalos. Cicerón reconocía que: *“Quienes compran la elección a un cargo se afanan por desempeñar ese cargo de manera que pueda colmar el vacío de su patrimonio”*.

- El caso más célebre es el de Verre, gobernador en Sicilia. Se le imputaron extorsiones, vejaciones e intimidaciones, con daños estimados, para la época, en 40 millones de sestercios.
- Catón, el censor, sufrió hasta 44 procesos por corrupción.
- El general Escipión hizo quemar pruebas que acusaban a su hermano Lucio sobre una estafa perpetrada a daños del imperio: fue condenado al destierro.

Bertolt Brecht, en su obra sobre Julio César escribe: “La ropa de sus gobernadores estaba llena de bolsillos”. En Roma se llevaron a cabo irregularidades que recuerdan mucho a las de hoy: por ejemplo, el teatro de Nicea, en Bitinia, costó diez millones de sestericios, pero tenía grietas y su reparación suponía más gastos, con lo que Plinio sugirió que era más conveniente destruirlo.

La llegada de la religión católica impuso un cambio de moral importante. Robar pasó a ser un pecado, pero al mismo tiempo con la confesión era posible hacer tabla rasa, lo que desencadenó una larga serie de abusos. “El cristianismo, predicando el espíritu de sacrificio y la renuncia a toda vanidad, introduce en su lugar la pereza, la miseria, la negligencia; en pocas palabras, la destrucción de las artes”, escribió Diderot en su Enciclopedia, además no hay que olvidar que, según la Biblia, ***la corrupción era una práctica tan extendida al punto que, como todos sabemos, Judas Iscariote vendió a los romanos a su maestro Jesús por treinta monedas de plata.***

En la edad media, el auge de los señores feudales fue un caldo de cultivo para prácticas vejatorias. “Hubo un tiempo en que no quedaba otro remedio. Sabías que esto funcionaba así y que habías de contar con ello. En aquel entonces había formas de corrupción que se consideraban legales, legítimas. Basta pensar que no se cobraban auténticos impuestos. El campesino se buscaba la protección de un señor feudal y a cambio le ofrecía algo de la tierra”.

➤ **FRANCIA:**

Felipe II, rey de Francia en el siglo XIII, imponía feroces impuestos a sus súbditos y les obligaba a fuertes donaciones, que no eran otra cosa que ingresos que iban a sus arcas privadas.

➤ **ITALIA:**

En el mismo periodo, se puede citar en Italia el caso de Dante. El escritor sitúa a los corruptos en el infierno, pero fue declarado culpable de haber recibido dinero a cambio de la elección de los nuevos priores y de haber aceptado porcentajes indebidos por la emisión de órdenes y licencias a funcionarios del municipio. Fue condenado al exilio.

El papado de los Borja merecería un capítulo aparte. Pocas personas a lo largo de la historia fueron capaces de concentrar tanta amoralidad. Pero en esa época la corrupción parecía un mal menor. Como escribió aquellos años Maquiavelo, “que el príncipe no se preocupe de incurrir en la infamia de estos vicios, sin los cuales difícilmente podrá salvar al Estado”.

Cuando Cristóbal Colón se lanza a la conquista de América, no puede hacer otra cosa que exclamar: “El oro, cual cosa maravillosa, quienquiera que lo posea es dueño de conseguir todo lo que desee. Con él, hasta las ánimas pueden subir al cielo”.

➤ **ESPAÑA:**

En la España de Lerma si hay un periodo histórico donde la ilegalidad se extendió como una mancha de aceite; fue el que va del siglo XVI al XVIII. Mateo Alemán,

autor de la novela picaresca Guzmán de Alfarache, cuenta cómo todos compraban cargos con el único fin de sacarles provecho. “Para afanar prebendas todos están dispuestos a derrochar miles de escudos, pero antes de dar ni un cuarto de limosna a un mendigo, le hacen procesar”. La corrupción es un cáncer que está asumido por la mayoría. Sancho Panza, en El Quijote, exclama: “Yéndome desnudo, como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel”.

Para Alfredo Alvar, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor del libro El duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII (Esfera de los libros), “los mecanismos de la corrupción son universales pero en España se celebra como herencia de la picaresca española. La aceptación de la corrupción es una construcción cultural y, desgraciadamente, en España queda hasta simpática”.

Alvar describe así la que llama burocracia patrimonial de la época. “La selección de las personas no se basaba en la capacitación técnica; los sueldos estaban fijados, pero se podían alterar graciosamente por la vía de la merced real; todo podía ser susceptible de caer bajo el control de uno solo que se sirviera de la ley para sus intereses particulares; el servidor real no era el más cualificado, sino el que ponía la mejor sonrisa a quien le hubiera de nombrar. También había una dominación legítima, implantada por la vía tradicional de las costumbres, (o, lo que es lo mismo, lo del ‘siempre ha sido así’) y la que llegaba por la vía carismática, según la cual el que ejerce el poder tenía entre sus subordinados un halo de santidad (Isabel la Católica), de heroísmo (el Cid) o de ejemplaridad. En todos los casos, los poderosos cubrían sus necesidades por medio de la donación y la

tentación del soborno”. En concreto, el duque de Lerma tenía potestad y poder de hacer favores a quien quisiera. Hoy en día sería el equivalente de un mafioso. “En esa época era incluso peor que hoy, porque había una clara manipulación del poder judicial”, apunta Alvar. La otra diferencia era el concepto de familia, en nombre del cual se podían romper las reglas. “Por ejemplo, no se veía mal forzar la ley para ayudar a un familiar. Era normal que un duque se prodigara en esfuerzos para ayudar a su hijo. Era algo que había que hacer”, señala.

➤ FRANCIA

Luis XIV en sus memorias reconocía que ***“no hay gobernador que no cometa alguna injusticia, soldado que no viva de modo disoluto, señor de tierras que no actúe como tirano. Incluso el más honrado de los oficiales se deja corromper, incapaz de ir a contracorriente”***. En particular, destacan dos figuras eclesiásticas muy discutidas: Mazarino y Richelieu. Montesquieu definió a este último como “el peor ciudadano de Francia”. Y Colbert, que fue el ministro del Tesoro, en una carta a Mazarino escribió textualmente: “Para vuestros cargos de intendente no he encontrado ningún adquirente que haya querido cerrar a doce mil escudos”.

La Revolución Francesa, con la llegada de Robespierre, conocido como el Incorruptible, trajo un aire fresco que duró muy poco. Incluso el jacobino Saint-Just se vio obligado a reconocer que “nadie puede gobernar sin culpas”. El régimen de Bonaparte siguió la estela de corrupción de la monarquía anterior. Napoleón solía decir a sus ministros que les estaba concedido robar un poco, siempre que administrasen con eficiencia. Pero, sin lugar a dudas, el más corrupto de todos fue

Talleyrand. El emperador francés decía de él que era “el hombre que más ha robado en el mundo. Es un hombre de talento, pero el único modo de obtener algo de él es pagándolo”. Su lista de abusos llenaría páginas y páginas.

La llegada del capitalismo y de la revolución industrial aumentó las relaciones comerciales y, al mismo tiempo, las prácticas ilegales. Madame Caroline, protagonista de la novela *El dinero*, de Émile Zola, publicada a finales del siglo XIX, hace un retrato sin piedad de las costumbres de la época: “En París el dinero corría a ríos y corrompía todo, en la fiebre del juego y de la especulación. El dinero es el abono necesario para las grandes obras, aproxima a los pueblos y pacifica la tierra”. Adam Smith, el máximo teórico del liberalismo, tuvo que admitir que “el vulgarmente llamado estadista o político es un sujeto cuyas decisiones están condicionadas por intereses personales”.

En este periodo, se suponía que la llegada de una nueva clase social al poder podía traer mayor transparencia y evitar los abusos anteriores, perpetrados por la nobleza. Porque, diga lo que se diga, el hecho de ser ricos no le había impedido a las élites, a lo largo de los siglos anteriores, robar (o comprar cargos y títulos). Pero la realidad es que tampoco la burguesía iluminada pudo evitar caer en la tentación de usar la política para su enriquecimiento personal. Alexis de Tocqueville sostenía que “en los gobiernos aristocráticos, los hombres que acceden a los asuntos públicos son ricos y sólo anhelan el poder; mientras que en las democracias los hombres de Estado son pobres y tienen que hacer su fortuna”. A costa del Estado, claro.

La cangrena de los totalitarismos En el siglo XX, la llegada de los totalitarismos no hizo otra cosa que reforzar las prácticas delictivas de los gobernantes. Con el fascismo y el comunismo la corrupción entra a formar parte del funcionamiento del Estado. Pero incluso los estados demócratas, ocupados en sus políticas coloniales, no se libraban de la lacra. **Winston Churchill dijo que “un mínimo de corrupción sirve como un lubricante benéfico para el funcionamiento de la máquina de la democracia”**. Y, al referirse a las colonias, Churchill cínicamente resumió esta política expansionista de forma rotunda: “Corrupción en la patria y agresión fuera, para disimularla”. Cecil Rhodes, el saqueador de África para los británicos, tenía una máxima siniestra y muy reveladora sobre la política colonial: “Cada uno tiene su precio”.

En la actualidad, con la consolidación del Estado de derecho, se supone que el fenómeno debería estar bajo control, gracias a una mayor transparencia. Y que, por lo menos, la corrupción debería ser mal vista y tener cierta reprobación social. El antiguo presidente francés François Mitterrand dijo: “Es cierto, Richelieu, Mazarino y Talleyrand se apoderaron del botín. Pero, hoy en día, ¿quién se acuerda de ello?”

¿Un mal necesario? ¿Qué conclusiones sacar de este breve recorrido histórico?

Según Carlo Brioschi, la corrupción “es un fenómeno inextirpable porque respeta de forma rigurosa la ley de la reciprocidad. Según la lógica del intercambio, a cada

favor corresponde un regalo interesado. Nadie puede impedir al partido en el poder que se cree una clientela de grandes electores que le ayuden en la gestión de los aparatos estatales y que disfruten de estos privilegios. Es algo natural y fisiológico”. Para Julián Santamaría, presidente de Noxa Consulting y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, “el electorado haría bien en entender que la corrupción es una lacra de todos los tiempos, que se refiere a la naturaleza humana. Se da en todos los países y en todas las épocas. En la actualidad es más frecuente en los países en vías de desarrollo, donde se combina una elevada burocracia, salarios bajos de los funcionarios y sistemas políticos autoritarios. Es cuando se da la situación esperpéntica: países emergentes, de escaso recursos y con una población que aspira a tener una forma de vida más elevada”.

En los países occidentales, los casos de corrupción dan mucho que hablar, en particular cuando, como ocurre en España, están involucradas personas conocidas. Pero, en el momento de votar, no siempre pasan factura. Pese a la mala imagen de estos gobernantes y al ruido mediático, el impacto en la ciudadanía parece relativo. ¿Por qué? Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, cree que “la picaresca española no es en el fondo otra cosa que querer parecer rico cuando en realidad uno es pobre”. Esto no justifica en absoluto las prácticas ilegales, pero explica por qué los ciudadanos tenemos casi como algo asumido el deterioro de la vida política. “En España hay una histórica desconfianza en el proceso político, algo que la retórica

franquista, por cierto muy corrupta, contribuyó a intensificar. Es algo que forma parte de nuestro bagaje cultural. La mayoría de los españoles no cree que un político pueda servirle de forma desinteresada”.

Antonio Argandoña cree que los ciudadanos “somos esquizofrénicos y tenemos como una doble moral. Aceptamos que en el mundo haya una cierta forma de corrupción que en el fondo no consideramos como tan mala. Tendemos a pensar que si a mí, como individuo, no me viene mal, es casi bueno si mueve algo de dinero. El razonamiento es: no me preocupa la corrupción siempre que no me perjudique a nivel personal”. De esta manera, “cuando un político roba, decimos que no hay derecho. Pero luego presumimos de haber evadido algún impuesto”. Brioschi recuerda que “al lado del robo de los grandes siempre hay una corrupción inconsciente, de la que acabamos siendo todos responsables si aceptamos las reglas de un sistema ilegal, porque la microcorrupción siempre ha ido de la mano de la macroscópica”.

¿Se salva alguien de la plaga de la corrupción? Según el ranking de la consultora Transparency International, existen países con poca corrupción, en particular los escandinavos. Esto se debería a la influencia de la ética luterana, que no prevé la confesión de los pecados para lograr la absolución. Y también a que estas sociedades, de corte socialdemócrata, son relativamente homogéneas. Sus ciudadanos se sienten iguales y no toleran que alguien saque ventajas de forma ilegal. Asimismo, por su alto nivel de contratación colectiva, que hace que los trabajadores se sientan protegidos y no duden en denunciar prácticas ilegales.

Pero, lamentablemente, se trata de una excepción. Como dijo Tomás Moro: “Si el honor fuese rentable, todos serían honorables”.

➤ **PERÚ:**

Los militares

Son un grupo de poder históricamente asociado a la corrupción que ha tenido presencia central en distintos momentos de la historia. En los inicios de la República, los caudillos militares sientan las bases de la política y del Estado patrimonial, que son a su vez los cimientos del estado moderno. Ellos construyen sus bases de apoyo a través del Estado, el dinero y las propiedades públicas.

Ya en ese tiempo había presencia de malas prácticas para financiarse y financiar al ejército, asimismo es necesario resaltar que nuestros héroes libertadores —San Martín y Bolívar, y ni qué decir de Gamarra— se apropian de manera abusiva y prepotente de fortunas a costa de expropiaciones, de recompensas jugosas que se hacen otorgar y de tributos en nombre de la independencia y de su sacrificio. Son los responsables del grave endeudamiento fiscal llevado a situaciones penosas de miseria. La herencia nefasta de Gamarra, específicamente, sienta las bases de la República y de los problemas burocráticos y financieros del Estado. Se hace elegir repetidamente y construye su clientela de apoyo incondicional con empresarios privados, a los que compra con jugosos adelantos para sus negocios, haciéndolos acreedores privilegiados del Estado y leales a él, y aplasta a La Mar en sus intentos reformadores.

A mediados del siglo, el militarismo baja en intensidad, pero con los vientos de la Guerra del Pacífico recupera presencia, y, justamente, el financiamiento de la guerra le devuelve el derecho y la oportunidad para recuperar poder y dinero. La posguerra abre una década de influencia y poder militar que se aviva al siguiente siglo con Sánchez Cerro y Benavides, luego el doceno militar y el fujimorato, durante el que gobiernan por la mano de Montesinos. Son en su mayoría los momentos de mayor corrupción en la historia del Perú.

Los políticos. Por su parte, los políticos toman el Estado como su botín, esa frase tan común en nuestros días. No hay fronteras claras entre el espacio público y el privado. El Estado es su propiedad, han invertido, lo han ganado, y por derecho pueden hacer lo que quieren. Pagan favores con fondos públicos y puestos en la burocracia, dan exoneraciones tributarias a sus amigos, hacen obras para ofrecer puestos de trabajo y favorecen a los que los apoyan con jugosos negocios y negociados. Este personaje nos es familiar. Cuántos congresistas de hoy calzan perfectamente bien en este molde.

Los empresarios.

Son protagonistas de jugosas historias de corrupción. Son esquilados por los militares caudillos durante las guerras de la independencia, pero luego se desquitan y entienden el juego del poder. Un momento entre muchos son los vales de manumisión que Castilla les paga a los poseedores de esclavos cuando la esclavitud es abolida. Castilla termina siendo un tímido reformador y promotor de un proceso de indemnización cargado de favoritismo pagado puntualmente entre

1860 y 1861. No salen las sumas cuando se trata de verificar cuántos esclavos había y cuantos se indemnizaron.

No se construye un verdadero Estado de derecho sin un sistema normativo congruente con las necesidades del Estado, sin instituciones que velen por el cumplimiento de la ley, sin un sistema de control que opere de manera eficaz, sin una élite dirigente que mire por encima de sus propios intereses y sin partidos políticos que representen los intereses de la población.

Las leyes y el marco normativo institucional. Existen, pero son particularmente complejas, confusas, contradictorias, restrictivas y no sirven. Por el contrario, desde los inicios de la República, ponen la primera piedra de la corrupción. Las normas formales e informales son inexistentes, están distorsionadas o son inestables. En consecuencia, la falta de disuasivos adecuados impide contener comportamientos oportunistas y despóticos, las costumbres rentistas o las ventajas monopólicas de aquellos que tienen acceso al poder político, la administración pública y los privilegios económicos. En suma, la ley no se cumple o no se aplica igual para todos.

Los contratos de consignación del guano fueron instrumentos crediticios que sentaron las bases de un sistema financiero contaminado desde sus inicios. Nace sin legitimidad, fraudulento, regido por leyes absurdamente complicadas, que no se aplican o que son manipuladas en función de los intereses de la élite. Los costos de la corrupción más altos del siglo XIX se dan precisamente en la época del guano. Cuando se pretende reformar esta situación, grupos de presión obstaculizan cualquier intento. Y las autoridades se fueron adaptando a una

administración ineficiente. Se desarrolla una tolerancia que hasta hoy nos hace convivir con una suerte de “normalización” de la corrupción.

El sistema de control no existe hasta muy avanzada la República, y cuando se crea, no opera o lo hace deficientemente. Tampoco funciona el control social. No existe la vergüenza para el que no paga impuestos o para el que no acata las normas. Al contrario, el que lo hace es el sonso, mientras el vivo se beneficia. En la Colonia, por ejemplo, el juicio de residencia era para sancionar a los que se robaban la plata del rey. En la República, el procurador pierde fuerza, y la procuraduría es una institución que no tiene peso alguno. ¿Cuándo ha ganado el Estado a un empresario corrupto?

El sistema político partidario

Se muestra una radiografía aterradora del sistema político peruano. Los partidos políticos son clubes, manejados por caudillos que nada tienen que ver con los intereses que representan. Dos son los casos más destacados. El Partido Aprista es emblemático por su presencia y recurrente comportamiento complotista y conspirador en la historia del siglo XX. Haya de la Torre hace y deshace, pero no en función de un objetivo altruista o de la construcción de país: se alía con enemigos y frustra procesos de reforma con el único objetivo de conseguir el poder, y si no lo logra, boicotea, agrede y mata a sus adversarios sin piedad. Pero los otros políticos que lo combaten no son muy diferentes, solo que no cuentan con un partido organizado y con una máquina conspiradora como la aprista. La política se va haciendo sobre la base de muertes, traiciones y chantajes. ¿Por qué ahora podríamos esperar algo diferente?

El otro caso más sobresaliente es el del fujimorismo, quizás la expresión más destacada del fallido sistema político peruano, en el que cualquiera puede hacerse del poder; los famosos outsiders.

Lo que se fue construyendo en la historia se nota en el presente. Solo dos datos. Primero, la gente no denuncia porque no cree, porque sabe que nada va a cambiar o por las represalias del denunciado. Solo el 15% declara que le solicitaron una coima, y de ese 15%, solo el 8% denunció. Segundo, no hay ningún respeto a la ley. En la Encuesta Anticorrupción de Proética, por ejemplo, el 85% de las personas consideran que los peruanos no respetan las leyes.

Hay rasgos presentes en la política que vienen desde la Colonia. Las elecciones libres y universales se combinan con candidatos que, a la manera de caudillos de la temprana República, sienten que llegaron al poder para disponer de los fondos públicos de manera privada. Hoy mismo tenemos a los tres últimos presidentes ante la justicia. Pero precisamente por eso hay también grandes cambios. Hoy la corrupción es un motivo de preocupación central de la opinión pública. Hay mayor conciencia sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, está en funciones una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que cuenta con un plan de trabajo, metas e indicadores. Sin duda que hay más control social e institucional, una prensa que denuncia y una sociedad civil cada vez mejor articulada y atenta. Las redes sociales son un gran activo para la denuncia y, a pesar de todo, con enorme esfuerzo, somos un país más moderno y democrático⁷.

⁷ <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/resena-del-libro-historia-de-la-corrupcion-en-el-peru-de-alfonso-quiros/>

El poder y corrupción se asocian cuando el primero no es considerado como un hecho regulado por el Derecho, entendiéndose a éste como un sistema normativo regulativo de conductas humanas. Por otro lado, no habría inconveniente de orden semántico que se pueda hablar de deportistas, de directores de empresas o de sacerdotes “corruptos”; en el mismo sentido podría hablarse de gobernantes o congresistas corruptos. Empero, lo que si es cierto es que en los actos o actividades de corrupción, interviene siempre, por lo menos un decisor.⁸

Lord Acton⁹ decía que el “ (...) poder tiene a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, o como decía Montesquieu “La constante expectativa demuestra que todos los hombres investidos de poder son capaces de abusar de él y de hacer su autoridad tanto como puedan”. La influencia de la corrupción ha alcanzado a todos los países del orbe, y aún la corrupción alcanza a buen número de países europeos con sistemas políticos de los convencionalmente denotados democracias consolidadas; aunque en sociedades menos desarrolladas los efectos de la corrupción suelen ser más graves que en países desarrollados; en la medida en que dificulta el crecimiento económico y pone en tela de juicio la percepción de la soberanía.

La corrupción instalada como sistema en una sociedad presupone un desprecio generalizado a la que se asocia la centralización de la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, la falta de autonomía en el poder Jurisdiccional y en el Legislativo por los dictados del Ejecutivo con argumentos que se fundan en la emergencia o

⁸ Garzón Valdes, Ernesto; “Acerca del concepto de corrupción”, en Varios Autores. La corrupción política, Madrid, 1997, pág 42 y 43.

⁹ Muriel Patino, María Victoria; “Economía, corrupción y desarrollo”, en: Eduardo Fabián Caparrón. La Corrupción: Aspectos jurídicos y socioeconómicos, Salamanca, 2000, pág 27.

eficiencia económica. Por ello llegamos a un punto donde lo único que importa es la riqueza y el mantenimiento de las ganancias como motores del progreso social. Sus defensores creen en que aspectos de moral, de espíritu o de mística para el progreso económico sin límites hallan campo propicio para la corrupción, y se suele instalar en este modelo político en que vivimos para formar parte de la llamada criminalidad no convencional acompañada por el abuso de poder, pero no solo por el abuso gubernamental que pueda existir, sino también el económico, el financiero, el industrial, el bancario, el tecnológico y el científico¹⁰.

La definición más utilizada por los científicos sociales, es elaborada por el profesor de la Universidad de Harvard Joseph S. Nay; de acuerdo con su explicación, la corrupción es *“una conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales, debido a intereses personales (familia o de allegados) o beneficios monetarios o de orden social; o que viola normas respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales. Está definición incluye conductas tales como el cohecho (utilización de gratificaciones con el fin del influenciar el juicio de una persona de cierta jerarquía), nepotismo (elección por vínculos familiares y no por méritos personales), y malversación de fondos (apropiación ilícita por particulares de recursos públicos)”*.

Debemos acotar con suma importancia, la existencia de la investigación relativa, obra póstuma del historiador Alfonso de Quiroz, denominada, “La historia de la corrupción en el Perú”. Desde una perspectiva histórica el autor nos presenta un país profundamente afectado por la corrupción administrativa y estatal, que puede

¹⁰ Reátegui Sanchez, James. “Los delitos de corrupción de funcionarios y criminalidad organizada”. Disponible en http://perso.unirf.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20080612_49.pdf.

medirse desde las postrimetrías del período colonial hasta nuestros días. Así, la descripción y el análisis en detalle que realiza sobre el abuso de los recursos públicos nos ayudan a entender cómo la corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del país.

1.3. ¿Cómo se manifiesta?

LAMBAYEQUE:

En cuanto a la presencia de la situación problemática en la región Lambayeque; de acuerdo a la evaluación realizada por la Contraloría General de la República a fines del año 2016¹¹, se concluyó que Lambayeque es la región más corrupta de la macrorregión norte. Desde el 2014 hasta la fecha, este órgano de control investigó a 570 funcionarios públicos cuyas actuaciones, presuntamente al margen de las normas, han generado un perjuicio económico al Estado mayor a 500 millones de soles.

Que, la región lambayecana supera en casos de presunta corrupción a las regiones de Piura y La Libertad, por recibir más presupuesto. En esta parte del país hay casos emblemáticos tales como “Los Limpios de la Corrupción” que lideró el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales. Esto implicó que la Contraloría haya iniciado 33 auditorías, de las cuales han terminado 16, habiéndose remitido los informes a la Fiscalía; sin embargo a la fecha lo que se requiere al Ministerio Público es que agilice los trámites porque la población quiere resultados, debido a que existe la sensación de que la Contraloría se quedó en propuestas.

¹¹ <http://larepublica.pe/imprensa/politica/809919-lambayeque-investigan-570-funcionarios-por-corrupcion>

En el ámbito de la región Lambayeque existen 40 auditorías en proceso, las que comprenden al gobierno regional, municipalidades y otras instituciones. La obra de la avenida Chiclayo (distrito de José Leonardo Ortiz), que costó 50 millones 810 mil soles y que ejecutó el Gobierno Regional de Lambayeque, está inmersa en un proceso de auditoría a fin de determinar responsabilidades por las deficiencias técnicas que presentaría. La contratista fue el Consorcio Gamma Norte. También podemos mencionar la pavimentación en la avenida Pedro Ruiz, la obra de saneamiento en el casco central de Chiclayo, la entrega de vales a funcionarios y las compras fraccionadas de combustible, entre otras.

1.4. Descripción detallada la metodología empleada de manera tal que el lector interesado pueda repetir el experimento o el proceso y llegar a los mismos resultados.

1.4.1. Tipo de Investigación y análisis

A. Tipo de Investigación

El tipo de Investigación es Aplicada, también llamada fáctica, porque el objeto de esta investigación es una parte de la realidad concreta que se da en el tiempo y ocupa espacio.

B. Tipo de análisis

Es mixto, predominantemente cualitativo, pero en ocasiones con precisión cuantitativa.

1.4.2. Diseño de la Ejecución del Plan como desarrollo de la Investigación

A. El Universo de la Investigación

El universo de la presente investigación comprendió la sumatoria de todos los datos de los dominios de las variables que se han identificado: Comunidad Jurídica, responsables, empirismos aplicativos, incumplimientos, planteamientos teóricos, normas y legislación comparada.

B. Técnicas, Instrumentos e informantes o Fuentes

En esta investigación se requirió aplicar o recurrir, a las siguientes técnicas de recojo de información:

- a) La técnica del análisis documental:** Utilizando, como instrumentos de recolección de datos: fichas textuales y de resumen; teniendo como fuentes libros y documentos oficiales e internet; que usaremos para obtener planteamientos teóricos, normas, legislación comparada.
- b) La técnica de la encuesta:** Utilizando como instrumento un cuestionario; que tiene como informantes a los responsables de aplicar las normas penales, así como al público en general para recoger su percepción referente al delito de corrupción y su tratamiento jurídico.

1.4.3. Población y Muestra

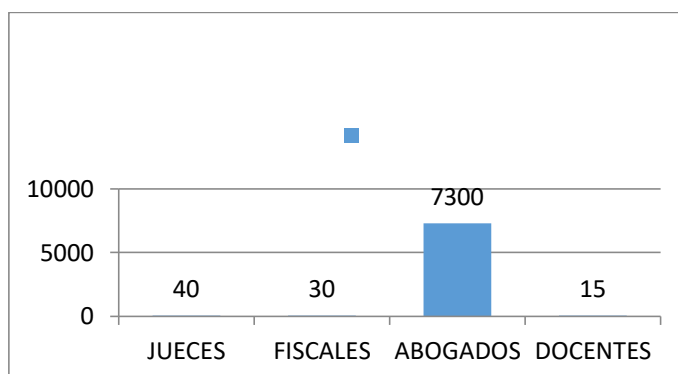
a) Población

El presente estudio comprende una población compuesta por la Comunidad Jurídica, integrada por abogados penalistas, docentes de derecho penal y procesal penal, Fiscales, Jueces; así como a público en general.

De acuerdo al Ilustre Colegio de Abogados, existen una población aproximada de 7300 abogados; del mismo modo de acuerdo al área de imagen institucional de la Corte Superior de Lambayeque existen 40 Jueces, un promedio de 30 Fiscales y según el portal de las distintas Universidades de la

Región Lambayeque se ha computado un total de 15 docentes en la materia. En suma el universo poblacional está compuesto 7385 personas.

POBLACIÓN	
LABOR	CANTIDAD
JUECES	40
FISCALES	30
ABOGADOS	7300
DOCENTES	15
TOTAL	7385



b) Muestra:

Existen ocasiones en las que no es posible analizar a todos los elementos de una población, para ello se selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil,

debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta¹².

➤ **Tipo de muestreo:**

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos (se basan en el principio de equiprobabilidad, ya que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra) y métodos de muestreo no probabilísticos (se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa).

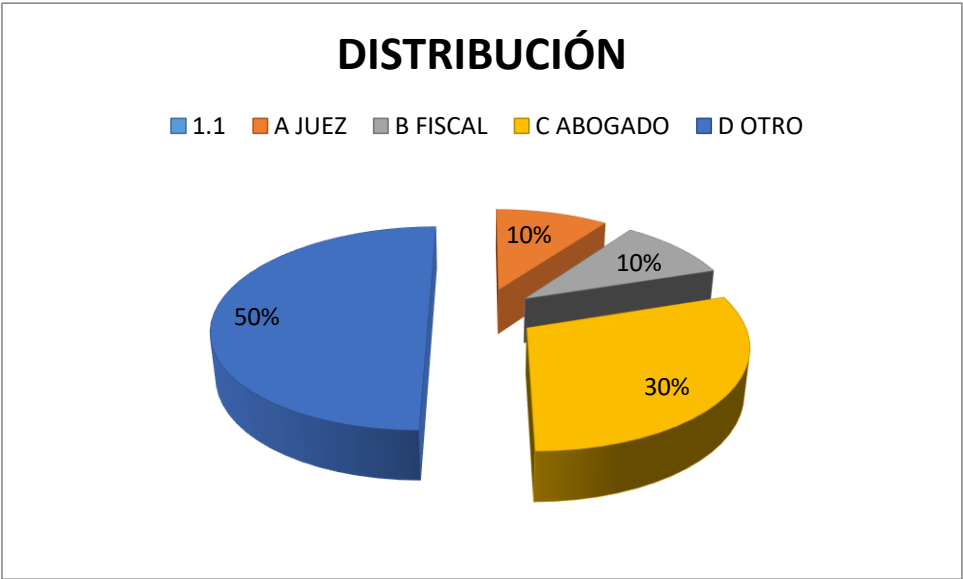
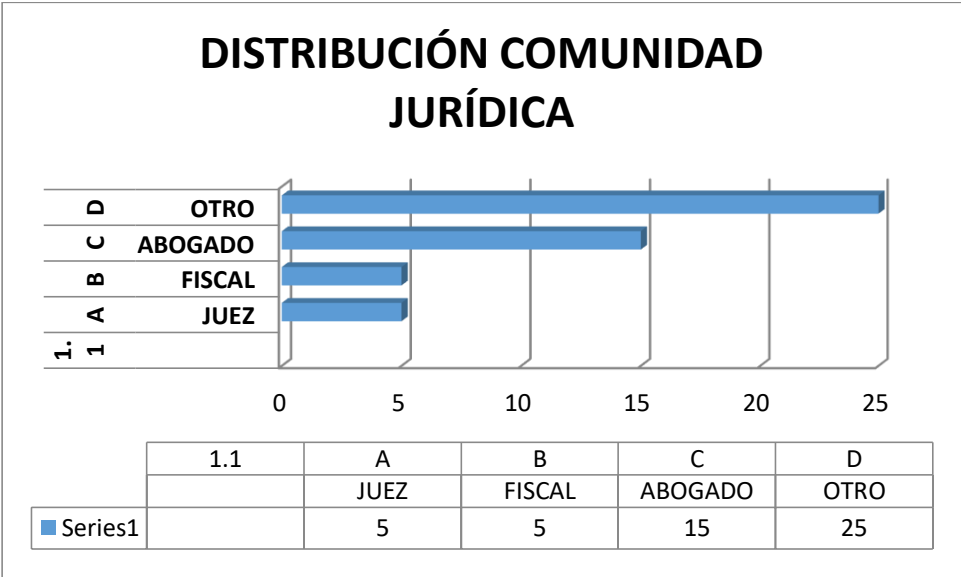
La presente Investigación aplica el tipo de muestreo no probabilístico, para el registro de datos, debido al carácter de la información que se recabó de los responsables, y a la labor especializada de la Comunidad jurídica; habiendo recurrido a criterios determinados para seleccionar a los sujetos que formaron parte de la muestra.

Dentro del tipo de muestreo probabilístico, para seleccionar a la muestra de la variable Responsables, se acudió al método de muestreo por conveniencia, por el cual se seleccionó directa e intencionadamente a los individuos de la población, aquellos a los que se tuvo fácil acceso.

Para seleccionar a la muestra de la variable Comunidad Jurídica, se acudió al método Bola de Nieve, por el cual se localizó a algunos individuos por su labor especializada (Ej. Jueces, Fiscales, Abogados, Docentes), los cuales nos condujeron a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente y confiable.

La muestra determinada para esta Investigación se distribuyó de la siguiente manera:

¹² (Extraído del Blog. Probabilidad y estadística, disponible en la dirección: <http://jaimeprobabilidadyestadistica.blogspot.com/2011/04/muestreo-probabilistico-y-no.html>).



En total se aplicó la encuesta a 100 participantes: 50 miembros de la comunidad jurídica tal como lo indicamos previamente; así como a 50 personas del público en general, lo que nos permitió un equilibrio de los datos para el favorecimiento de la objetividad del estudio.

1.4.2. Forma de Tratamiento de los datos

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes mencionados serán incorporados a programas computarizados, como los aplicativos de MS Office, y con precisiones porcentuales y prelações u ordenamientos de mayor a menor, los promedios o sumas serán presentados como informantes en forma de figuras, gráficos, cuadros o resúmenes.

A. Forma de análisis de las Informaciones

Con respecto a los informantes presentados como figuras, gráficos, cuadros o resúmenes, se calificarán e interpretarán y serán integradas (como promedios de promedios o de sumas de promedios de los positivo y de lo negativo y las causas de lo negativo) que se presentarán como apreciaciones resultantes del análisis.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

2.1. Aproximaciones Conceptuales al término Corrupción.

Para explicar el término en análisis y por ende de estudio, en las próximas líneas se mencionará diversas conceptualizaciones, tanto de doctrinarios jurídicos, como de instituciones, llámese privadas o públicas.

Para Montoya, Novoa, Rodríguez y Torres (2016) “La corrupción es el abuso de un poder encomendado para obtener beneficios particulares (económicos o no) que viola la norma en perjuicio de intereses generales o del interés público”. P 18.

Para Proética (2011) “ El uso de un poder confiado para obtener un beneficio privado indebido”. P01.

Además indica que deben conjugarse tres condiciones para su existencia: la primera de ellas es que debe de existir una Falta de transparencia, tanto para las decisiones, como para la gestión de los recursos, la segunda condición, es la debilidad para tener adecuados mecanismos de control y como consecuencia de ello de sanción, y por último, la incapacidad de los mismos ciudadanos para que adecuadamente o correctamente puedan ellos mismos vigilar la gestión pública.

(...) afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Se trata de un fenómeno que no es unitario ni unidireccional, en tanto no se concentra en un solo sector económico, en una sola institución. (Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción, 2016, p 09).

(...) es un fenómeno que afecta la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el orden público y el sistema jurídico en su conjunto, erosiona los cimientos de toda sociedad democrática y vulnera la libre y leal competencia. (Decreto de Urgencia n° 003-2017).

Esto lo ha tomado en consideración **La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (o conocida por sus siglas CAN)**, en el entendido que, la corrupción al tener varias direcciones para su actuar, es decir, al poseer la cualidad de afectar el contexto político, social, económico y gubernamental, en sus diferentes niveles o grados tiene impacto directamente en la economía del país, y por sobre todo, en la economía de los hogares. Las prácticas de pequeña corrupción y de gran corrupción, todas ellas afligen a la gobernabilidad como institución y la confianza de la ciudadanía en los actores políticos y gubernamentales.

Para el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (conocida por sus siglas **IDEHPUCP**), con una visión desde su impacto, manifiesta en resumidas cuentas lo siguiente: la corrupción al ser un fenómeno que no solamente tiene impacto en el ámbito de la estabilidad política o el uso eficiente de los recursos públicos o de la aceleración para el crecimiento económico, sino lo que es peor, transgrede los derechos fundamentales de todos, y la calidad de vida, de la población más pobre del Perú; esto se debe al no existir un uso adecuado de los recursos y una política establecida que permita inferir que van actuar conforme los cánones para una gestión eficiente y optima de las *res publica*, esta afectación, tanto de la calidad y de los derechos fundamentales, se puede observar más palpablemente, en los servicios de Salud, educación, seguridad ciudadana, en realidad en todo servicio que por mandato constitucional se encuentra establecido en la parte dogmática de la constitución.

Según Kindháuser (2009) “ (...) la corrupción es la vinculación contraria a intereses de una ventaja con el ejercicio de un poder de decisión transferido”. P 21.

La corrupción se produce cuando el poder que ha sido entregado por el Estado a una persona a título de administrador público –o sea, para gestionarla de acuerdo con los intereses generales-no se utiliza correctamente, al desviarse su ejercicio, defraudando la confianza de sus

mandantes, para obtener un enriquecimiento personal. (De la Mata, 2009, p42)

Machado (2006) citando al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas – PNUD (año 2003). “La corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para beneficio privado mediante el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude, la extracción de dinero para agilizar trámites, o la malversación de fondos”. P 05.

La corrupción abarca actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí mismos o para terceros. Entre las actividades corruptas se encuentran el pedido, la oferta o el recibo de sobornos, consideraciones o comisiones clandestinas, la extorsión, el uso impropio de información o bienes, y el tráfico de influencias. (Machado, 2006, citando al Banco Interamericano de Desarrollo – BID, año 2001).

Definir corrupción como el abuso de posición ejercitado por un servidor o funcionario público, con un beneficio extraposicional directo o indirecto (para el corrupto o de los grupos del que forma parte este), con incumplimiento de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los servidores públicos (Ramón citando a Villoria y Jiménez: 2014, p 64).

La corrupción es un modo particular de ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima: Esta se encuadra con referencia al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar decisiones” (Diccionario de la Ciencia Política, 1988, p. 438).

En tal sentido, de los conceptos mencionados se puede tomar puntos en común, que permitirá tener una comprensión más lata o adecuada del término corrupción como fenómeno delincuencial.

En todos los conceptos dados, se puede observar básicamente los siguientes componentes, tanto intrínsecos como extrínsecos:

1. Poder encomendado a funcionarios y servidores del Estado, éstos que deberían ser unos burócratas (en el sentido estricto y positivo de la palabra), pues están o al menos así se entiende al servicio del Estado y, específicamente, de la entidad o institución del que son parte. El poder entregado a estos funcionarios-servidores, como es obvio se rige bajo premisas muy claras, entre ellas se tiene, los principios rectores de la gestión Pública, los principios del que deben guiarse todo empleado público, las normas éticas-administrativas y, por sobre todo, los impedimentos o las proscripciones de los dispositivos penales; tal poder, a pesar de las disposiciones indicadas *grosso modo*, que en líneas generales deberían impedir que las autoridades realicen actos que afecten el correcto funcionamiento del Estado, más bien, se utiliza (tal poder) precisamente para la ejecución o realización de los actos de corrupción, aprovechando su situación de autoridades.

2. Desviación de los recursos estatales, el erario es utilizado con fines o como medio de aprovechamiento de las autoridades cuyo fin ulterior es enriquecerse (se precisa que tal circunstancia también es para que otros se beneficien) con el mal uso que se le da a los caudales, bienes o ganancias del Estado, esta desviación, es producto de los malos mecanismos, deficiencias o vacíos propios del Ordenamiento jurídico positivo.

3. Medidas no aptas de control de actuación de los Funcionarios y Servidores Públicos. Todo sistema de control, entiéndase por tal, como medio de fiscalización, inspección y comprobación de las actuaciones de las autoridades, tiene vacíos, defectos o mala aplicación de los mismos, que son aprovechados por los corruptos, a fin de realizar sus acciones de desviación del funcionamiento estatal.

4. Falta de transparencia en las decisiones Gubernativas. Este tipo de criminalidad, que por cierto, ya se está viendo como criminalidad organizada,

pues conlleva en la mayoría de los casos, una estructura organizada jerárquicamente, con permanencia y estabilidad en el tiempo entre sus miembros (los cuales en su mayoría son más de tres), se sirven de las falencias del sistema para que sus decisiones adoptadas no sean conocibles de inmediato por la población, por ejemplo las concesiones de las vías, muchos de la población se enteran que tal o cuál carretera se encuentra concesionaria recién cuando la utilizan, otro ejemplo palpable el asunto de las contrataciones del Estado, sobre todo en lo que se refiere a la contratación directa, pues, la población se da cuenta de dicha contratación cuando ya se dio y no en el ínterin del mismo.

En ese orden de ideas y dadas las consideraciones dadas, también se puede decir lo siguiente:

a) Corrupción requiere, en primer lugar, una relación trilateral. A una persona se debe haber confiado la tarea de actuar en interés de un tercero. Debe ser, como ya se dijo, encargado de un tercero. Además, para que la corrupción valga la pena, el encargado debe por lo general ser una persona que pueda tomar decisiones de cierto peso. En primera línea hay que pensar aquí en decisiones y actuaciones jurídicamente relevantes. Debe haber también una persona que pueda otorgar una ventaja. Si bien esta persona es, por lo general, el afectado por la decisión, puede ser perfectamente ser un tercero ajeno por completo.

b) En la definición propuesta, el concepto de ventaja no se refiere necesariamente a un beneficio financiero. Por el contrario, todo lo que pueda motivar a un ser humano, puede también entrar en consideración como ventaja.

c) Para que exista corrupción, el otorgamiento de ventaja debe estar referido a una posición de deber del encargado. Quien luego de un partido invita una cerveza a un policía que juega fútbol en su tiempo libre, no comete corrupción

alguna. Importante es además que la relación entre la posición de deber y la ventaja sea indebida y, lleve encargado a una incompatibilidad de intereses. (Kindhäuser, 2009, p22).

La doctrina nacional como lo refiere Ugaz, también trata de caracterizar los siguientes factores, para que se dé la corrupción (sobre todo a gran escala): la primera de ellas es el **factor económico**, pues involucra grandes ingestas o sumas exorbitantes de cantidad de dinero o bienes, el segundo es el **factor político**, dichos actos de gran corrupción son producidos, asistidos, tolerados, dirigidos o conducidos por personas, obviamente, con altas cuotas de poder tanto en el gobierno o sobre el gobierno, el tercer punto de característica es el denominado **factor sistémico**, que ve a la corrupción como actos organizados, estructuras o planificados que ingresan, incluso propiamente, al sistema o funcionamiento del país o a las regiones afectadas, esto se puede apreciar en muchas ocasiones, o al menos, así se escucha en diferentes programas de investigación, e incluso investigaciones fiscales, que por ejemplo cuando se hace alguna obra pública, solo por mencionar algún ejemplo, el de alcantarillado, la empresa o consorcio que ganan, acuerdan, con funcionarios de las municipales(gobiernos locales) para que determinados porcentajes de las utilidades, ingresos o ganancias que perciban producto de dicha obra vaya a las autoridades estatales (funcionarios) y por último, el **factor impunidad**, al haber indicado ya los factores anteriores (**político, económico y sistémico**) se podría decir, que este último factor en realidad es una consecuencia de ellos, porque la gran corrupción ya está generalizada en la sociedad, y cuyos autores directos, indirectos o instigadores son personas con altas cuotas de poder, al tener este poder, logran impedir, por diversas razones, la acción de la justicia.

Estos factores, que se consideran indispensables para la realización de la gran corrupción se especificarán de forma más lata sus contenidos para una mejor comprensión sobre los mismos.

2.1.1. -A.- Factor Económico.

Como ya se había indicado en las líneas precedentes, en la denominada gran corrupción se mueven grandes cantidades de sumas de dinero, aunque se debe precisar, que no es el único factor para los actos de corrupción, claro está el que haya montos exorbitantes de dinero o bienes de por medio, incentiva a la realización de los actos de corruptela, a mayor ganancia, hay más probabilidades de corrupción entre los funcionarios y servidores públicos.

En esa línea refiere Ugaz (2016) “El factor económico probablemente sea uno de los primeros que viene a la mente cuando se trata de distinguir la Gran corrupción de las pequeñas o medianas corruptelas. Aunque la gran corrupción constituye un negocio de imprecisa aritmética”. P283.

Dicho en otro sentido, los que cometen dichos actos punibles, ven como se acrecienta su patrimonio. Ya sea de forma directa (aumento en sus ingresos sin mediar alguien) o de forma indirecta a través de alguna o algunas interpósitas personas (lo que en lenguaje común se les denomina testaferros) las cuales también se ven beneficiadas de alguna manera, recibiendo pequeñas cantidades de dinero, según sea el caso, u obteniendo un trabajo fijo para ellos o a algún familiar, claro está que dichos funcionarios o servidores públicos, no van a dejar así nomás la titularidad de los bienes que se puedan producir por parte de sus actos de corrupción, van a redactar y de hecho lo hacen, los denominados contradocumentos (negocio jurídico que valgan verdades, no está proscrito por el ordenamiento jurídico, ergo, se entiende que lo permite).

2.1.1. B.- Factor Político.

El elemento político, al menos, para la denominada gran corrupción, es cuasi determinante para la configuración de las conductas delictivas de corrupción al más alto nivel, como se sabe el poder política es determinante para la actuación de actos de administración o actos de gobierno (contrataciones públicas y políticas de Estado).

La coyuntura actual, permite observar ello, conocidos casos de corrupción como el caso Odebrecht, en el que se puede observar como el factor político fue determinante para dichas acciones.

Desde esta perspectiva, los casos más graves de corrupción se caracterizan por ser ejecutados, auspiciados, dirigidos o tolerados por personas con altas cotas de poder, *de facto o de iure, en o sobre* el gobierno. (Ugaz, 2016, p 283).

La corrupción que más se expone en los medios noticiosos a través del mundo es la de naturaleza política. Se origina y crece dentro del seno del poder del Estado. (Ramón, 2014, p 66).

El Estado es el que organiza un sistema de corrupción de carácter nacional. (...) se alimenta del debilitamiento de las instituciones sociales y a su vez aporta a ese mismo debilitamiento. (...) política implica una estructura del y desde el Estado. (Ramón, 2014, p 66).

Además se podría decir que la corrupción al más alto nivel, favorece a las clases políticas que se encuentra inmiscuidas en ellos, a decir de:

(...) La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. Respecto a la clase política consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control. (Ramón, 2014, p 68).

En otras palabras, la clase política se encuentra en una situación de conformidad con dichos actos (corruptos) pues les “favorece” para que se mantengan en el poder.

2.1.1. C.- Factor Sistémico.

Cuando la corrupción deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en un elemento más de la dinámica de funcionamiento de un país o territorio, es posible hablar de corrupción sistémica.

El factor sistémico puede darse de forma espontánea o de forma jerarquizada y establecida ((...) la gran corrupción posee contornos en buena parte coincidentes con los del crimen organizado: estructura piramidal jerarquizada, fuerte cohesión interna, división del trabajo, etc.) (Ugaz, 2016, p 284).

Este factor denominado sistémico, tanto en su forma espontánea, como jerarquizada y establecida, desde la óptica señalada se podría decir que es parte ya de la sociedad, de allí su denominación, pues como se sabe sistémico es aquello que es perteneciente a la totalidad de un sistema, en ese entendido el sistema sería la sociedad como tal, o sea, se observa a la corrupción como algo ya cotidiano, propio del quehacer de la actividad del funcionario o servidor público y que los ciudadanos (algunos) de alguna u otra manera la aceptan, verbigracia, cuando se les pide “favores” a los Policías para que no imponga una multa por infracción de tránsito.

Tanto la corrupción ha afectado a la sociedad, que en Alemania se ha pensado el siguiente tipo penal:

Quien en una decisión con consecuencias para otro no se atiene a las reglas y por ello solicita, se hace prometer o acepta una ventaja para sí o para un tercero, será castigado. (Ugaz, 2016, p 284).

Aunque a decir verdad, este tipo penal es muy amplio, abierto o indeterminado, que valgan verdades amplia en demasía la sanción para cualquier acto, no solo de corrupción sino también para cualquier conducta que pueda ser dañosa para otros, transgrediendo de esta manera el principio de legalidad y de su subprincipio de taxatividad de la norma penal.

Si en Alemania ya están pensando con un tipo penal de esta naturaleza, es porque su realidad criminal, con referencia a la corrupción de funcionarios desborda su normativa penal. En el Perú como país receptor de normas jurídicas, lo más probable es que en cualquier momento se presente algún proyecto de ley con un tipo penal parecido o como en la mayoría de veces

sucede una copia de este tipo penal, es por eso que se menciona y comenta en el presente trabajo.

El Perú, como es obvio, no ha escapado a estos sucesos, también, la realidad criminal de la corrupción, se podría decir, que ha desbordado la normativa ya sea sustantiva como procesal para la lucha contra la corrupción, es de Perogrullo lo que ha acontecido en el denominado caso Odebrecht, esta multinacional que ha ganado distintas licitaciones con el Estado peruano y muchos otros Estados en el resto de Latinoamérica, se ha visto envuelta en varias investigaciones de índole penal, en diferentes partes del orbe, sobre todo en Brasil, donde a partir de procesos especiales de delación a altos funcionarios de dicha empresa, se ha llegado a establecer que ellos pagaban a funcionarios estatales para ganar dichas licitaciones, e incluso se ha mencionado a Políticos de alta esfera y funcionarios de alta escala (Presidentes, ex ministros, viceministros, solo por citar algunos ejemplos) tan es así que el ex presidente Alejandro Toledo, se encuentra inmerso ya en una investigación Fiscal y con orden de captura y varios otros funcionarios de su gobierno con la medida de coerción personal de prisión preventiva.

A propósito del caso Odebrecht, se dice lo siguiente en el Perú.

Más aún, la corrupción sistémica que vive nuestro país corroe la misma fábrica social. Las empresas corruptas suelen ofrecer charlas, consultorías y trabajos varios a miembros de la sociedad civil a cambio de su apoyo o, cuando menos, su silencio. (Mendoza, 2016, sp).

2.1.1. D.- Factor Social.

Dicho factor, refleja el impacto que tiene la corrupción a la sociedad en cuanto al nivel de progreso se refiere o el de posibilitar las condiciones necesarias para que la ciudadanía tenga progreso en cuanto a su desarrollo económico.

(...) a un daño que se traduce no solo en pequeños costes monetarios distribuidos entre las distintas economías domésticas, sino en perjuicios

patrimoniales de gran calibre que pueden llegar a afectar a la propia economía del país o región. (Kindhäuser, 2009, p35).

(...) acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político. (Ramón, 2014, p 68).

(...) los actos de corrupción impactan negativamente en el costo de obras de infraestructura o servicios públicos en desmedro de la ciudadanía, lo cual afecta al interés general del Estado. (Decreto de Urgencia n° 003-2017).

En otros términos, el factor social de la corrupción, se ve a este fenómeno delincuenciales como un elemento que daña o tiene repercusión en la sociedad en su conjunto y, no solo en el ámbito patrimonial o económico (perjuicio patrimonial al Estado) sino también en el ámbito de las libertades y derechos constituciones de los ciudadanos como tal.

2.1.1. E.- Factor Impunidad.

Desde la visión de la teoría de las penas, se dicen que éstas tienen dos funciones claves, la primera denominada prevención general y la segunda prevención especial, cuando se habla de la primera, se refieren a que la imposición de las penas sirven como mecanismo disuasivos de posibles conductas criminales, la segunda se refiere a que a través de la sanción-pena, a un sujeto activo en particular se logra reprimir o disuadir, tanto las futuras conductas del ya sancionado, como del resto que ve tal situación (sanción-pena).

Porqué se considera pertinente empezar hablando de las penas y, sus funciones, tanto la prevención general como especial, pues en principio la impunidad que se observa en varios casos de corrupción, ya sea de pequeña o gran corrupción, genera o hace pensar que dichas conductas no son descubiertas (y por ende no son sancionables) o si son descubiertas (no son penadas), esa sensación de impunidad, que genera la no sanción de dichas

conductas, de alguna u otra manera “incentivan” a que los funcionarios o servidores públicos realicen actos de corrupción.

Antes de hablar, propiamente del factor impunidad, se considera adecuado hablar del término punibilidad, en el estricto sentido jurídico de la palabra.

La voz “punibilidad” tiene dos sentidos que debemos distinguir claramente:

- a) punibilidad puede significar merecimiento de pena, ser digno de pena; en ese sentido todo delito (...) por el hecho de serlo, es punible,
- b) punibilidad puede significar posibilidad de aplicar pena; es decir, no a todo delito se le puede dar lo que tiene merecido. (Zaffaroni, 2013, p 794).

En contrario sentido, si punibilidad es la aptitud que tiene el Estado de sancionar aquellas conductas merecedoras de pena, la impunidad sería, aun cuando determinada conducta (típica, antijurídica y culpable) es merecedora de una sanción o penalidad, por diferentes motivos (que se va denominar externalidades, por cuanto, son por impedimentos, más que legislativos, externos a la legislación propia, verbigracia desidia de los órganos persecutores en el ámbito penal) que llevarían, en primer orden, a la no investigación (ya sea preliminar o preparatoria) y, en segundo orden, al no enjuiciamiento de los mismos, y si lo hubiera, en varios casos se da la absolución de aquellos (es decir, el no establecer la culpabilidad de los funcionarios imputados por delitos de corrupción de funcionarios).

Actualmente dada la coyuntura política y criminal que vive el Perú el gobierno se ha visto en la imperiosa necesidad de demitir un conjunto de paquetes normativos, como decretos de urgencia y decretos legislativos, en ese sentido para referirse a la lucha contra la impunidad de estos delitos el Estado indica lo siguiente:

(...) es responsabilidad esencial del Estado combatir frontalmente la corrupción, erradicar la impunidad, así como implementar medidas efectivas

conducentes a proteger la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la libre y leal competencia. (Decreto de Urgencia N° 003-2017).

La doctrina nacional, sobre este punto en particular (a la impunidad) refiere lo siguiente:

(...) Se debe a razones bien distintas, y que normalmente pivotan entorno a dos motivos principales: el temor a las represalias de quien ejerce el poder corrupto, o la propia permeabilidad de la organización policial y judicial a la corrupción. (Ugaz, 2016, p 286).

El factor impunidad que tiene dichas acciones desde hace varios años, se puede decir, incluso que desde el inicio de la época republicana del Perú, ha llevado a que cada día más se den dichos actos, y a que la ciudadanía desconfíe de sus autoridades.

2.2. Instituciones (no necesariamente estatales) vinculadas a la lucha contra la corrupción de funcionarios.

Según el Barómetro Global de la Corrupción, la población en el Perú en el año 2010, tenía la percepción que la corrupción en el país había aumentado en un 79%, “percepción” que es un indicativo claro de lo que sucede en el país, no solo por datos estadísticos, pues ellos solo reflejan las probabilidades que se puedan estudiar conforme a los datos recolectados, mas no, las denominadas cifras negras-oscuras, aquellas que no aparecen en las investigaciones, pero que no quitan su existencia. Empíricamente, es decir, de la realidad misma se puede observar que la corrupción en el Perú, así como lamentablemente en el resto de Latinoamérica, se está acrecentando o visto de otra forma se está descubriendo y por tanto, investigando, procesando y sancionando dichos actos que violan las normas éticas, administrativas y penales del Estado.

Tal situación en realidad no es nueva, claro está no se descubre la pólvora con esto, el problema-fenómeno de la corrupción estatal se ha

presentado desde los albores de la historia, se podría incluso decir, que es un hecho histórico, propios de las sociedades humanas.

Sobre esto se puede decir:

El binomio funcionario-delincuente ha existido desde siempre, en todas las épocas de la historia. Por ello se ha dicho alguna vez que, siempre donde hubo una fuente de poder económico y político, existió esta clase de criminalidad. Es una criminalidad que se mueve en el ámbito del abuso de poder político y económico. (Bounpadre, 2009, p330)

Siguiendo esa línea de ideas y, después de lo desastroso que fue para el erario la administración que tuvieron los gobiernos, durante toda la historia Republicana del Perú, se creó mediante DECRETO SUPREMO N° 016-2010-PCM **La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (o conocida por sus siglas CAN)** en el año 2010. Tal institución que, conforme lo indica el artículo N°01 del citado decreto tiene:

(...) objeto de coadyuvar en la articulación, coordinación y planificación, a mediano y largo plazo, de las acciones a cargo de las Entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

Asimismo, se encarga de realizar la supervisión y seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

La CAN no es la única institución que, producto de la corrupción, casi institucionalizada en gran parte del orbe y, por sobre todo, en el Perú que se ha creado, también está **Proética** la cual es:

La primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Desde entonces, venimos realizando diferentes actividades teniendo como objetivo erradicar la corrupción en el país, estudiando este fenómeno y sus causas, así como incentivando a otras instituciones a involucrarse en esta problemática y tomar acción frente a ella.

Desde su fundación y hasta la actualidad, Proética está conformada por cuatros instituciones: la Comisión Andina de Juristas (CAJ), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Civil Transparencia y la Asociación de Exportadores (ADEX).

Las Universidades erigen instituciones para la lucha contra la corrupción, tal es el caso del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (conocida por sus siglas **IDEHPUCP**) el cual desde enero del 2011, ejecuta el denominado Proyecto Anticorrupción, en el cual se elaboran talleres enfocados para la capacitación a jueces y fiscales que tengan que ver con el subsistema anticorrupción, en específico los delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios; además tiene una plataforma virtual actualizada con datos propios del tema para la prevención y sanción de los delitos de corrupción.

Dicha página, es importante por el efecto práctico en la búsqueda de información relevante, tanto para jueces, fiscales, abogados, e incluso para los estudiantes de Derecho y para la ciudadanía en general que quiere conocer más sobre este asunto. El efecto práctico consiste en que tiene datos ordenados y estructurados de la normativa nacional y de la jurisprudencia vinculados al tema de delitos de corrupción de funcionarios, así como consideraciones doctrinarias de algunas decisiones fiscales (disposiciones de no formalizar investigación preparatoria, o de solicitar el sobreseimiento de casos) y judiciales (resoluciones que absuelven a imputados por estos delitos).

Asimismo es necesario mencionar lo siguiente, que por mandato constitucional, inciso 04 y 05, del artículo 159 de la constitución, el Ministerio Público es el Organismo constitucionalmente autónomo, encargado de conducir la investigación del delito y de ejercitar la acción penal pública; por tal motivo, y dado la necesidad de la existencia de fiscales especializados en el ámbito de la lucha contra la corrupción, es que existe **las fiscalías especializadas en la materia**, para darle un plus a las investigaciones (a mayor especialización de los fiscales, mayor logro de las investigaciones) y así

obtener casos cuyos grados de probabilidad de sentencia condenatorios (si fuera el caso) sean altos.

El poder judicial tampoco se queda atrás en la estructura y lucha contra la corrupción, es así que, mediante Resolución Administrativa N° 154-2017-P-CSJLI/PJ, se dispuso regularizar que a partir del 1 de marzo de 2017, el Juzgado Penal Colegiado perteneciente al **Subsistema Anticorrupción para delitos por corrupción de funcionarios y crimen organizado** integrado por nueve juzgados unipersonales en lo penal.

Por lo que, a través de esta nueva conformación de los juzgados penales colegiados, pertenecientes al subsistema anticorrupción, se busca dar mayor eficiencia para el procesamiento y juzgamiento en esta clase de delitos.

2.3 NOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Reátegui (2015) entiende a la Administración Pública “como un sistema vivo y dinámico, que participa activamente de la vida social y establece relaciones múltiples entre las propias entidades estatales y paraestatales o con entidades particulares o con los ciudadanos”. p 829.

Según Salinas (2014) “ la administración Pública es el servicio público que cumple el Estado por medio de sus funcionarios o servidores para lograr su fin último, cual es el bienestar común”. p 03.

En tal sentido, Ferreira (1995) “(...) es entendida como actividad cumplida o realizada por los funcionarios y servidores públicos, encargados de poner en funcionamiento al Estado, orientado al cumplimiento de sus fines y funciones, sometidos a una jerarquía o niveles en todos sus órganos o entidades”. p 04.

De la misma manera, Montoya, Novoa, Rodríguez y Torres (2016) “ (...) como aquella actividad que los funcionarios y servidores públicos desempeñan

para que un Estado constitucional y de Derecho pueda cumplir con su rol prestacional''. p 36.

(...) Administración es ante todo, organización (ordenar económicamente los medios de que se dispone y usar convenientemente de ellos para proveer a las propias necesidades), y si se le adiciona el adjetivo pública, se estará vinculando a la idea de manejo, gestión o gobierno, esto es, el concepto de poder público o actuación del Estado a través de sus diversos organismos para vincularse con los particulares o para desarrollar sus propios planes o proyectos de desarrollo. (Ángeles y Frisancho, 1998 p. 15)

Administración pública comprenderá entonces a las funciones y competencias específicas de los órdenes legislativo, judicial, ejecutivo, electoral, organismos autónomos del Estado y demás instituciones especializadas donde se desarrolle función pública a cargo de agentes oficiales. (Rojas, 2002 p. 15)

(...)Es el conjunto de poderes, órganos o entidades dotadas de una esfera de atribuciones o competencias; en ejercicio de sus atribuciones o potestades conferidas. Patrón, 1998 p. 44)

La administración pública debe entenderse como un sistema socio dinámico, que genera relaciones interpersonales entre los que integran la misma con los administrados, las cuales, por su importancia e interés social, justifica un marco normativo que encause dichas relaciones al régimen de legalidad propio de un Estado Constitucional de Derecho.(Benavente, 2002, p79).

(...) al conjunto de órganos al que por ejercicio directo o delegado del poder público, le compete preferentemente la realización de la función administrativa, entendida ésta última como la actividad jurídica del Estado, consistente en la ejecución de normas generales preestablecidas. (Ramón, 2014, p 66).

Administrar, según la Real Academia Española, es servir. En consecuencia, administración pública es el servicio público que cumple el Estado por medio de sus funcionarios o servidores para lograr su fin último, cual es el bienestar común. Al ser la administración pública algo abstracto, el servicio público, es algo más concreto, (Salinas, 2014, p 03).

Entonces como colofón se puede decir que, **La Administración Pública**, desde una óptica de Estado de Derecho Constitucional, viene hacer el conjunto de instituciones estatales (englobando, por supuesto, a sus miembros), que tienen por función principal desarrollar el ejercicio de la función pública y, por tanto, de la aplicación de la leyes para el bien común. Esta última conceptualización esgrimida, muestra la importancia de la Administración Pública; para que un Estado que se atribuya ser democrático, como dice ser el Perú, desarrolle adecuadamente.

Asimismo se indica que cuando un funcionario o servidor público realiza un acto de corrupción no solo está traicionado a su institución, sino que además, lo está siendo al Estado en su conjunto, a la población-pueblo- que tiene por expectativa que las instituciones públicas se desenvuelvan en función al bienestar general y, no con finalidades individualistas transgresoras de normas (tanto penales, administrativas como éticas).

2.3.1.- CARACTERÍSTICAS

La administración pública presenta las siguientes características:

- **Organización y funciones.-** Es necesario que la administración pública en sus variadas facetas singularice su función (legislativa, administrativa, judicial), precise el marco de valoración de su actividad y de esta forma se podrá establecer la tutela penal con más o menos acierto. Ciertamente, la administración pública presenta un cuadro organizacional donde quedan establecidas las líneas jerárquicas y la forma y modo de presentación de su servicio.

- **Normas y procedimientos.-** La administración pública cuenta con un cuerpo normativo que regula sus funciones y las relaciones que genere con los administrados; conllevando que, si se presentan contingencias, circunstancias o riesgos en el ejercicio de tales funciones y/o relaciones, pero se presentan dentro de ese cuerpo normativo, todas estas situaciones se convierten en riesgo permitido.

- **Potencial humano.-** Esto indica que la administración pública cuenta con agentes dentro de su organización y que estos agentes asumen responsabilidad por las funciones que ejercen, las cuales pueden derivar según sea el caso en responsabilidad administrativa o responsabilidad penal.

- **Circunstancia o coyuntura,** en que le corresponde actuar al funcionario que va a tomar una decisión respecto a una eficiente conveniente acción. administrativa, en la que se resuelve, aconseja o asume una responsabilidad, sobre la base no solamente a la estructura del organismo y a las normas de procedimientos vigentes, sino de manera fundamental a su actitud humana, fruto de sus conocimientos, de su experiencia, de su honradez y de su facultad discrecional que su autoridad moral, la realidad política y social y la ley le franquea, según el caso.

- **Contexto histórico – social.-** Mediante este se orienta y determina el ambiente político y social que rodea a la administración y a la coyuntura que se presenta en el momento de resolver. (Benavente, 2012, p 80).

2.4.- FUNCIONARIO Y SERVIDOR PÚBLICO, NOCIÓN GENERAL.

2.4.1. Funcionario Público.

(...) son los agentes públicos que tienen potestad o capacidad de decisión y de representación del Estado o del organismo público en cual realizan sus

actividades, tanto en sus relaciones la interior de la entidad estatal así como el exterior. (Reátegui, 2015, p 838).

La ley Marco del Empleo Público, en su artículo 4, da la siguiente concepción de Funcionario Público:

Funcionario público.- El que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas.

El Funcionario Público puede ser:

- a) De elección popular directa y universal o confianza política originaria.
- b) De nombramiento y remoción regulados.
- C) De libre nombramiento y remoción.

A nivel internacional la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (en adelante CNUC), en su artículo 2, indica lo siguiente:

A los efectos de la presente Convención: a) Por “funcionario público” se entenderá:

i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo;

ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;

iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá

entenderse por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte.

El concepto de funcionario público implica una dirección u orientación, además de una responsabilidad, en el desempeño de un cargo de naturaleza pública; el funcionario público es quien ejerce autoridad en la función pública de la administración, y como persona física encarna un determinado órgano o ente del Estado, o aquellas cuyas decisiones representan la voluntad de un órgano o ente administrativo.

De modo que el funcionario público es aquella persona natural o física con poder de decisión que presta servicios o trabaja para el Estado.

Su poder de decisión y de representación, en forma expresa, determina o ejecuta la voluntad estatal a través del desarrollo de actos de naturaleza diversa, orientándolo siempre a la realización del bien común, que viene a ser su finalidad última. (Salinas, 2014, p10).

En tal sentido, funcionario Público, vendría hacer para efectos penales, aquella persona natural, que ejerce función pública, ya sea, por delegación de facultades estatales o por designación de la población (independiente del vínculo legal o contractual que tenga), que tiene la potestad de decidir sobre asuntos de la *res publica*, cuyas potestades están claramente delimitadas por la normativa y que tiene el deber ético y legal de actuar con probidad.

2.4.2. Servidor Público.

Lingüísticamente, se entiende por servidor, a aquella persona que se encuentra al servicio de algo o alguien. Partiendo de allí, Servidor público vendría hacer, aquella autoridad (investida como tal por mandato de la ley) que se encuentra al servicio de la administración pública, controlado y regulado por ésta.

(...) es aquella persona natural que también presta sus servicios al Estado, pero sin poder de decisión. Es trabajador estatal sin mandato que brinda al Estado sus conocimientos técnicos y profesionales en tareas o misiones de integración o facilitación de la que realizan los funcionarios públicos en el cumplimiento del objetivo de la administración pública: el bien común. El servidor o empleado público siempre está en una relación de subordinación frente a los funcionarios. (Reyna, 2013 p.73)

Los servidores o empleados Públicos no resultan vinculados a la Administración Pública con la misma intensidad que los funcionarios, pues su nivel de deberes y obligaciones no son de la misma magnitud que la de estos, incluso normalmente no desempeñan cargos decisivos y tampoco están a cargo del presupuesto.

La Novena Disposición Final de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, conceptualiza y unifica al concepto de servido y funcionario público.

Servidor o Funcionario Público.- Es para los efectos de esta Ley, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades.

Entonces como conclusión, se puede decir, que el servidor público, no tiene las mismas potestades, ni prerrogativas que los funcionarios públicos, pero que también realizan función pública, independientemente de régimen contractual que tengan con el Estado.

2.4.3. La imprescriptibilidad y la inhabilitación en los delitos de corrupción de funcionarios.

En reiteradas oportunidades se ha planteado, tanto dogmáticamente (sector minoritario) como legislativamente, que en los supuesto de los delitos contra la administración Pública y por ende en los delitos de corrupción de

funcionarios, se extinga- desaparezca la institución de la prescripción de la acción penal, pues los que están a favor de dicha medida, consideran que de esa manera se podría juzgar y sancionar como se debe a quienes en algún momento cometieron este tipo de delitos, que la prescripción solo genera impunidad y desazón en la población que ven que por razones netamente jurídicas no se logra sancionar a los “corruptos”, porque ellos utilizan dicha institución a su favor, es más actualmente en el congreso se aprobó un proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de delitos contra la administración pública, pero solo en los delitos más graves y concurrentes, aunque por cierto, se debe precisar que tal aprobación será nuevamente votada en la siguiente legislatura.

La figura de la prescripción de la acción penal, es una institución que constituye la extinción de la acción penal, por el mero transcurso del tiempo, bajo la premisa que el tiempo elimina los efectos de la infracción, y que solo queda recuerdo social de la conducta, además por razones investigativas, cuando pasa mucho tiempo sin que se investigue determinado acto, es ya muy difícil poder realizar una investigación adecuada. En resumidas cuentas se debe a factores de política criminal, el Estado debe perseguir los delitos a penas sepa de ellos, en un plazo razonable, siendo eficiente y eficaz.

Si se elimina la prescripción para estos delitos, según quienes proponen esto, no habría impunidad. Hay algo que parece que no han analizado, si los funcionarios, autoridades o instituciones encargadas por mandato constitucional y legal de perseguir, combatir, investigar y sancionar los delitos (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional) tienen, valgan verdades, todo el tiempo del mundo para ejecutar sus acciones, llevaría a que éstos tengan desidia o falta de interés de cumplir con sus deberes, al menos de forma inmediata, porque como no prescriben podrían hacerlo en cualquier momento.

Otra situación, se podría dar el caso que, dichas instituciones se vean rebasadas de casos antiguos, que no fueron investigados de inmediato, y de

casos nuevos que requieren de una investigación actual e inmediata. No se cuenta con personal suficiente ni recursos adecuados, como para que el Estado pueda llenarse de casos.

En cuanto a **la inhabilitación** se refiere, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha indicado que entre las medidas anticorrupción (como es el caso del Decreto Legislativo N° 1243) que va a plantear su gobierno y ejecutar está la de la muerte civil, sobre lo dicho en particular es necesario hacer una precisión técnica jurídica, la denominada muerte civil está proscrita por el ordenamiento jurídico, se encuentra totalmente desterrada, por lo que parece que el presidente ha enredado términos, la muerte civil es quitarle a un sujeto de Derecho -en específico una persona natural-, sus derechos y libertades políticas y civiles y otra cosa muy distinta es **la pena de inhabilitación perpetua**, que por cierto no se encuentra proscrito, por lo que solo bastaría una modificación de índole procesal penal para su implementación y aplicación, esta pena consiste en que el sentenciado no pueda volver a ingresar a un cargo público.

El abogado penalista Panta (2017) en esa misma línea refiere lo siguiente: “una cosa es la muerte civil (privar a una persona de sus derechos civiles y políticos) y otra muy distinta es la pena de inhabilitación perpetua. La primera está proscrita, la segunda, como programa de política criminal, se puede instaurar modificando el Código Penal. El efecto de la pena de inhabilitación perpetua es que el sentenciado no vuelva a ostentar cargo público”.

En cuanto a esta medida, se comenta que no es tan eficaz en el entendido que ha colocado muchos impedimentos o elementos configurativos que significarían la no aplicabilidad querida para la lucha contra la corrupción.

En ese entendido Caro (2016). (...) “requerirá no solo la demostración del acto ilícito, sino también el cumplimiento de ciertos supuestos como la participación de una organización criminal, el perjuicio de programas asistenciales del Estado y la pérdida de 15 UIT en dinero o bienes públicos”.

Por ello esta medida anticorrupción, solo está enfocada cuando exista una organización criminal o una asociación para delinquir, por lo que solo atacaría a la Gran corrupción y por ende, no necesariamente a la pequeña corrupción.

Incluso, el incluir dentro del tipo que es necesario un perjuicio como mínimo de 15 Unidades Impositivas Tributarias, deja en vacío, como es obvio, determinadas conductas ilícitas, no pudiendo ser aplicables para ellas.

2.3.4. Análisis a los tipos penas(los más realizados) de corrupción de funcionarios, en la legislación de Perú.

Después de desarrollar, los alcances al término corrupción, sus características, los factores que influyen al mismo, se pasará a analizar a los tipos penales que establece el ordenamiento jurídico peruano (Código Penal) para una mayor comprensión sobre los mismos.

Preliminarmente se enumerarán (conforme lo indica el Código Penal Peruano) a efectos de que sirva para una visión general y que se reconozcan con precisión tales delitos.

Artículo 393.- Cohecho pasivo propio.

Artículo 394.- Cohecho pasivo impropio.

Artículo 395.- Cohecho pasivo específico.

Artículo 396.- Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.

Artículo 397.- Cohecho activo genérico.

Artículo 397- A.- Cohecho activo transnacional.

Artículo 398.- Cohecho activo específico

Artículo 398-A.-Corrupción activa de abogado

Artículo 399.- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

Artículo 400.- Tráfico de influencias.

Artículo 401.- Enriquecimiento ilícito.

2.4. COHECHO PASIVO PROPIO.

El Texto legal (artículo 393 del Código Penal) es el siguiente:

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

2.4.1. El sujeto activo:

Cualquier funcionario o servidor público, independientemente de la naturaleza de su vinculación con el Estado.

En tal sentido aquí se asume un concepto amplio de funcionario público o servidor público, pues abarca a todas aquellas personas que

han sido seleccionadas o elegidas de forma permanente o temporal, remunerada u honoraria, para desempeñar un cargo público, siendo irrelevante el hecho que no hayan juramentado o no hayan asumido realmente sus funciones.(Salinas, 2014, p 467).

2.4.2. El sujeto pasivo:

Claramente vendría hacer el Estado, pues es quién sobre recae el injusto penal y además el único que tiene la titularidad del bien jurídico que se busca proteger.

Sin embargo, cuando el directamente perjudicado es una entidad estatal solo esta se constituirá en sujeto pasivo, excluyéndose al Estado.

Esto es el sentido de la ejecutoria suprema del 1 de julio de 1998 cuando sostiene que, “ conforme a lo establecido por esta suprema sala en numerosas ejecutorias, tratándose de delitos contra la administración pública en perjuicio de los gobiernos locales o regionales, solo estos deben ser considerados como agraviados y no el Estado a la vez, toda vez que ello implicaría una duplicidad de pago respecto a la reparación. (Salinas, citando la Ejecutoria suprema en el exp.Nº5431-97-Arequipa, 2014, p467).

2.4.3. Bien jurídico protegido.

Existen tres posturas, que tratan de identificar cuáles con exactitud el bien jurídico, al respecto se indica que:

A) Proteger los deberes legales que se producen con razón del cargo, atribuciones o funciones con la consecuencia lealtad que deben tener dichos funcionarios y servidores públicos, para con la Administración pública.

B) Preservar la imparcialidad en el actuar de los funcionarios y servidores públicos, es decir, toda decisión debe estar sujeta solo a la

Ley y normativa específica, sin que existe alguna intervención e sus dediciones.

C) Tutelar los actos de oficio, de la compraventa de prestaciones efectuadas por particulares u otros funcionarios o servidores públicos. (Salinas, 2014, 465).

Las tres posturas se conciben en código Penal (artículo 393), en cada uno de sus párrafos.

2.4.4. Momento consumativo.

Sobre el particular, el R. N. N° 1875-2015, Junín: establece, en cualquier de los supuestos indicados, contemplaos por el artículo 393, sobre en qué circunstancia se configuraría dicha conducta (s) y como ésta debe probarse, en tal sentido refiere'' (...) Existencia del acuerdo previo o pacto venal en orden a aceptar o recibir, solicitar y condicionar un acto funcional a un donativo, promesa o ventaja''.

2.5. COHECHO PASIVO IMPROPIO.

El Texto legal (artículo 393 del Código Penal) es el siguiente:

El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

2.5.1. El sujeto activo.

Al ser un delito especial, solo pueden ser sujetos activos, los funcionarios y servidores públicos, pero con la precisión que, deben tener una competencia para realizar o dejar de hacer sus actos funcionales a los que se comprometieron.

2.5.2. El sujeto pasivo.

Solamente puede serlo el Estado, como único titular del bien jurídico protegido, al igual que en el anterior tipo, si hay una institución estadual directamente afectada, está tendría legitimidad directa, y excluirá al Estado.

2.5.3. Bien jurídico Protegido.

Proteger las obligaciones producto del cargo, atribución o funciones que tienen los funcionarios y servidores públicos, así como salvaguardar el principio de imparcialidad propio de cualquier funcionario y servidor público en el accionar cotidiano de sus funciones.

2.5.4. Momento consumativo.

Para el primer párrafo del código en comento, la conducta se perfecciona con el mero hecho de materializarse en la realidad los verbos **aceptar o recibir**, sin importar al no ser parte del tipo la exigencia de que en la realidad lo que iba a recibir o lo que se le ofreció nunca se dé en lo fáctico.

Para el segundo párrafo basta con el solo hecho de solicitar, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, es decir, si se acredita que el funcionario o servidor público requirió a un tercero, cualquier ventaja indebida para desvirtuar o transgredir algún acto propio de su función, solo por ese hecho se consuma el delito. En otros términos es un tipo penal de mera actividad, y es por ello que indican que esta clase de delitos no puede haber la tentativa.

2.6. COHECHO PASIVO ESPECÍFICO.

El Texto legal (artículo 395 del Código Penal) es el siguiente:

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa.

2.6.1. Sujeto Activo.

Al ser este un delito especialísimo, solo podrían ser sujetos activos, los que cumplen con las condiciones especiales del tipo como son: Magistrados, fiscales (estos comprenden a todas las instancias) peritos, miembros del Tribunal Administrativo y otros sujetos que cumplan funciones análogas (normados por ley de administrar justicia jurisdiccional o administrativa, verbigracia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los del Consejo Nacional de la Magistratura, comisiones especiales del Congreso e incluso los miembros de las comunidades Campesinas encargados de impartir justicia comunal).

Se entiende por **Magistrado**, a todo funcionario público que por mandato legal se le confiere la potestad de impartir justicia a nombre de la Nación, por lo que abarcaría a todos los jueces, sin importar la jerarquía, del Poder Judicial, Miembros del supremo interprete de la Constitución- Tribunal Constitucional, así como los del fuero policial -militar.

Se entiende por **Fiscal**, en un primer momento al Representante del Ministerio Público, sin importar su jerarquía, y en un segundo momento, también abarca a los del fuero privativo Militar –Policial.

Perito, es aquella persona que tiene conocimiento especializado, sobre algún tema en particular, ya sea de la ciencia, arte, disciplina u oficio, que es llamado por tales saberes a coadyuvar con la administración de justicia, para ilustrar a todos los sujetos procesales, pero sobre todo al Juez de la causa. Sobre este punto se precisa que solo se refiere a los peritos oficiales.

Los Miembros del Tribunal Administrativo, vendrían hacer todos aquellos funcionarios públicos, encargados por ley de dilucidar alguna cuestión administrativa controvertida, entre los administrados y la administración pública, entre ellos se encuentra los miembros del tribunal de Indecopi, del y Tribunal Fiscal y los del tribunal de Servir.

Árbitros, tienen una regulación especial (Ley de Arbitraje), son nombrados por las partes u designados por la entidad encargada del arbitraje para solucionar un determinado problema puesta a su consideración.

2.6.2. Sujeto Pasivo.

El Estado, al ser el único titular del bien jurídico tutelado, tanto a nivel genérico como específico. Pero con la precisión, que para evitar una duplicidad de reparación civil, la institución directamente perjudicada sería la única considerada sujeto pasivo.

2.6.3. Bien Jurídico protegido.

Específicamente radica en la protección al ejercicio regular de las funciones públicas contra los actos de sujetos diversos que intentan corromper a los sujetos públicos encargados de impartir justicia; en ese sentido porque lo esencial es cautelar los niveles de imparcialidad en el ámbito de la administración de justicia para su correcto desarrollo.

2.6.4. Momento Consumativo.

Al ser este un delito de mera actividad, bastaría para su configuración, tanto para el primer y segundo párrafo del tipo penal en comento, la realización de los verbos; **aceptar o recibir** que nacen como consecuencia de donativos, promesas o cualquier otra ventaja o beneficios. Aquí no es posible la tentativa, al ser de mera actividad.

2.7. CORRUPCIÓN PASIVA DE AUXILIARES JURISDICCIONALES

El Texto legal (artículo 396 del Código Penal) es el siguiente:

Si en el caso del artículo 395, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

2.7.1. Sujeto Activo.

Es quien este en la carrera administrativa judicial o realice actividades de carácter jurisdiccional o cualquier otro análogo. Los funcionarios o servidores públicos que no tienen aquella condición específica que refiere el tipo penal 396º, así como de los particulares, quienes al tener participación en la conducta irregular, se sumergirían en la condición de cómplices dependiendo el grado de participación que hayan desempeñado.

Se entiende por **Secretario Judicial**, a los servidores públicos, ya sea nombrados o contratados por el Poder Judicial, quienes se encuentran en los diferentes juzgados, sin importar las jerarquías. Dichos servidores en cuanto a sus obligaciones y atribuciones se encuentran reguladas en los artículos 259 y 266 del T.U.O. de la Ley Organiza del Poder Judicial.

Se entiende por **Relator**, a aquél servidores públicos contratados o nombrados por el Poder Judicial, designados en las Salas Superiores y en las Salas de la Corte Suprema, conforme lo establecen los artículos 250 y 251 del T.U.O. de la Ley Organiza del Poder Judicial.

2.7.2. Sujeto Pasivo.

Genéricamente el Estado, pero según sea el caso, o dicho de otra forma de quién sea el sujeto activo, será el Poder Judicial en específico o algún tribunal administrativo.

2.7.3. Bien Jurídico protegido.

El correcto desenvolvimiento de los servidores públicos al momento de actuar, conforme e su deber de fidelidad con la entidad encargada de administrar justicia.

2.7.4. Momento Consumativo.

Con respecto a este tipo penal, “debe entenderse que la conducta típica solamente puede consistir en una propia de las funciones específicas de estas personas: solicitan o aceptan donativos, promesas o ventajas para realizar un acto que influya luego en una decisión de los sujetos del artículo 395 sin dolo de estos; p.ej., un informe, un proyecto, etc. De esta manera, el Derecho Penal se asegura que tanto las decisiones más importantes (una sentencia, por ejemplo), como aquellas que se configuran y construyen en torno a ella, también se realicen bajo el principio de imparcialidad. Es así que, las decisiones secundarias que se configuran durante el proceso, también deberán encontrarse revestidas por los principios que rigen y

orientan el correcto ejercicio de la función pública. (Novoa y Torres, citando a Vásquez, 2012, p 12).

2.8. Cohecho activo Genérico.

El Texto legal (artículo 397 del Código Penal) es el siguiente:

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

2.8.1. Sujeto Activo.

Este delito a diferencia de los anteriores en comento, es un delito común, por lo que no se exige que para ser sujeto activo, se tenga alguna cualidad, calidad o condición especial, por lo que puede ser cualquier persona.

2.8.2. Sujeto Pasivo.

En concreto al ser genérico este tipo penal, y claro está por su ubicación sistemática sería el Estado el sujeto pasivo.

2.8.3. Momento Consumativo.

Este tipo de delitos, son de mera actividad o dicho de otra forma se configuran solamente bastando con las realización de los verbos indicados por el tipo penal (ofrecer, dar o prometer) para que realicen u omitan actos en violación de sus obligaciones, para el primer párrafo del artículo en comento y, sin faltar a sus obligaciones en el segundo párrafo. Por lo que aquí no cabe la tentativa.

2.9. Cohecho activo transnacional.

El Texto legal (artículo 397 del Código Penal) es el siguiente:

El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional público donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años.”

Antes de pasar a analizar lo elementos del presente tipo penal, se considera pertinente mencionar la nueva regulación que entraría en vigencia el 1 de julio de 2017 a las empresas que sobornen funcionarios o servidores públicos de otros Estados (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las Personas Jurídicas por el delito de Cohecho Activo Transnacional).

En el Perú, así como gran parte del orbe, ya desde hace buen tiempo, se ha puesto en discusión la responsabilidad penal de las empresas, debate que tiene quienes defienden que sí se puede atribuir dicha responsabilidad y de quienes indican que no (pues consideran que el Principio del *Societas delinquere non potest*, el cual establece que las personas jurídicas no pueden ser objeto de una Responsabilidad Penal, sigue vigente en el Derecho Penal contemporáneo).

En el Perú a través de la regulación indicada se ha puesto de relieve mucho más dicho debate, pues consideran que las sanciones administrativas que reciban las empresas a la luz de este delito, al desarrollarse en el proceso penal (por un juez penal como es obvio) más que una sanción administrativa propiamente, sería una sanción penal.

Entre las medidas (sanciones administrativas) que se podría aplicar a las empresas serían las siguientes:

- 1) Multa hasta seis veces del beneficio obtenido o esperado. Y en el hipotético caso que no se pueda exactamente determinar el monto del beneficio, el juez penal podrá establecer la multa administrativa entre un monto no menor de diez ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias (S/. 39,500.00 – S/. 1'975,500.00), teniendo en consideración los ingresos anuales de la persona jurídica cuando cometió el delito.
- 2) La inhabilitación de la persona jurídica, en cualquiera de las siguientes modalidades: suspensión temporal de actividades sociales, de prohibición temporal o definitiva de llevar a cabo actividades de la misma naturaleza en que se cometió, favoreció o encubrió el delito, y la suspensión temporal para contratar con el Estado.
- 3) Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas y municipales otorgadas a la persona jurídica.
- 4) Clausura temporal o definitiva de locales y establecimientos de la persona jurídica.
- 5) Disolución (extinción) de la persona jurídica.
- 6) Intervención temporal de la persona jurídica.

Con respecto a esta Ley, la doctrina nacional, mostrando careramente las dudas que le genera, en primer lugar la técnica legislativa y, en segundo lugar su eficiencia en cuanto a la lucha contra la corrupción se refiere, indica que:

(...) existen dudas sobre la eficacia de la Ley como mecanismo para prevenir la corrupción empresarial, especialmente porque su ámbito de aplicación es bastante limitado, solo rige para las empresas basadas en Perú, nacionales o extranjeras, que cometan actos de corrupción en el extranjero, es decir solo se aplica para aquellas que tienen operaciones transnacionales. Si esa misma empresa comete actos de corrupción en el Perú, solo podrán ser perseguidas las personas naturales que lo cometieron, no la persona jurídica, no existe responsabilidad penal de la empresa por los delitos de cohecho, peculado, colusión, etc., cometidos en el Perú. (Caro, 2016, sp).

La ley sanciona la responsabilidad de las personas jurídicas, solo por el delito de cohecho activo transnacional, o mejor dicho por el soborno que comete la empresa peruana por medio del funcionario público de otro país. Es decir, la coima o comisión internacional, debiendo tener como condición que la empresa peruana tenga operaciones en el extranjero, pero cabe preguntarnos: ¿La gran mayoría de empresas peruanas tienen operaciones en el extranjero? La respuesta es clara y categórica: no. Entonces, ¿se trata de una sanción para la mayoría o para la minoría de las personas jurídicas peruanas? Será para las minorías de las empresas, pudiendo señalar que el ámbito de aplicación de la norma será realmente restringido. (Linares, 2016, sp).

Se coincide con lo señalado en las líneas anteriores, esta norma en realidad no ha sido bien estructurada, o dicho en otros términos, no bien diseñada. En primer lugar, porque tienen que ser personas jurídicas basadas en el Perú las cuales corrompan a funcionarios públicos del extranjero y que cuyas consecuencias se den en el extranjero. No se encuentra aplicabilidad en ellos. En segundo lugar, porque solo se ha diseñado para el cohecho activo transnacional, dejando de lado el gran cumulo de actos de corrupción en el Perú.

Además se precisa que se “configura la conducta delictiva A través de sus administradores de hecho, derecho o representantes legales y siempre que estos actúen en pleno ejercicio de sus funciones al momento del acto de

corrupción. También se considerarán casos sancionables aquellos en los que las personas naturales que presten cualquier tipo de servicio a la empresa cometan el ilícito por dirección u omisión de control por parte de los representantes legales´´. (Diario la Ley, 2016, sp).

Después de haber hecho una pequeña mención, sobre la regulación y consecuencias que van a tener las personas jurídicas que cometan este tipo de delitos se pasará ya a analizar lo elementos del tipo penal en comento.

2.9.1. Sujeto Activo.

Este es un delito Común, porque el tipo no exige alguna cualidad, condición o característica especial. Entonces para establecer quién es el autor o participe bastaría con aplicar la teoría del dominio del hecho de Roxin.

2.9.2. Sujeto Pasivo.

Al igual que los anteriores tipo penales, el sujeto activo sería el Estado.

2.9.3. Momento Consumativo.

Al ser un delito de mera actividad, se configura con la simple realización de los verbos rectores indicados por el tipo.

2.10. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

El Texto legal (artículo 398 del Código Penal) es el siguiente:

El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.

Se precisa que en la doctrina a este delito también se le conoce con las siguientes denominaciones: gestión desleal, interés particular en el acto de oficio o infidelidad de funcionario.

De la misma manera, que la redacción actual de este delito, es igual a su redacción anterior (con respecto al código penal precedente), solo cambiando su penalidad.

Asimismo, se indica preliminarmente, que es una figura de incompatibilidad con mucha generalidad, pues no especifica la naturaleza de la operación o contrato, o en todo caso del negocio jurídico patrimonial.

Se indica, así mismo, que el punto modular en este delito es el “interesarse”, por cualquier contrato u operación en el que intervenga el funcionario o servidor público, por lo que se desarrollará brevemente este concepto.

Creus (1990) “Interesarse es volcar sobre el negocio de que se trate una pretensión de parte no administrativa: querer que el negocio asuma una determinada configuración en interés particular del sujeto o hacer mediar en él, propugnándolos, intereses particulares o de terceros”. P 309.

En tal sentido, es tomar empeño en un negocio o tomar parte en éste, pues se tiene un fin, el cual es obtener una ventaja, utilidad o beneficio.

El doctrinario Salinas (2014) refiere que, interesar significa: atañer, concernir, incumbir, comprometer o importar algo y, por ello, se destina nuestra voluntad a conseguirlo o a obtenerlo. P 566.

2.10.1. Sujeto Activo.

Es un tipo penal especialísimo, por lo que solo podría ser sujeto activo los que cumplan con las cualidades señaladas en el tipo, pero no basta con ellos, sino que además hay una exigencia extra, que los funcionarios y servidores públicos deben tener una vinculación funcional, es decir, que tenga competencias y facultades, entorno a los contratos u operaciones, sino tiene ello no puede ser sujeto activo, por más que sea funcionario o servidor público de la entidad.

Por lo que tiene que verificarse tal condición (vinculación funcional).

2.10.2. Sujeto Pasivo.

Es propiamente el Estado, como representante o quien tiene la titularidad de la administración pública

2.10.3. Tipicidad subjetiva.

Es netamente doloso, el punto en debate aquí sería si es viable cualquiera de las clases de dolo (directo, indirecto y eventual).

Al respecto, el sector mayoritario de la doctrina considera que solo puede darse mediante el dolo directo, no pudiendo ser posible las otras clases de dolo por la configuración típica de este delito.

Tesis o hipótesis discrepante refiere lo siguiente: “ la formulación amplia de la ley no impide que la infracción pueda cometerse, por ejemplo con dolo eventual pues nuestra legislación, a diferencia de lo sucede en del Derecho Italiano no alude especial expresamente la intencionalidad del funcionario, forma subjetiva que excluye el dolo eventual. (Castillo, citado por salinas, 2014, p 578).

No se comparte lo dicho por Castillo Alva, porque el hecho que el tipo penal no haga mención a la intencionalidad del funcionario para hecho punible en cuanto al interés en el negocio se refiere, no significa que este no sea de comisión únicamente vía dolo directo, la intencionalidad ya está manifiesta vía interpretación, es más el mismo tipo cuando hace alusión a actos simulados, pues aquí el funcionario o servidor haría uso de astucia o engaño contra la administración pública.

2.10.4. Momento Consumativo.

Al ser este un delito de mera actividad y de peligro, se precisa que no puede darse la tentativa y, que se configuraría bastando únicamente en que el funcionario o servidor público que tenga un vínculo funcional con respecto a la operación o contratación, o acto simulado tenga un interés, ya sea directo o indirecto en la realización de ésta.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

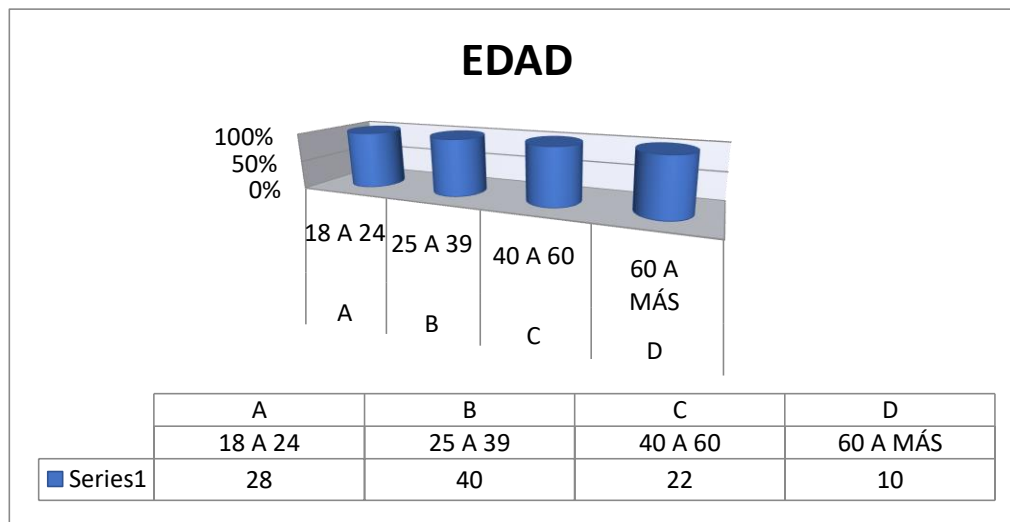
RESULTADOS

I. GENERALIDADES: INFORMANTES

1.1. EDAD

a) 18 a 24 () b) 25 a 39 () c) a 40 a 60 () d) 60 a más ()

GRÁFICO N° 01



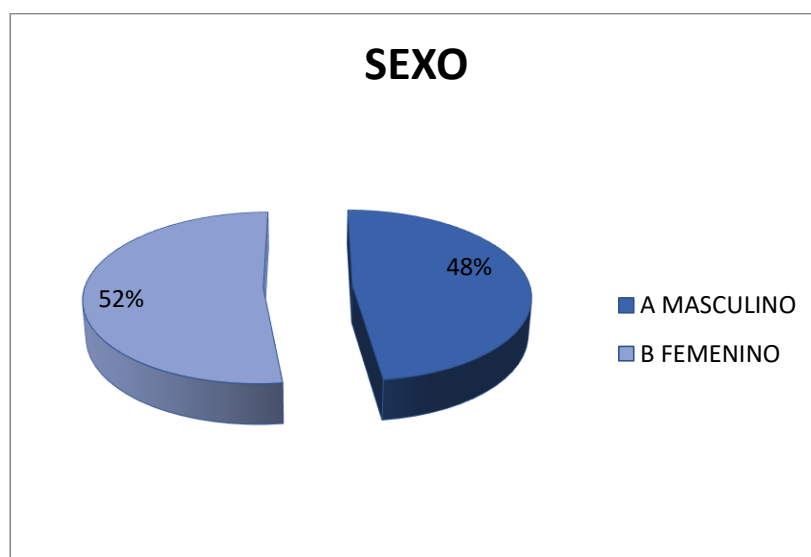
DESCRIPCIÓN

En el gráfico N° 01 podemos observar que del total de los informantes participantes en la encuesta, un 40% pertenece al rango de entre 25 a 39 años de edad, seguido en un 28% de personas en el rango de 18 a 24 años de edad y un 22% de informantes en el rango de edad de 40 a 60 años; en tal sentido contamos con equilibrio en la diversidad de generaciones que han vivido momentos diferentes en el ámbito de la corrupción nacional y local; lo cual nos brinda un amplio panorama de opinión que ayuda a hacer más objetivo el estudio.

1.2. SEXO

a) Masculino () b) Femenino ()

GRÁFICO N° 02



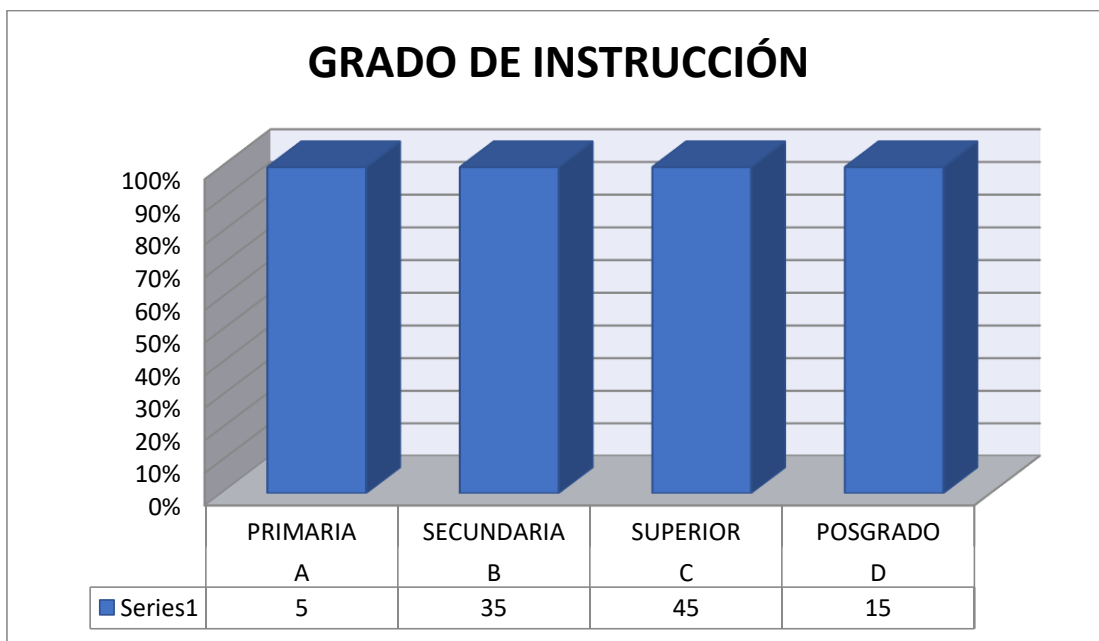
DESCRIPCIÓN

Del total de participantes en la encuesta, predomina el sexo femenino con un 52%, pero sin mucha diferencia en el 48% que representa a los participantes de sexo masculino.

1.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN

a) Primaria () b) Secundaria () c) Superior () d) Posgrado ()

GRÁFICO N° 03:



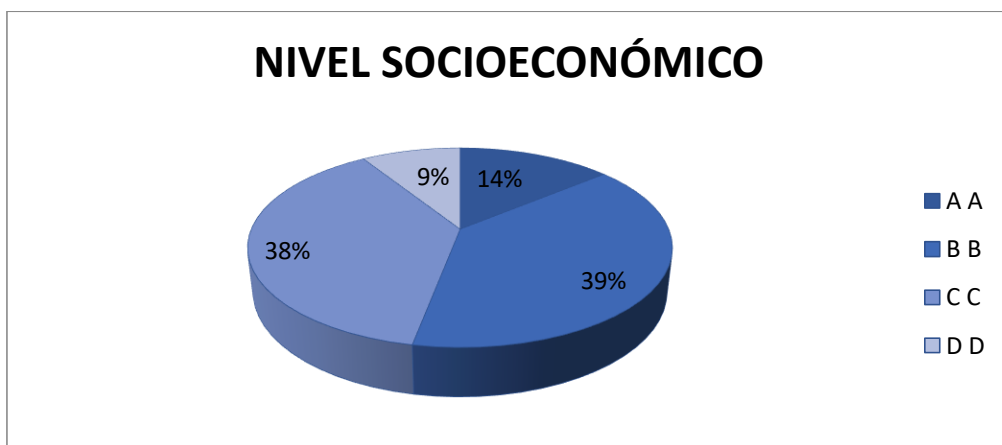
DESCRIPCIÓN

En referencia al nivel de instrucción de los participantes predominan aquellos con estudios superiores universitarios y técnicos (45%), seguidos por personas con grado de instrucción secundaria (35%); en tal sentido contamos con opiniones técnicas, así como con opiniones y sentir de la población que no tiene conocimiento profesional del tema; lo cual nos permitirá conocer ambas vertientes y percepciones.

1.4. NIVEL SOCIOECONÓMICO (considerando a “A” como el nivel más alto)

a) A b) B c) C d) D

GRÁFICO N° 04:



DESCRIPCIÓN

En referencia al nivel socioeconómico de los participantes en la encuesta predominan aquellos del nivel B y C, con un porcentaje de 39% y 38%; que hacen referencia a un nivel de ingresos medios a altos.

II. PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA

2.1. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales problemas por los que atraviesa nuestro país en la actualidad? (marque máximo 3 ítems)

A	Delincuencia	
B	Corrupción	
C	Consumo de drogas	
D	Pobreza	
E	Desempleo	
F	Crisis política	
G	Contaminación del Medio Ambiente	
H	Mal sistema de salud pública	
I	Mal sistema educativo	
J	Otro:_____	

GRÁFICO N° 05:



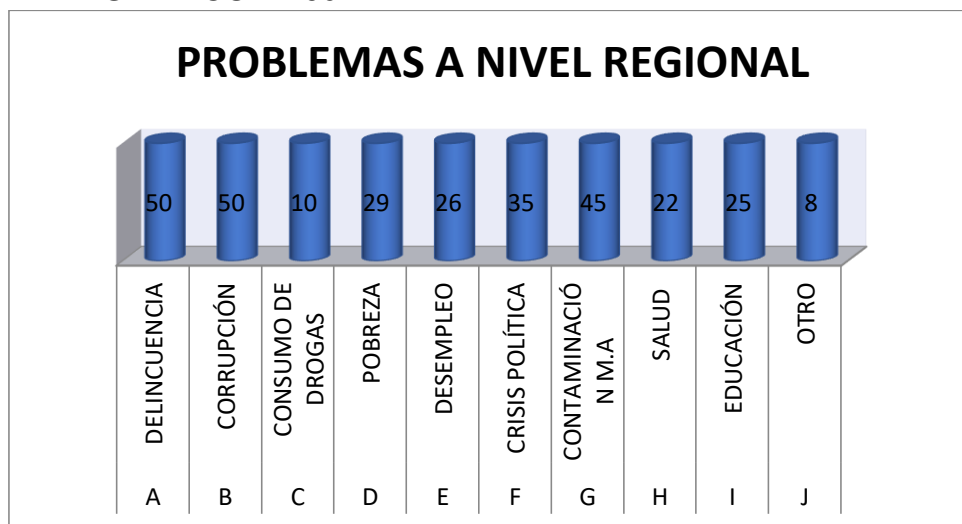
DESCRIPCIÓN

Que, en referencia a la percepción que muestran los ciudadanos sobre los problemas que aquejan a nuestro país; los participantes consideran que los 03 mayores problemas que actualmente vivimos son en primer lugar la CORRUPCIÓN, seguido de la DELINCUENCIA, asimismo no tan lejos se menciona al problema de CONTAMINACIÓN AMBIENTAL; problemas con vertientes diferentes, sin embargo las dos primeras tienen un punto de encuentro y es que los participantes consideran que los altos índices de delincuencia en nuestro país han aumentado debido a la corrupción en las esferas Policiales y Judiciales. En referencia a la corrupción como fenómeno, la mayoría incide que con los años se ha ido acrecentando, debido también a la poca acción de las instancias fiscalizadoras y judiciales.

2.2. En referencia a los problemas que atraviesa nuestra región Lambayeque, selecciona los 3 más relevantes en la actualidad:

A	Delincuencia	
B	Corrupción	
C	Consumo de drogas	
D	Pobreza	
E	Desempleo	
F	Crisis política	
G	Contaminación del Medio Ambiente	
H	Mal sistema de salud pública	
I	Mal sistema educativo	
J	Otro: _____	

GRÁFICO N° 06:



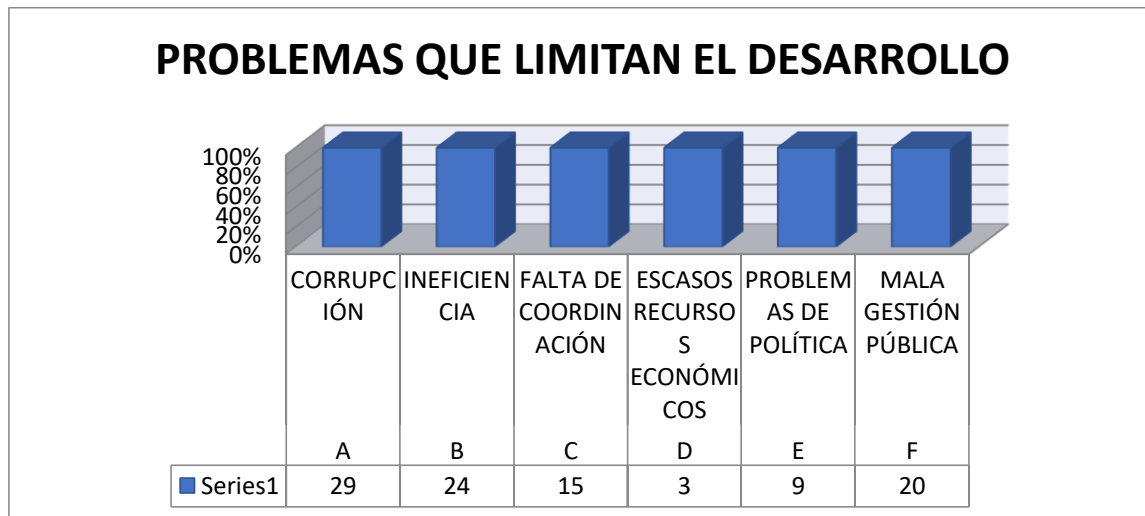
DESCRIPCIÓN

Tomando en cuenta que la presente encuesta se realiza en la región Lambayeque, consideramos pertinentes que los participantes identifiquen los tres problemas más saltantes en su propia región; coincidiendo en el orden de problemas que habían señalado a nivel nacional. Los participantes generalmente relacionan la corrupción en la región con el caso “Los limpios de la corrupción”, uno de los más saltantes en los últimos años y de los que tanto jóvenes como adultos conocen y recuerdan.

2.3. De las siguientes opciones ¿Cuál consideras que es el problema que limita más el desarrollo del país y de la región?

A	Corrupción de funcionarios y autoridades	
B	Ineficiencia de funcionarios y autoridades	
C	Falta de coordinación entre instituciones	
D	Escasez de recursos económicos	
E	Problemas de política	
F	Mala gestión pública	

GRÁFICO N° 07:



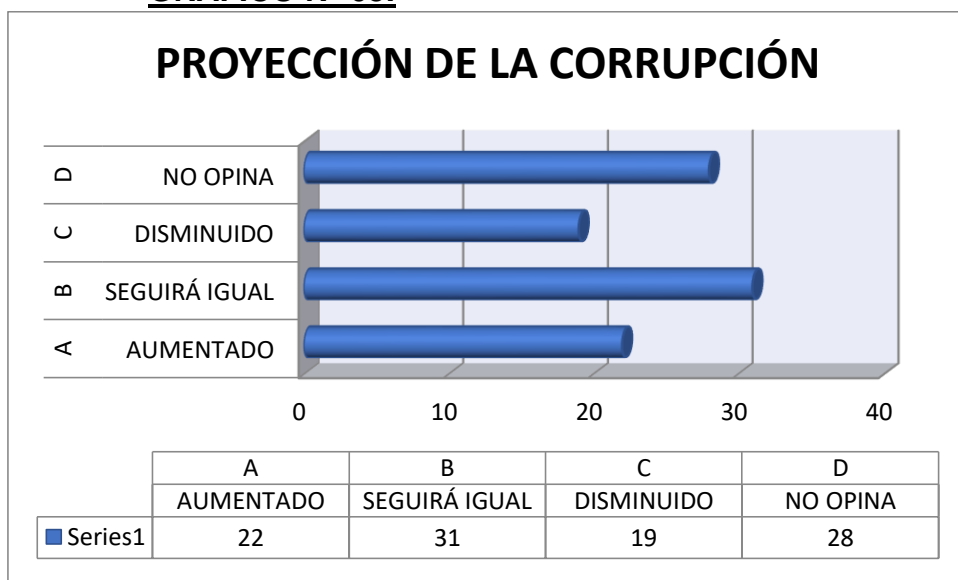
DESCRIPCIÓN

Es necesario conocer cuales considera la sociedad que son los problemas que limitan más el desarrollo del país. Ante dicha pregunta, los participantes en su mayoría, un 29% indican que la corrupción es el fenómeno que más retraso a causado a nuestro desarrollo; seguido en un 24% por la ineficiencia de funcionarios y autoridades, que continúan siendo relacionados al problema de la corrupción como causa de su ineficiencia, dado que no destinan los recursos a la proyección de obras en pro de la sociedad, ello ante los ojos de la población los califica como ineficientes en su labor.

2.4. ¿Cree que en los próximos 05 años la corrupción en el Perú (...)?

- Habrá aumentado ()
- Seguirá igual ()
- Habrá disminuido ()
- No sabe, no opina ()

GRÁFICO N° 08:



DESCRIPCIÓN

Si bien conocemos que la sociedad piensa que la corrupción se a atenuado en los últimos años; conocer que percepción tienen a futuro puede indicar el grado de confianza que tienen en las autoridades actuales que están tomando acciones para la lucha contra la corrupción. Se les preguntó en 05 años como creen que se verían las estadísticas de corrupción, ante ello el mayor porcentaje, un 31% considera que no habrá mejora y que seguiremos con las mismas estadísticas; asimismo un 22% se muestra pesimista y considera que la corrupción habrá aumentado; lo cual como repetimos refleja la poca confianza que el ciudadano tiene en sus autoridades.

2.5. ¿Cómo calificaría la gestión de las siguientes instituciones? (marque una opción por cada institución propuesta)

GRÁFICO N° 09:

		MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
A	Medios de Comunicación	11	18	55	8	0	8
B	Defensoría del Pueblo	6	10	35	30	2	17
C	Contraloría de la República	2	4	21	33	14	26
D	Fiscalía de la Nación	3	11	28	29	10	19
E	Poder Judicial	1	4	27	36	17	15
F	Gobiernos Regionales y Locales	4	6	18	28	33	21
G	Policía Nacional	5	27	26	15	12	15
H	Gobierno central	11	9	40	21	9	10
I	Congreso de la República	0	12	24	38	14	12
J	Partidos Políticos	2	7	13	22	13	43

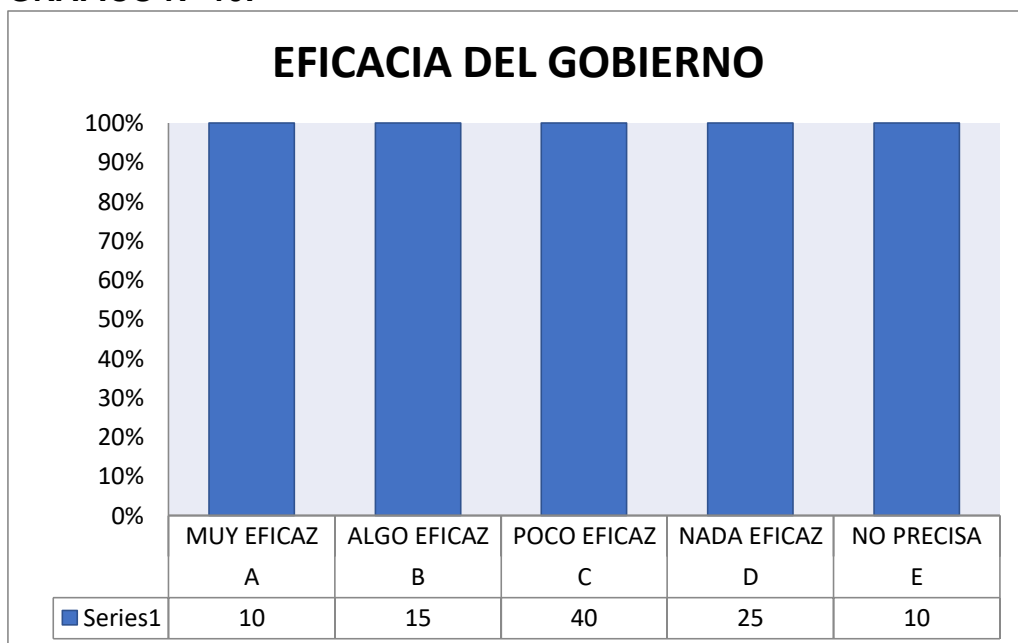
DESCRIPCIÓN

Del listado de instituciones presentadas a los participantes, se puede observar que en la mayoría de los casos ninguna supera el 11% en el rubro “muy buena”; sin embargo en el lado negativo podemos observar que el mayor porcentaje otorgado se registra en el ítem “mala” y en la opinión neutra “ni buena ni mala”; esto último indica que la mayoría de ciudadanos al tener una opinión neutra generalmente es porque no conocen directamente a la institución o entidad que los gobierna. Si individualizamos la entidad con mayor aprobación es la Policía, los Medios de Comunicación y el Gobierno Central; y las de menor aceptación son los Gobiernos Regionales y Locales, el Poder Judicial y el Congreso de la República.

2.6. ¿Cuán eficaz considera que es el Gobierno Central en la lucha contra la corrupción?

- Muy eficaz ()
- Algo eficaz ()
- Poco eficaz ()
- Nada eficaz ()
- No precisa ()

GRÁFICO N° 10:



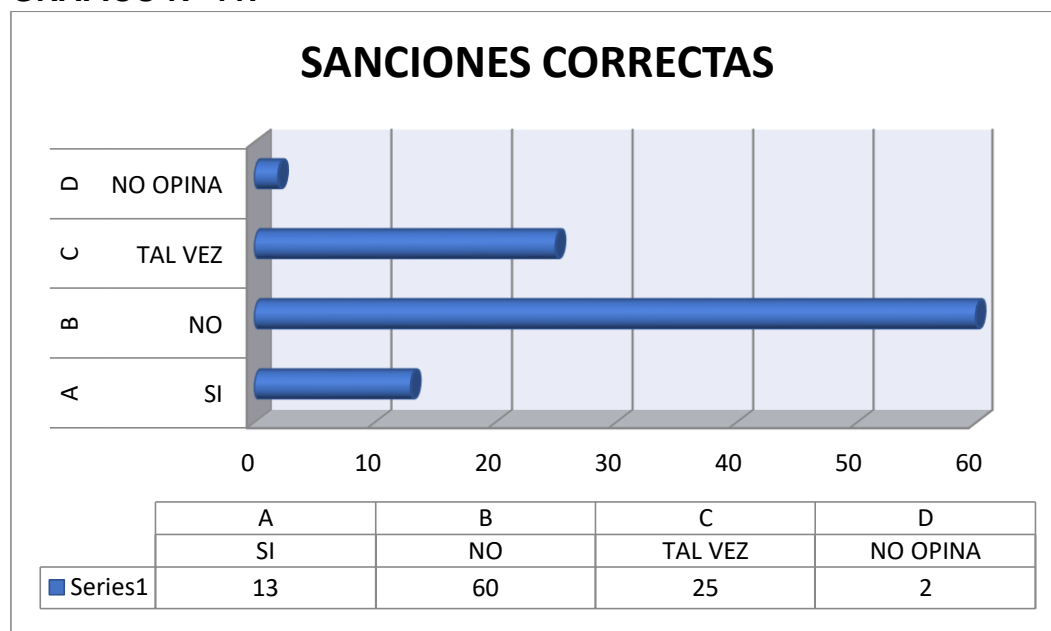
DESCRIPCIÓN

Con respecto a la percepción del trabajo anticorrupción realizado por el Gobierno Central, un 40% de los encuestado refiere que lo considera poco eficaz, seguido de un 25% que lo considera nada eficaz.

2.7. ¿Considera que el Delito de corrupción está teniendo sanciones correctas y ejemplares?

SI () NO () TAL VEZ () NO OPINA ()

GRÁFICO N° 11:



DESCRIPCIÓN

En el gráfico N° 11 podemos observar que un 60% de la población encuestada considera que los procesos por el delito de corrupción no está teniendo las sanciones correctas; seguido de un 25% que indica que tal vez. A todos aquellos que marcaron tal vez se les consultó el porqué, e indicaron en su mayoría que no conocían la escala de penas que regulaba nuestra normativa, por ello no podría decir si las penas dadas eran o no sanciones correctas; aunque por sentido común coincidían en que no lo eran, preferían ser neutros en esta posición al no tener conocimiento sobre las sanciones vigentes.

2.8. Si su respuesta anterior es NO diga: ¿Por qué cree Ud. que no se sanciona la corrupción?

A	Falta de leyes adecuadas	
B	No se investiga	
C	No se denuncia	
D	Proceso mal llevado	
E	No hay dinero suficiente para investigar	
F	¡Está todo arreglado!	

GRÁFICO N° 12:



DESCRIPCIÓN

De los 40 encuestados que en la pregunta 2.8 respondieron que la corrupción no está teniendo las sanciones ejemplares que debería, se le consultó por qué creían que no se sancionaba, a lo cual 20 personas respondieron que es debido a que existen muchos casos impunes por falta de denuncia de los hechos, es decir se mantienen en la lista negra de estadísticas no conocidas ni por el Gobierno. Asimismo un total de 15 personas, dentro de su ánimo personal consideran que las sanciones ejemplares nunca llegan dado que “todo está arreglado” y el mismo sistema protege a los corruptos. Esto es una nueva muestra de la desconfianza en la que viven todos los peruanos, especialmente los lambayecanos que son la mayoría de encuestados.

2.9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes situaciones?

GRÁFICO N° 13:

	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Que un funcionario público favorezca a parientes y amigos	0	10	16	50	24
Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite público	2	26	25	28	19
Pagar “propina” para que le perdonen una multa	5	33	26	21	15
Llenar documentos con datos falsos por conveniencia	6	16	55	18	5
Robar servicios públicos(agua, luz, etc)	7	11	32	28	22

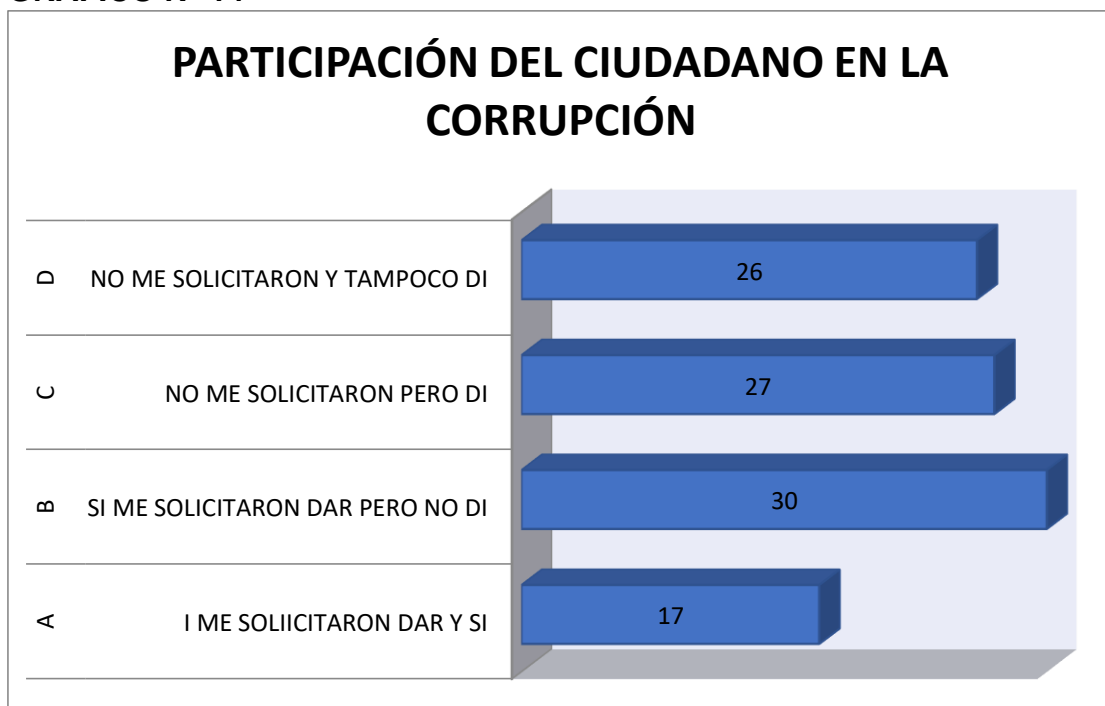
DESCRIPCIÓN

Se le planteó al encuestado situaciones comunes donde generalmente el pueblo se inmiscuye y forma parte del problema de la corrupción. Los encuestados consideran que pagar una propina para que te perdonen una multa y dar un obsequio para agilizar un trámite, son situaciones comunes aceptadas, sin embargo de los mencionados consideran inaceptable que un funcionario favorezca a su familia o amigos o que exista el robo de servicios como luz, agua, etc.

2.10. ¿Alguna vez le solicitaron o dio regalos, propinas, sobornos o coimas a algún funcionario público?

- A) Si me solicitaron dar y di ()
- B) Si me solicitaron dar pero no di ()
- C) No me solicitaron pero di ()
- D) No me solicitaron dar y tampoco di ()

GRÁFICO N° 14



DESCRIPCIÓN

El gráfico N° 14 muestra una realidad bastante preocupante; de los 100 encuestados un 44% reconoce que ha dado alguna vez una coima, ya sea porque se la solicitaron o por iniciativa propia. A su vez un 47% refiere que alguna vez en su vida le solicitaron una coima.

2.11. Si su respuesta anterior fue la opción A o C, responda lo siguiente:
¿Por qué dio regalos, propinas, sobornos o coimas a algún funcionario público?

- Para evitar mayores sanciones ()
- Porque si uno no paga las cosas no funcionan ()
- Es como una costumbre ()
- Los funcionarios ganan poco y así les ayudamos ()

GRÁFICO N° 15:



DESCRIPCIÓN

Al 44% que respondió que había dado una coima algún vez en su vida, se les consultó el motivo de ello; a lo que un 14% respondió que para evitar mayores sanciones, ya sea en cuestión de multas o penas a imponerse (Policía, SATCH y Poder Judicial). Asimismo un 14% indica que si no pagas las cosas no funcionan. Es sumamente preocupante que el mayor porcentaje que fue 15% haya respondido que dar una coima es como una costumbre y cosa de todos los días.

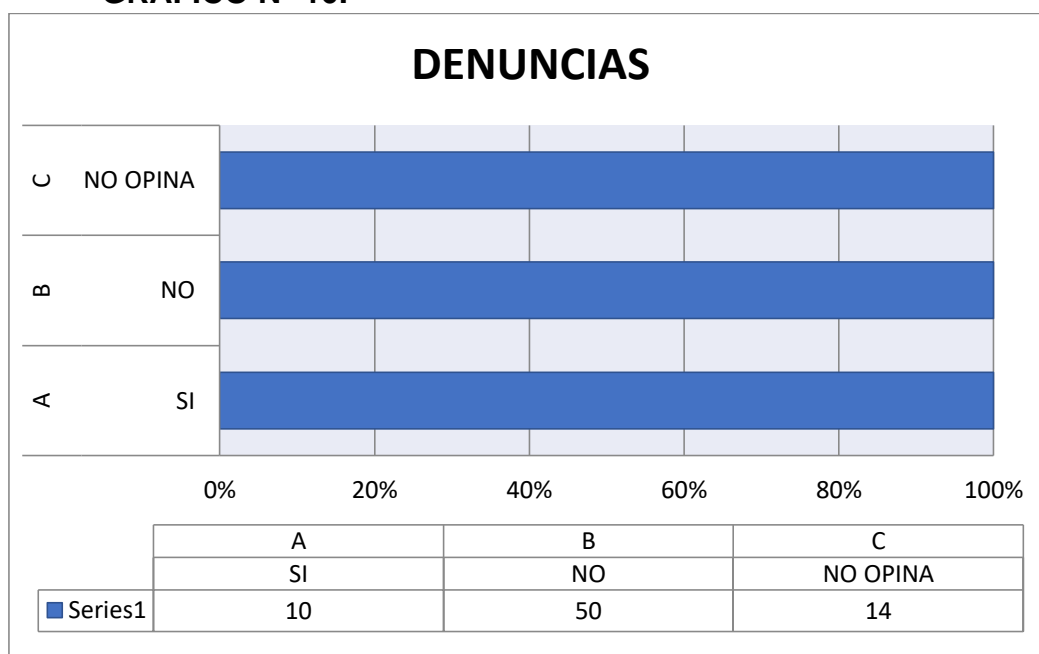
2.12. Si su respuesta a la pregunta 2.10 fue la opción A,B,C, responda lo siguiente: ¿Cuándo le solicitaron dar o dio regalos, propinas o coimas, etc; lo denunció?

SI ()

NO ()

NO OPINA ()

GRÁFICO N° 16:



DESCRIPCIÓN

De los 74 ciudadanos que refirieron que les solicitaron o que dieron coimas un total de 50 indica que no hizo la denuncia respectiva, dejando el caso impune y sin ser conocido por la sociedad y autoridades en general. Muchos de ellos consideran que fue una dádiva mínima que no tenía mayor importancia y que de haberlo denunciado habrían sido más perjudicados ellos que los funcionarios, dada la diferencia de poder e influencias.

2.13. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases? (muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo, no precisa)

GRÁFICO N° 17:

	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Se debe sancionar a los funcionarios corruptos solo si no hacen obras en beneficio de la población	4	26	45	15	10
Es necesario algo de corrupción para poder promover el crecimiento de la economía y el desarrollo	1	5	25	50	19
Es necesario algo de corrupción para poder facilitar los trámites y procedimientos en las instituciones públicas	21	27	22	17	13

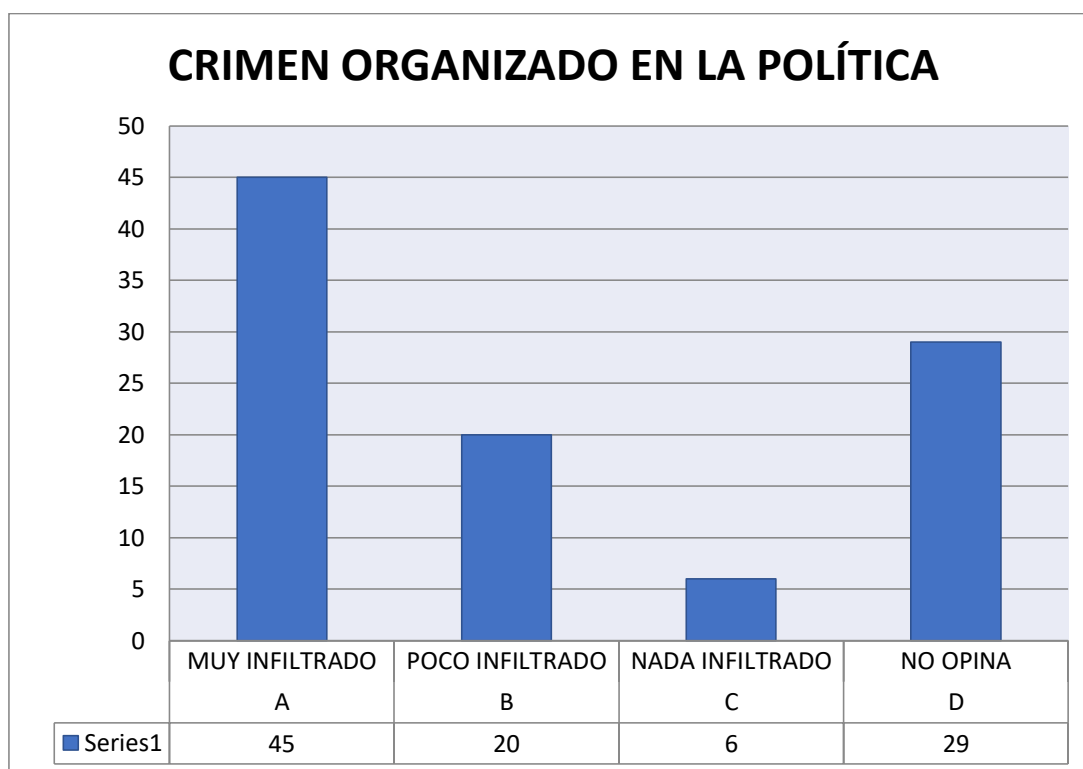
DESCRIPCIÓN

En el gráfico N° 17 se puede observar que un 48% de personas encuestadas piensa que es necesario algo de corrupción para poder facilitar los trámites y procedimientos en las Instituciones Públicas; ello indica que no está satisfechos con la atención y el trato recibido en dichas entidades, lo que los lleva a plantear la necesidad de dádivas para lograr realizar los trámites con mayor celeridad. Asimismo es importante recalcar que un 59% piensa que no es necesaria la corrupción para lograr el desarrollo local y nacional.

2.14. ¿Qué tan infiltrado o no cree que está el crimen organizado en la política?

- Muy infiltrado ()
- Poco infiltrado ()
- Nada Infiltrado ()
- No opina ()

GRÁFICO N° 18:



DESCRIPCIÓN

En el gráfico N° 18 se puede observar que un 45% de los encuestados considera que el crimen organizado está muy infiltrado en la políticas, y solo un 6% considera que no está infiltrado.

2.15. Si su respuesta anterior fue A o B, responda: ¿De qué manera cree que se manifiesta el crimen organizado en la política?

- Financiamiento de campañas políticas con dinero ilícito ()
- Conexiones políticas con funcionarios en puestos claves ()
- Contrataciones públicas ilícitas para ganar dinero ()
- Infiltración de grupos subversivos ()

GRÁFICO N° 19:



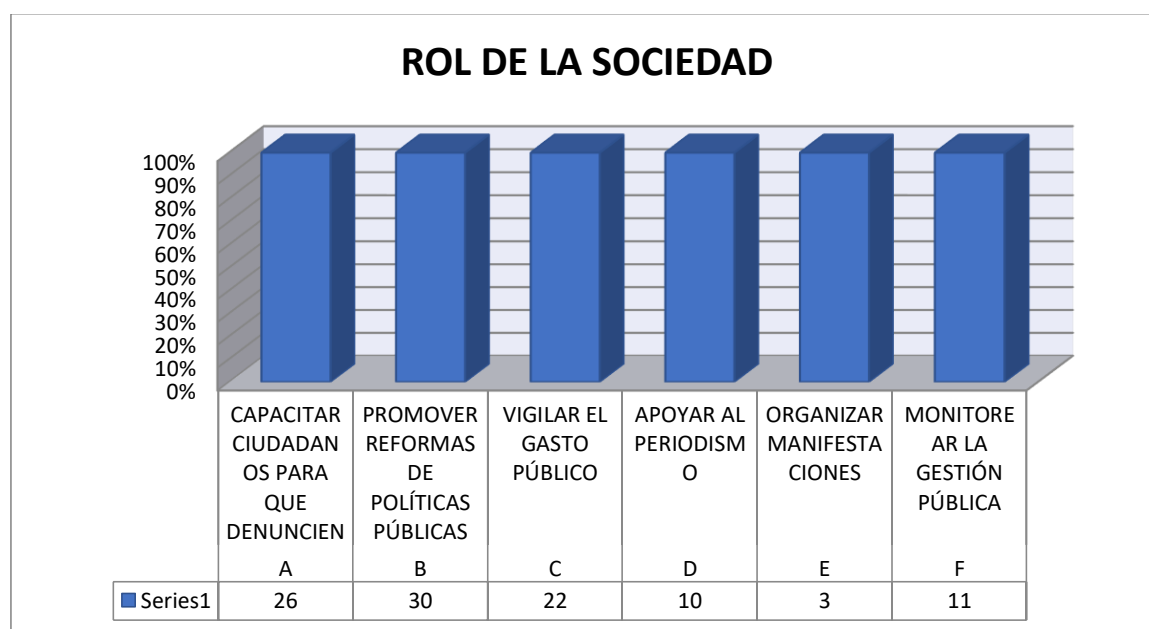
DESCRIPCIÓN

A las personas que según la pregunta anterior consideraban que el crimen organizado si se encontraba infiltrado en la política, ya sea en poca o gran medida; un total de 33 personas consideran que la mayor manifestación de ello son los casos de contrataciones públicas ilícitas para proyectos y obras a realizarse en pro de la población. Seguido de dicho porcentaje tenemos al 19% que indica que también es resaltante dicha vertiente por medio de las conexiones existentes para ocupar puestos claves, no haciendo convocatorias con meritocracia.

2.16. ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad civil en combatir la corrupción?

A	Capacitar a los ciudadanos para que denuncien	
B	Promover reformas de políticas públicas	
C	Vigilar el gasto público y exigir rendición de cuentas	
D	Apoyar al periodismo de investigación	
E	Organizar manifestaciones y protestas	
F	Monitorear la gestión pública	

GRÁFICO N° 20:



DESCRIPCIÓN

Que, con respecto al rol que debe cumplir la sociedad para apoyar en la lucha contra la corrupción, un 30% de encuestados indica que deberían promover reformas de políticas públicas; asimismo un 26% indica que se debe capacitar a los ciudadanos para que denuncien todos los hechos de corrupción que conozcan. Un 22% indica que se debería fiscalizar mejor el uso del dinero dispuesto para gasto público.

2.17. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría Ud. de acuerdo?

A	Los empresarios que pagan una coima son cómplices del funcionario que la pide	
B	Los empresarios que pagan una coima son víctimas del funcionario que la pide	
C	Los empresarios a veces se ven obligados a dar coimas para poder hacer su trabajo	
D	Las trabas burocráticas generan más oportunidades para el pago de coimas	

GRÁFICO N° 21:



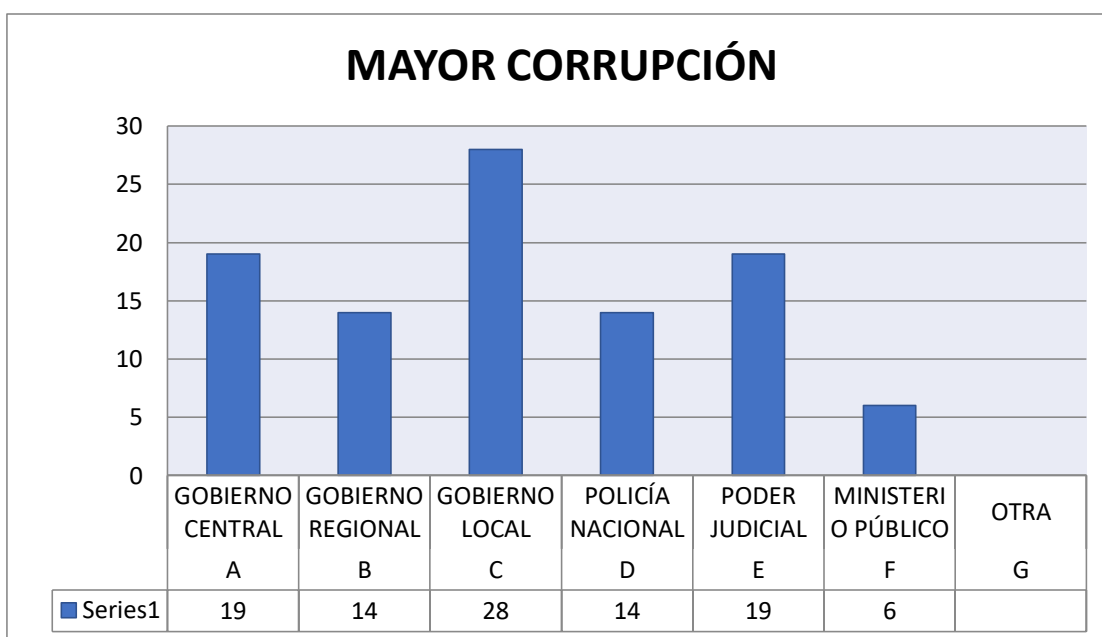
DESCRIPCIÓN

En la presente pregunta se le propone al encuestado una serie de afirmaciones para que indique con cuales estaba de acuerdo; a lo que la población en un 44% considera válido lo siguiente: “Los empresarios que dan coimas son cómplices”, seguido de un 26% que indica que muchas veces los empresarios se ven obligados a hacerlo a fin de lograr su cometido.

2.18. ¿En qué entidades considera que se presenta más corrupción?

- A. Gobierno Central ()
- B. Gobierno Regional ()
- C. Gobierno Local ()
- D. Policía Nacional ()
- E. Poder Judicial ()
- F. Ministerio Público ()
- G. Otra: _____

GRÁFICO N° 22:



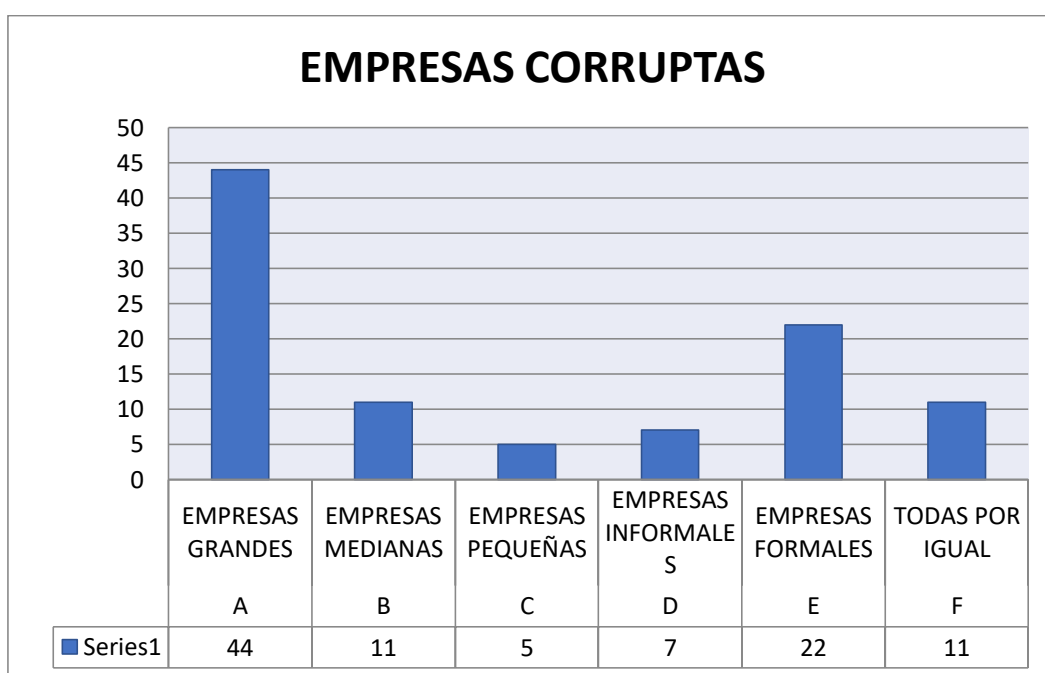
DESCRIPCIÓN

Dentro de las entidades, un 28% de encuestados considera que el Gobierno Regional y Local, el que posee mayores índices de corrupción, seguido en un 19% empatados tenemos al Poder Judicial y Gobierno Central.

2.19. ¿En qué empresas considera que hay más corrupción? (max3)

- A. Empresas grandes ()
- B. Empresas medianas ()
- C. Empresas pequeñas ()
- D. Empresas informales ()
- E. Empresas formales ()
- F. En todas por igual ()

GRÁFICO N° 23:



DESCRIPCIÓN

El gráfico N° 23 nos muestra la percepción de corrupción de la población respecto a las empresas involucradas. Los encuestados indican en su mayoría 44% que las empresas grandes y empresas formales en un 22%, son las que tienen mayor participación en la corrupción.

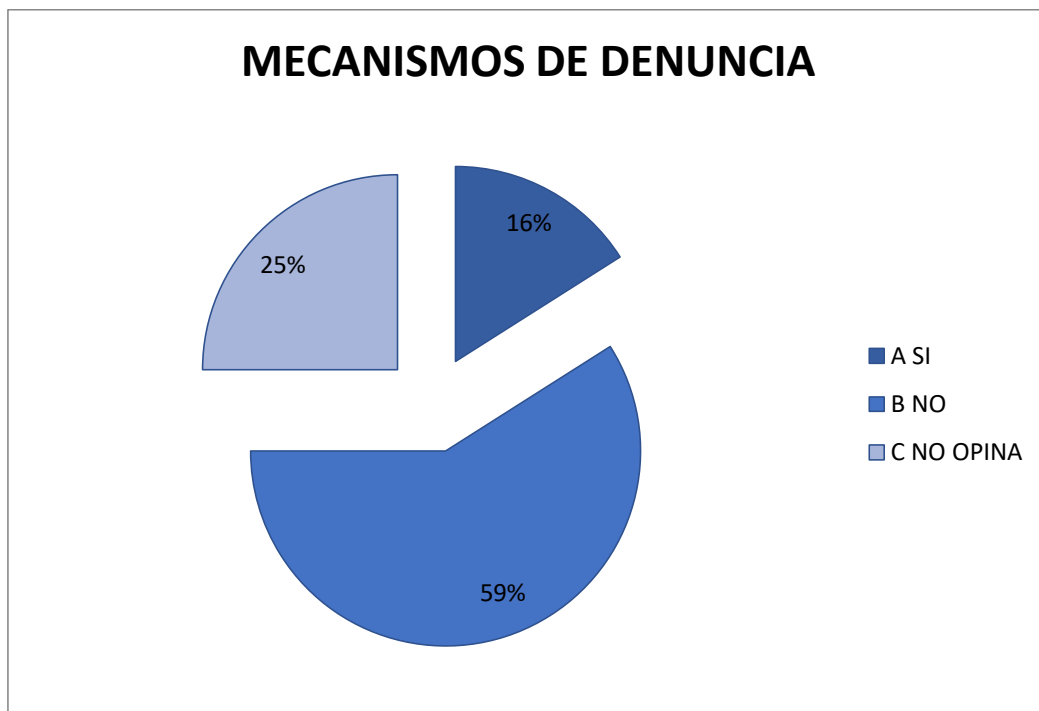
2.20. ¿Conoce los medios o mecanismos existentes para denunciar los hechos de corrupción de funcionarios?

SI ()

NO ()

NO OPINA ()

GRÁFICO N° 24:



DESCRIPCIÓN

Las cifras de gráfico N° 24 son alarmantes pues reflejan que un 59% de la población no sabe cómo denunciar los hechos de corrupción, no sabe a quién o qué entidad tiene que recurrir, por ello solo los deja pasar y no los pone en conocimiento.

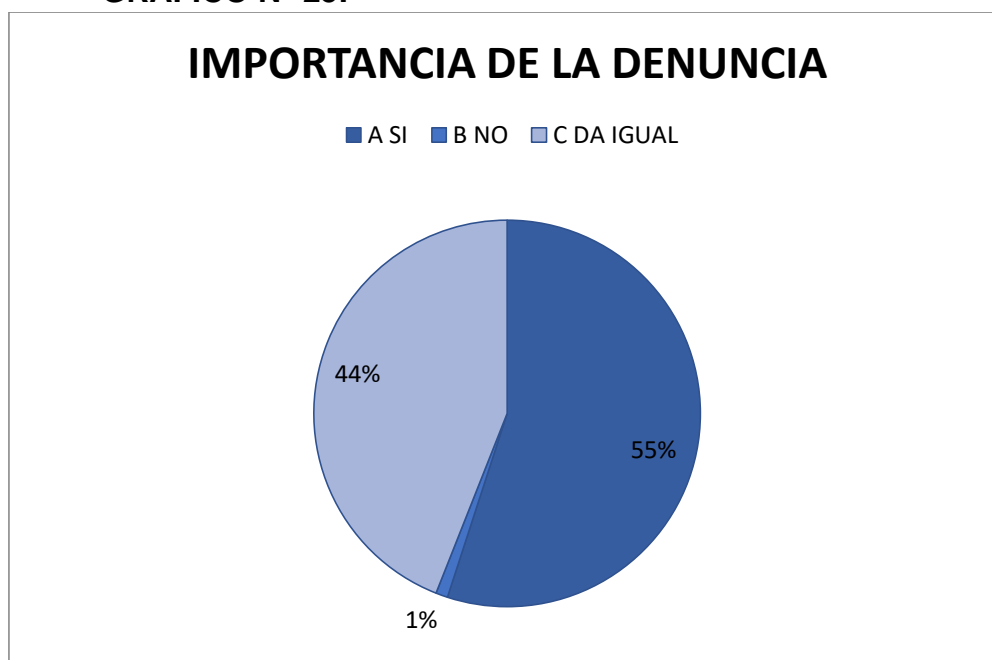
2.21. ¿Considera que es importante denunciar los hechos de corrupción?

SI ()

NO ()

DA IGUAL ()

GRÁFICO N° 25:



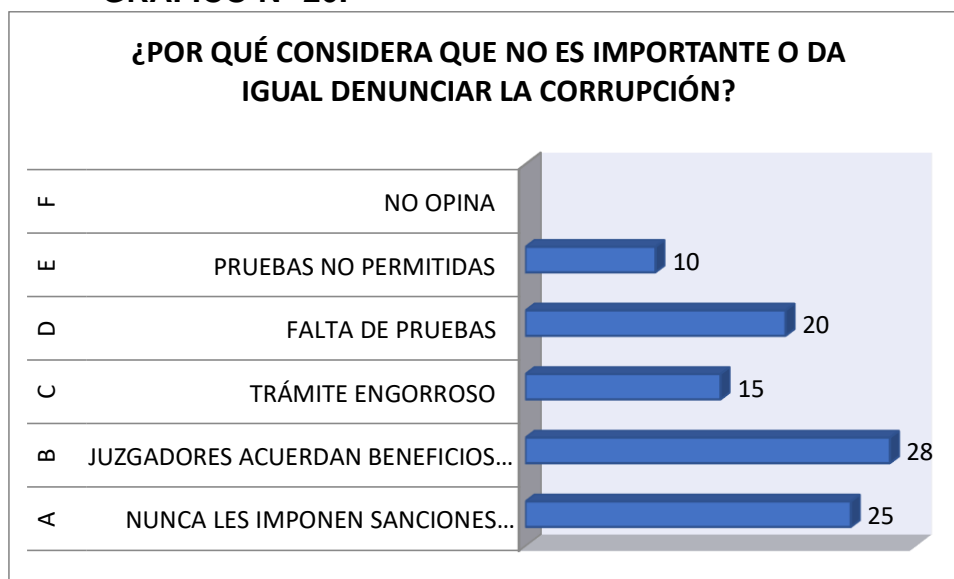
DESCRIPCIÓN

Que, a pesar de que en la anterior pregunta la mayoría de los encuestados refirió no conocer los mecanismos de denuncia; aun así en el gráfico N° 25, un 55% de la población indica que es importante denunciar los hechos corruptos. Un gran porcentaje como es 44% indica que da igual si denuncias o no; igual ellos casi siempre termina favorable para el imputado.

2.22. Si su respuesta anterior fue B o C, responda: ¿Por qué considera que no es importante o da igual denunciar los hechos de corrupción?.

A	Por qué nunca les imponen sanciones ejemplares	
B	Por qué los juzgadores están en acuerdo con los denunciados para beneficiarlos	
C	Por qué el trámite es muy engorroso y expone al denunciante	
D	Por qué no hay pruebas suficientes	
E	Porque las pruebas obtenidas son descartadas por vulneración del derecho a la intimidad (videos, audios, mensajes, llamadas, etc)	
F	No sabe, no opina	

GRÁFICO N° 26:



DESCRIPCIÓN

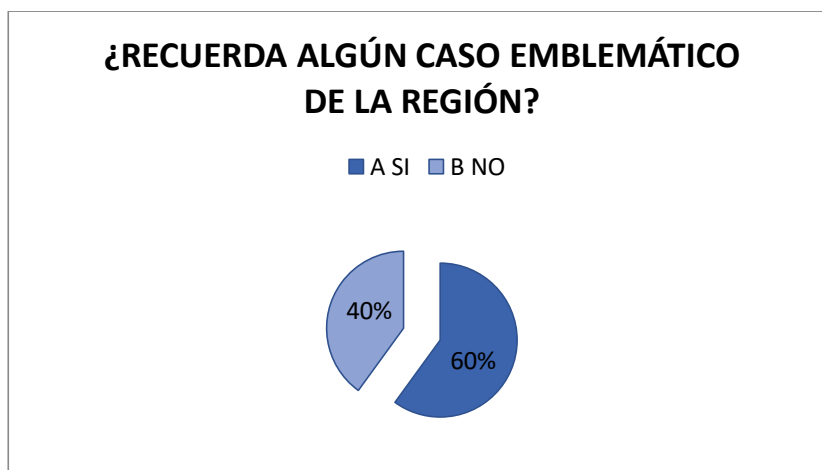
En el gráfico N° 26 un 28% y 25% considera que no es importante o da igual denunciar la corrupción, debido a que los juzgadores acuerdan beneficios con los denunciados o porque nunca se les imponen sanciones correspondientes.

2.23. Recuerda algún caso emblemático de corrupción en su región o a nivel nacional.

SI () ¿Cuál? _____

NO ()

GRÁFICO N° 27:



DESCRIPCIÓN

El gráfico N° 27 refiere que del total de pobladores encuestados, un 60% recuerda un caso de corrupción emblemático de la región; a los que muchos, jóvenes y mayores indicaban conocer el caso de “Los limpios de la corrupción”, episodio recientemente vivido y latente en nuestra región, que aun no se recupera.

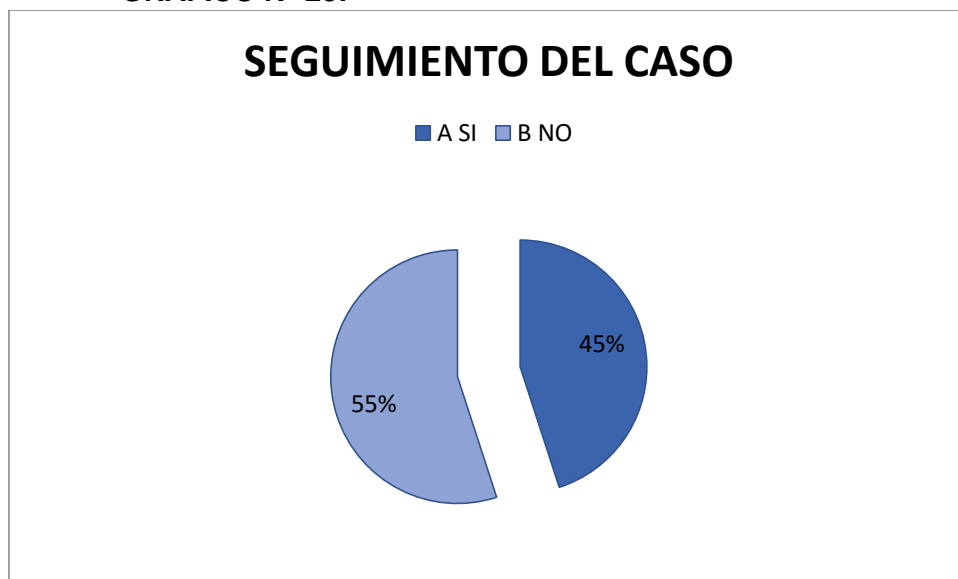
¿Cómo tomó conocimiento de él?

- Prensa escrita (22)
- Prensa televisiva (56)
- Radio (8)
- Boletines Institucionales (0)
- Se lo comentó un familiar o conocido (4)
- Trabaja en alguna institución involucrada (10)
- Otro _____

2.24 Sabe si dicho caso fue sentenciado. ¿Cuál fue el resultado?

SI () _____ NO () _____

GRÁFICO N° 28:



DESCRIPCIÓN

Sobre el caso puntual mayormente mencionado por los encuestados, se les consultó si habían hecho seguimiento al caso y si sabían si ya había sentencia en dicho caso. A o que un 55% indicó que no conoce el estado real del proceso; dado que solo se informan por los medios de comunicación.

2.25 ¿Qué solución plantearía para optimizar el proceso de denuncia y juzgamiento por el delito de corrupción?

DESCRIPCIÓN

De las soluciones mencionadas, resaltan la de fomentar programas de educación a la ciudadanía para darles a conocer los mecanismos de denuncia de los actos de corrupción; asimismo otros indican que debe formarse un tipo de comité sectorial que se encargue de fiscalizar la labor en el uso del gasto público y que fiscalice además el avance de los procesos penales en el caso, elaborando boletines periódicos que se dediquen a informar verazmente a la población y educarla respecto al tema. La mayoría de propuestas tienen al ciudadano como eje principal, dado que como nos refieren, confiarle nuevamente la situación a otras entidades es más de lo mismo; siendo de mayor confianza que los pobladores sean los que articulen todas las propuestas.

CONCLUSIONES

1. Que, a nivel nacional existen 30.913 casos sobre el delito de corrupción en trámite, de los cuales en la región Lambayeque se investigan 1293 casos, siendo las entidades más afectadas en la región, los gobiernos regionales y las municipalidades distritales. La corrupción genera una pérdida de 12.000 millones de soles anuales (3.680 millones de dólares) en Perú, un monto que podría servir para alimentar a 1,3 millones de habitantes pobres durante tres años.
2. Que, dentro de los delitos más comunes a nivel nacional en primer lugar se encuentra el peculado y en segundo lugar la colusión, asimismo en la región Lambayeque el primer lugar lo ocupa la colusión, el segundo lugar el peculado y el tercer lugar el peculado de uso.
3. Que, mediante la información recabada vía la técnica de encuesta se ha podido observar que la sociedad en general observa y reconoce al delito de corrupción como uno de los fenómenos de mayor impacto en la sociedad, manifestando no solo que la mayoría de los encuestados han sido partícipes o conocen de cerca dicha situación; asimismo es preocupante que la mayoría de ellos no acuden a denunciar dicho acto antijurídico, debido a que no conocen el mecanismo para hacerlo, consideran que el proceso no es efectivo y además conlleva para ellos una pérdida de tiempo.
4. Que, se ha podido comprobar que los medios existentes en el Derecho Penal para erradicar el delito de corrupción si son aptos o adecuados; sin embargo consideramos que su no congnoscibilidad por parte de los ciudadanos limita los efectos esperados. La población no conoce los mecanismos de denuncia,

por ello muchas veces deja pasar sin castigo un acto de corrupción, lo que lo lleva a acostumbrarse a tales hechos como un actuar normal, casi como cotidiano. Asimismo, si bien dichos mecanismos si son adecuados y con penas drásticas, sin embargo solo se encargan de la represión y la sanción, más no existen estrategias que abarquen la prevención. Una denuncia es presentada después de que ya hubo un perjuicio económico, si no se trabaja en prevención la situación continuará siendo la misma.

5. Que, otra de las falencias identificadas en el ámbito institucional, por la cual la mayoría de procesos penales termina absolviendo a los denunciados por corrupción; es que además existe corrupción a la interna de los entes involucrados en el proceso de investigación y juzgamiento; lo que sin duda alguna limita el desarrollo de una idónea investigación y la interposición de una sentencia ejemplar; viéndose reflejado en que de todos los funcionarios que fueron denunciados por corrupción durante los años 2009 a 2016, solo 648 fueron condenados y el 92% está con libertad condicional.
6. Que, para intentar disminuir los índices de comisión de dicho delito primero debemos conocerlo y analizarlo desde sus distintas vértices, identificando que es lo que representa para la sociedad en el ámbito jurídico, económico y social, no solo en cifras estáticas, sino recabando información directa de las víctimas e implicados, tanto responsables como comunidad jurídica. En ese sentido, consideramos que las entidades involucradas en el proceso de lucha contra la corrupción están trabajando de forma aislada, no realizando un trabajo multidisciplinario y conjunto.
7. Que se debe trabajar un proyecto que integre el trabajo de todos los sectores de la sociedad involucrados en el proceso de prevención, sanción y reinserción; dado que como se ha identificado también el fenómeno de la corrupción se genera en gran medida por condiciones internas del sujeto, tales como falta de valores o perfiles psicológicos y sociológicos que lo inducen a la comisión de los hechos; por lo cual se requiere de un equipo multidisciplinario

que intervenga en la elaboración de un plan o modelo integrado para reducir los índices de corrupción. A pesar de ser esta una investigación netamente jurídica, no se limita a propuestas solamente en el ámbito judicial, sino a toda aquella que se considere idónea para aportar en la solución del problema planteado. Nuestros informantes respaldan la propuesta de la presente investigación, considerando que se debe realizar una reforma aplicativa integrada, con propuestas innovadoras que no solo abarquen el ámbito jurídico sino que consideren multidisciplinariedad, de otra forma no se podría abarcar todas las vertientes de desarrollo del problema. En tal sentido se ha podido validar la correspondencia de la hipótesis planteada y en base a ello se ha formulado un aporte teórico y práctico denominado **“Modelo integrado para disminuir los índices de corrupción en el departamento de Lambayeque”**, el mismo que figura como anexo a la presente investigación.

RECOMENDACIONES

Que, en referencia al ámbito de represión y sanción es necesaria una intervención drástica de la Procuraduría como ente defensor del Estado, evitando la migración constante de procuradores, debido a que el cambio de defensor pone en ventaja a la defensa, al no conocer el caso desde el inicio, ni las estrategias aplicadas y ello dilata el proceso. Ante ello además se debe verificar la implementación de la ley que permite la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (proyecto aprobado en el año 2016).

Que, se requiere un monitoreo constante y reorganización del Sistema de Contrataciones del Estado, considerando que es una de las principales fuentes de corrupción. Asimismo se deben establecer filtros de selección para evitar la admisión en listas electorales a personas involucradas en delitos de corrupción.

Que, es necesario implementar mecanismos de fácil acceso para las denuncias de corrupción, estableciendo medidas de resguardo a denunciantes, testigos y quienes colabores en la investigación.

Que, se debe considerar otorgarle a la Contraloría General de la República autonomía constitucional y prerrogativas similares a las del Tribunal Constitucional, así como que sus informes tengan carácter vinculante.

Que, en referencia a la dimensión preventiva del delito de corrupción que consideramos absolutamente necesaria trabajar con prioridad; como recomendación principal se sugiere que las entidades políticas, religiosas, universidades, la Contraloría de la República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los Gobiernos Regionales y Locales, etc, y cualquier otra organización nacional o internacional interesada en apostar por una reforma aplicativa, conozca nuestra propuesta final (el modelo integrado para disminuir los índices de

corrupción en el departamento de Lambayeque) y la establezca como política dentro de su plan estratégico anual.

Las acciones preventivas establecidas en el modelo integrado pueden aplicarse en instituciones formativas como colegios, universidades o institutos; a fin de favorecer en la formación de los jóvenes y evitar la presencia de conductas propias de la corrupción desde temprana edad; para ello sería pertinente establecer un programa de voluntariado que capte a estudiantes y profesionales talentosos que deseen sumar en la realización del plan de acción. Todas las ramas profesionales pueden colaborar.

Es necesario establecer un cronograma de evaluación que registre los avances de aplicación del modelo, así como su éxito o fracaso. Se recomienda que la primera valoración se realice en un lapso de 4 o 5 años, para conocer el real impacto.

Se recomienda difundir el modelo planteado, a través de publicidad innovadora vía redes sociales y medios audiovisuales, a fin de que toda la población pueda conocerlo y sumarse, asimismo con la finalidad de que se involucren en la lucha contra la corrupción y actúen como fiscalizadores de la correcta realización del proyecto.

REFERENCIAS

1. SALINAS SICCHA, Ramiro, "Delitos contra la Administración Pública", 3ª edición, junio 2014, Editora Grijley E.I.R.L.
2. REYNA ALFARO, Luis, "El concepto penal de funcionario público. Desarrollos doctrinales y jurisprudenciales", en Delitos contra la Administración pública (Francisco Heydegger, coordinador), Idemsa, Lima, 2013, pp. 73 y ss.
3. ÀNGELES GONZÀLES, Fernando; FRISANCHO APARICIO, Manuel. Còdigo Penal. Tomo VII, Ediciones Jurídicas, Lima, 1998, p. 15 y ss.
4. ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. 3ª edición, Editorial Grijley, Lima, 2002, p. 15 y ss.
5. PATRÒN FAURA, Pedro y PATRÒN BEDOYA, Pedro. Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú. 7ª edición, Editorial Grijley, Lima, 1998, p. 44.
6. GÀLVEZ VILLEGAS, Tomás. Delito de enriquecimiento ilícito. Editorial Idemsa, Lima, 2001, p.16.
7. URQUIZO OLAECHEA, José. "Tutela penal y sujetos especiales propios en los delitos contra la Administración Pública". En: Rev. Peruana de Ciencias Penales. Nª 12, Lima, 2002, p. 230.
8. BIELSA, Rafael. "Derecho Administrativo". Tomo I. 6ª edición. Buenos Aires, 1994. Pàg. 463.
9. HUGO ALVAREZ, Jorge. El Delito de Peculado. 1ª edición, Editorial El Bùho E.I.R.L., Lima, 2006.

10. CARBONELL, Miguel. Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una mirada constitucional. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. 59.
11. LANDA ARROYO, César. «Tribunal Constitucional y Lucha Anticorrupción». En Edgard Reymundo Mercado (comp.). Lucha contra la corrupción. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República, 2008, p. 27
12. Luis Huerta Guerrero, Prevención y sanción de la corrupción: una perspectiva constitucional - Estudios críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en Perú, Impresión: GRAFICA DELVI S.R.L. Av. Petit Thouars N° 2009, Lima 14 – Perú Teléfono: 471-7744 El IDEHPUCP, creado en el 2004, es el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
13. Walter Vladimir Molina Padrón. Molina, P. W. V. (2014). De la corrupción a la anticorrupción. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes. Recuperado en: Retrieved from <http://www.ebrary.com>
14. <http://laley.pe/not/3210/la-responsabilidad-administrativa-de-las-empresas-corruptas->
15. Caro Coria, Carlos, “La ‘muerte civil’ difícilmente se aplicará a los corruptos”, texto recuperado en: <http://laley.pe/not/3592/-ldquo-la-lsquo-muerte-civil-rsquo-difcilmente-se-aplicara-a-los-corruptos-rdquo->
16. Novoa Curich, Yvana, Torres Pachas, David, Caso Manuel Palomino Lizano Sentencia recaída en el Exp. N° 112-2013-11-1826-JR-PE-02 texto recuperado en: <http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/comentario4.pdf>.

ANEXO N° 01

CUESTIONARIO

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD JURÍDICA Y PÚBLICO EN GENERAL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO

Le agradecemos responder a este breve cuestionario (basado en la encuesta nacional sobre corrupción de Proética 2015); que tiene como propósito obtener datos que nos permitan conocer la percepción de la población sobre la corrupción y los mecanismos de denuncia existentes, a fin de plantear estrategias que permitan disminuir los índices de corrupción en la provincia de Chiclayo. Para su tranquilidad precisamos que el presente instrumento es completamente anónimo.

I. GENERALIDADES: INFORMANTES

1.1. EDAD

- a) 18 a 24 () b) 25 a 39 () c) a 40 a 60 () d) 60 a más ()

1.2. SEXO

- a) Masculino () b) Femenino ()

1.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN

- a) Primaria () b) Secundaria () c) Superior () d) Posgrado ()

1.4. NIVEL SOCIOECONÓMICO (considerando a “A” como el nivel más alto)

- a) A b) B c) C d) D

II. PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA

2.1. ¿Cuáles considera Ud. que son los principales problemas por los que atraviesa nuestro país en la actualidad? (marque máximo 3 ítems)

A	Delincuencia	
B	Corrupción	
C	Consumo de drogas	
D	Pobreza	
E	Desempleo	
F	Crisis política	
G	Contaminación del Medio Ambiente	
H	Mal sistema de salud pública	
I	Mal sistema educativo	
J	Otro: _____	

2.2. En referencia a los problemas que atraviesa nuestra región Lambayeque, selecciona los 3 más relevantes en la actualidad:

A	Delincuencia	
B	Corrupción	
C	Consumo de drogas	
D	Pobreza	
E	Desempleo	
F	Crisis política	
G	Contaminación del Medio Ambiente	
H	Mal sistema de salud pública	
I	Mal sistema educativo	
J	Otro: _____	

2.3. De las siguientes opciones ¿Cuál consideras que es el problema que limita más el desarrollo del país y de la región?

A	Corrupción de funcionarios y autoridades	
B	Ineficiencia de funcionarios y autoridades	
C	Falta de coordinación entre instituciones	
D	Escasez de recursos económicos	
E	Problemas de política	
F	Mala gestión pública	

2.4. ¿Cree que en los próximos 05 años la corrupción en el Perú (...)?

- Habrá aumentado ()
- Seguirá igual ()
- Habrá disminuido ()
- No sabe, no opina ()

2.5. ¿Cómo calificaría la gestión de las siguientes instituciones? (marque una opción por cada institución propuesta)

A	Medios de Comunicación	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
B	Defensoría del Pueblo	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
C	Contraloría de la República	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
D	Fiscalía de la Nación	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
E	Poder Judicial	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
F	Gobiernos Regionales	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
G	Policía Nacional	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
H	Gobierno central	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
I	Congreso de la República	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA
J	Partidos Políticos	MUY BUENA	BUENA	NI BUENA NI MALA	MALA	MUY MALA	NO PRECISA

2.6. ¿Cuán eficaz considera que es el Gobierno Central en la lucha contra la corrupción?

- Muy eficaz ()
- Algo eficaz ()
- Poco eficaz ()
- Nada eficaz ()
- No precisa ()

2.7. ¿Considera que el Delito de corrupción está teniendo sanciones correctas y ejemplares?

SI () NO () TAL VEZ () NO OPINA ()

2.8. Si su respuesta anterior es NO diga: ¿Por qué cree Ud. que no se sanciona la corrupción?

A	Falta de leyes adecuadas	
B	No se investiga	
C	No se denuncia	
D	Mal llevado el Proceso	
E	No hay dinero suficiente para investigar	
F	¡Está todo arreglado!	

2.9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes situaciones?

Que un funcionario público favorezca a parientes y amigos	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite público	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Pagar “propina” para que le perdonen una multa	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Llenar documentos con datos falsos por conveniencia	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Robar servicios públicos(agua, luz, etc)	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO

2.10. ¿Alguna vez le solicitaron o dio regalos, propinas, sobornos o coimas a algún funcionario público?

- A) Si me solicitaron dar y si ()
- B) Si me solicitaron dar pero no di ()
- C) No me solicitaron pero di ()
- D) No me solicitaron dar y tampoco di ()

2.11. Si su respuesta anterior fue la opción A o C, responda lo siguiente: ¿Por qué dio regalos, propinas, sobornos o coimas a algún funcionario público?

- Para evitar mayores sanciones ()
- Porque si uno no paga las cosas no funcionan ()
- Es como una costumbre ()
- Los funcionarios ganan poco y así les ayudamos ()

2.12. Si su respuesta a la pregunta 2.10 fue la opción A, B,C, responda lo siguiente: ¿Cuándo le solicitaron dar o dio regalos, propinas o coimas, etc; lo denunció?

SI ()

NO ()

NO OPINA ()

2.13. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases?
(muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo, no precisa)

Se debe sancionar a los funcionarios corruptos solo si no hacen obras en beneficio de la población	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Es necesario algo de corrupción para poder promover el crecimiento de la economía y el desarrollo	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
Es necesario algo de corrupción para poder facilitar los trámites y procedimientos en las instituciones públicas	TOTALMENTE DE ACUERDO	DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO	EN DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO

2.14. ¿Qué tan infiltrado o no cree que está el crimen organizado en la política?

- Muy infiltrado ()
- Poco infiltrado ()
- Nada Infiltrado ()
- No opina ()

2.15. Si su respuesta anterior fue A o B, responda: ¿De qué manera cree que se manifiesta el crimen organizado en la política?

- Financiamiento de campañas políticas con dinero ilícito ()
- Conexiones políticas con funcionarios en puestos claves ()
- Contrataciones públicas ilícitas para ganar dinero ()
- Infiltración de grupos subversivos ()

2.16. ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad civil en combatir la corrupción?

A	Capacitar a los ciudadanos para que denuncien	
B	Promover reformas de políticas públicas	
C	Vigilar el gasto público y exigir rendición de cuentas	
D	Apoyar al periodismo de investigación	
E	Organizar manifestaciones y protestas	
F	Monitorear la gestión pública	

2.17. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría Ud. de acuerdo?

A	Los empresarios que pagan una coima son cómplices del funcionario que la pide	
B	Los empresarios que pagan una coima son víctimas del funcionario que la pide	
C	Los empresarios a veces se ven obligados a dar coimas para poder hacer su trabajo	
D	Las trabas burocráticas generan más oportunidades para el pago de coimas	

2.18. ¿En qué entidades considera que se desarrolla más corrupción?

- A. Gobierno Central ()
- B. Gobierno Regional ()
- C. Gobierno Local ()
- D. Policía Nacional ()
- E. Poder Judicial ()
- F. Ministerio Público ()
- G. Otra: _____

2.19. ¿En qué empresas considera que hay más corrupción? (max3)

- A. Empresas grandes ()

- B. Empresas medianas ()
- C. Empresas pequeñas ()
- D. Empresas informales ()
- E. Empresas formales ()
- F. En todas por igual ()

2.20. ¿Conoce los medios o mecanismos existentes para denunciar los hechos de corrupción de funcionarios?

SI () NO () NO OPINA ()

2.21. ¿Considera que es importante denunciar los hechos de corrupción?

SI () NO () DA IGUAL ()

2.22. Si su respuesta anterior fue B o C, responda: ¿Por qué considera que no es importante o da igual denunciar los hechos de corrupción?.

A	Por qué nunca les imponen sanciones ejemplares	
B	Por qué los juzgadores están en acuerdo con los denunciados para beneficiarlos	
C	Por qué el trámite es muy engorroso y expone al denunciante	
D	Por qué no hay pruebas suficientes	
E	Porque las pruebas obtenidas son descartadas por vulneración del derecho a la intimidad (videos, audios, mensajes, llamadas, etc)	
F	No sabe, no opina	

2.23. Recuerda algún caso emblemático de corrupción en su región o a nivel nacional.

SI () ¿Cuál? _____
NO ()

¿Cómo tomó conocimiento de él?

- Prensa escrita ()
- Prensa televisiva ()
- Radio ()
- Boletines Institucionales ()
- Se lo comentó un familiar o conocido ()
- Trabaja en alguna institución involucrada ()
- Otro _____

2.24. Sabe si dicho caso fue sentenciado. ¿Cuál fue el resultado?

SI () _____ NO () _____

2.25. ¿Qué solución plantearía para optimizar el proceso de denuncia y juzgamiento por el delito de corrupción?

Agradecemos tu apoyo

ANEXO 2:

PROPUESTA N° 01

Sería interesante reactivar con todo lo necesario el proyecto de ***“Vigías ciudadanos para detectar los riesgos de corrupción en funcionarios públicos de los gobiernos locales”*** de La Red Nacional Anticorrupción (RNA) Lambayeque que se presentó y ejecutó durante el año 2010.

Esta iniciativa conformó comités de vigilancia integrados por jóvenes de seis distritos de Chiclayo que realizaron labores de monitoreo a la gestión de sus municipios e identificaron si existían o no problemas de corrupción. Los casos que se identificaron fueron canalizados y presentados a través de un portal web denominado Red-Alertas.net el cual fue construido por los alumnos de una universidad y buscó convocar a todos los ciudadanos (as) que quieran colaborar, denunciar y sumarse a la lucha contra la corrupción.

Para estimular a los jóvenes a participar, además de las capacitaciones, el proyecto impulsó concursos audiovisuales y de naturaleza lúdica. Además se difundieron boletines informativos sobre los logros y alcances del proyecto.

El 2011, el RNA de Lambayeque se propuso trabajar para fortalecer la participación y control por parte de la ciudadanía para así evitar o mitigar los riesgos de irregularidades en la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Al igual que en otro proyecto anterior, esta iniciativa se ejecutó con grupos vigilantes, en este caso pobladores del pueblo joven “Nueve de Octubre” y con medios de comunicación de Lambayeque, los mismos que sirvieron como canalizadores para: difundir los resultados de las actividades de vigilancia y control y concientizar a la población sobre la importancia de la vigilancia y participación ciudadana. De igual manera, se utilizó la Plataforma de Red Alertas para involucrar a organizaciones de base y colectivos/ONG locales y medios de comunicación en la vigilancia de las obras ejecutadas por la Municipalidad

Provincial de Chiclayo y en la denuncia de actos de corrupción en caso fuesen detectados.

Finalmente, es preciso indicar que para esta nueva intervención el grupo tendría que verse fortalecido con representantes de toda la comunidad, incluyendo a entidades y empresas locales, a fin de asegurar su continuidad y éxito, en la prevención, denuncia y sanción de los actos de corrupción a nivel de gobiernos locales.

ANEXO 3:

PROPUESTA N° 02

MODELO INTEGRADO PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE CORRUPCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PRESENTACIÓN

Dentro del desarrollo de la tesis titulada **DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES**, se ha hecho un análisis de los niveles de corrupción en nuestro departamento, el cual llevó a preparar la siguiente propuesta integral multidisciplinaria, que comprende no solo acciones jurídicas, sino sociológicas y psicológicas que pueden articularse con profesionales de dichas ramas que colaboren con su ejecución, dado que como se ha identificado, la falta de valores y las condiciones personales del individuo (funcionario), son las que en múltiples ocasiones determinan a la comisión del delito; asimismo dado que este ya es un fenómeno incrustado en la sociedad, requiere de un amplio estudio que busque modificaciones de comportamientos, no solo normas regulatorias:

INTRODUCCIÓN

La presente propuesta ayudará a disminuir los índices de corrupción en el departamento de Lambayeque, logrando proponer actividades preventivas y reformativas en los sujetos activos que incurrir en el delito y en aquello que ejerce puestos funcionales y están propensos a hacerlo, con la finalidad de sembrar en ellos conductas que les permitan recapacitar ante sus hechos delictivos, generar prácticas de apoyo solidario y tratar problemas psicosociales con los que conviven diariamente por las diferentes causas afectivas de su vida. Este modelo se preocupa por trabajar de manera conjunta no solo con entidades públicas sino con organismos privados e internacionales para dar cimientos de construcción de una política anticorrupción que permita a los operadores de justicia sanciones más drásticas y coherentes como proyectar el trabajo de

supervisión y acompañamiento de las actividades que se realizarán con los sujetos activos como parte del proceso de resocialización y reinserción en la sociedad.

El presente Modelo integrado está basado en el enfoque estratégico, supone identificar y seleccionar las mejores alternativas o caminos que se puedan utilizar; elaborar las rutas a seguir e implementar para lograr los objetivos que se persiguen; hacer una planificación proyectada de manera positiva a lograr lo que tal vez todos creen un imposible que es trabajar conductas en el uso del poder y siendo muy ambiciosos lograr conductas dentro del marco legal, otorgándole al sujeto propenso al delito, un conjunto de herramientas y estrategias para evitar su comisión.

1. PROPÓSITO:

El propósito de este modelo es asegurar que a través de un conjunto de actividades que se desarrollarán dentro y fuera de los municipios, los gobernantes y sus familias hagan suyas las herramientas que se les proporcionarán para vivir dentro de las normas de conducta que impone nuestra sociedad, teniendo claro y bien definido que existen otras formas justas de obtener patrimonio, de poder gozar de dinero limpio que ha sido adquirido por un trabajo honrado. Este modelo también permitirá que la reinserción a la sociedad de aquellos que ya han cometido el delito se dé con mayor facilidad y que se tenga una actitud positiva frente a sus contingencias, todo esto se verá reflejado en su conducta y predisposición al cambio, que demuestren o que se comprobará, cuando se les realice el seguimiento.

En este sentido el Modelo Integrado aporta una estrategia innovadora con principios que nos permitirá tener los lineamientos claros durante todo el proceso. Asimismo, se ha considerado pertinente que dentro de este proceso la sociedad civil sea un aliado estratégico que

trabajarán conjuntamente a través de proyectos que aportan a lograr los resultados esperados.

2. OBJETIVO:

Disminuir los índices corrupción en el gobierno local de Chiclayo, en el marco de los principios de solidaridad, colaboración e integración, considerando como actor principal a la sociedad civil organizada.

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Las relaciones apostadas por este modelo sustentan la elaboración de una estrategia innovadora para disminuir los índices de corrupción en la Región Lambayeque, que tiene en cuenta la relación entre las dimensiones de reconocimiento de los aspectos que influyen en la comisión del delito y la sistematización de la reinserción socio humana.

Para establecer las bases sólidas que sustentan los argumentos teóricos que propician la sistematización lógica funcional del comportamiento de los “delincuentes de poder”, es preciso explicar las relaciones que se producen entre las configuraciones de ambas dimensiones, donde la sistematización constituye un punto de nexo fundamental, como propósito del modelo.

3.1 Dimensión de reconocimiento de los aspectos que influyen en la corrupción

La dimensión de reconocimiento de los aspectos que influyen en la corrupción permite la construcción abstracta de todos los factores que intervinieron en la formación del delincuente que se vio seducido por el poder, así como la reconstrucción del posible bagaje de experiencias vividas por éstos dentro de su entorno social, teniendo en cuenta el aspecto político y económico que los rodeó en su formación, asimismo comprende la evaluación y análisis de cómo estos factores o aspectos calaron en la

vida de los juzgados pro corrupción y los expuestos a un jiu, lo que en su conjunto aportará para determinar en la sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes cuales fueron las conductas que quedaron definidas y permitirá hacer una prospección de si estas pueden ser moldeables en el futuro.

3.1.1 Formación social afectiva de los que incurren en el delito de corrupción

La formación social afectiva, es entendida como la programación, planificación y configuración de un proceso educativo renovador, con una visión distinta de quien delinque, el cual les brinda una nueva oportunidad para empezar desde cero. Este proceso de instrucción formativa incluye la educación emocional, moral, brindándole herramientas que las personas que han incurrido en el delito de corrupción puede utilizar en el momento preciso para poder hacer frente a su realidad y optar por no cometer actos en contra de otros, poniendo en riesgo el patrimonio y hasta la vida de otro ser humano.

Vemos los casos de corrupción como casos muy aislados, donde pensamos de repente que solo a los empresarios o gente con poder puede ser agente y víctima de estos delitos, sin embargo, a todos como sociedad nos afecta este delito, porque afecta al interés público y porque vienen nuevas generaciones y continuamente nuestros niños, que son el futuro de nuestro país conviven con estas noticias, esto nos hace responsables para contribuir y aportar como sociedad civil, a través de grupos organizados a tomar cartas en el asunto y ver de qué manera podemos ayudar a combatir este delito, de repente con lo más mínimo que sería tomar precauciones para evitar la comisión de estos delitos, así como establecer brigadas para monitoreo, que se encarguen de informar a la policía sobre algún acto sospechoso (ver anexo n° 02).

Se tiene que formar a los funcionarios que ostenta poder en el proceso de vinculación con la sociedad, para que aprendan a gestionar sus

emociones y para que conozcan las formas correctas de ganarse el dinero, para que se siembre en ellos el aspecto espiritual, inyectando moral y buenas costumbres que deben tener en la sociedad y esto se logrará a través de una planificación conjunta de actividades que aporten a que el delincuente y el que esté propenso a serlo, pueda ser capaz de crecer en estos aspectos.

3.1.2 Diagnóstico del nivel de corrupción en la ciudad de Lambayeque

El diagnóstico del nivel de corrupción en la ciudad de Lambayeque proyecta los niveles en los que este delito se ha ido posicionando en nuestra región, cuáles serían los índices a los que ha llegado, así como cuáles serían los móviles que impulsaron la comisión del mismo y las variantes en las que se han suscitado

Aquí es indispensable aplicar una encuesta la misma que nos permitirá conocer los niveles de corrupción a los que ha llegado a registrar la ciudad de Lambayeque (**encuesta aplicada en el marco de esta investigación-anexo 01**), teniendo en cuenta los que se han llegado a consumir, así como los que han quedado en tentativa. Sumado a ello es necesario conocer cuáles fueron los agravantes en la comisión del delito, por quienes fueron ejecutados, si la comisión de los hechos fueron por primera vez o por personas inexpertas o si se trata de una organización criminal.

Dicha encuesta también nos permitirá clarificar cuales son las áreas o aspectos que se debe trabajar para contribuir a disminuir los índices de corrupción en la ciudad de Lambayeque, sobre qué se debe incidir o prestar mayor atención, como es que operan las bandas criminales, qué se podría realizar para desarticular estas organizaciones, qué medidas se deben tomar en los centros penitenciarios y qué papel juega la policía así como el ministerio público y el poder judicial para contribuir con el objetivo propuesto. Hay que tener en cuenta que esta información es sensible y debe ser utilizada por personal calificado, debido a que en su aplicación se

debe mantener en reserva a las personas que nos brindarán la información y que de alguna manera nos ayudarán a conocer la realidad a la que nos enfrentamos.

Diagnosticar los niveles de corrupción en la ciudad de Lambayeque permite centrar del contexto cuales han sido las falencias o deficiencias que se viene cometiendo hasta ahora en los municipios y demás entidades de la Administración Pública.

3.1.3 Análisis del comportamiento social de los sujetos activos

El propósito de realizar este análisis es explorar, crear y probar sistemáticamente que si es posible volver a educar, establecer caminos alternativos para que un delincuente pueda reflexionar en su actuar y decida respetar las normas de la sociedad en la que vivimos. Al analizar el comportamiento de los delincuentes podremos corroborar los sentimientos que le generan a este otros seres humanos y en qué medida se puede trabajar el respeto por los demás y por la propiedad de los demás. Asimismo conoceremos que disciplinas han venido influyendo en la resocialización de los delincuentes teniendo presente que dentro de las funciones que tiene el estado es el trabajar con la finalidad de que quien comete hechos delictivos pueda reinsertarse a la sociedad enfocado en no volver a delinquir. En este sentido, es claro que la sociedad no puede controlar o prever o asegurar la no comisión de los actos ilícitos, pero se puede no solo involucrar sino comprometer para aportar en la inclusión de un ser humano a quien se le brinda otra oportunidad para cambiar y mejorar nuestra sociedad.

En nuestro modelo, el componente análisis del comportamiento social del delincuente apuesta por trabajar con un procedimiento ordenado claro y preciso enfocado en lograr el objetivo planteado que es disminuir los niveles de la corrupción en la ciudad de Chiclayo y esto se traduce a que el trabajo que se realizará no será momentáneo ni es una sola época sino que implicará un seguimiento para evaluar el antes, durante y después, que

permitirá demostrar si es posible o no la disminución de este delito y cómo y en qué medida todos los esfuerzos sumados han logrado su propósito.

Este análisis a su vez permitirá un trabajo en equipo donde toda organización pueda sumarse al trabajo de reeducación del comportamiento, de orientar la conducta del delincuente y persona propensa a delinquir, para moldear y brindar estrategias para que el delincuente no reincida y a que tomen las medidas las severas con la finalidad de paralizar acciones delictivas antes incluso de que sean cometida.

3.1.4. Sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes

Este proceso de sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes, está referido a plasmar de forma clara y precisa cuales son las características del comportamiento que definen al delincuente, cuáles serían las formas de reacción que tienen ante un hecho común, cómo es que funciona coherentemente su pensamiento. Permite que se tenga claro cómo se desarrolla su lógica ante alguna eventualidad, trasluciendo la personalidad con la que se desenvuelven en la sociedad con la finalidad de conocerla y mejorarla.

La formación viene a ser un proceso social, una necesidad de naturaleza cultural que obedece a la integración de capacidades y habilidades que se generan en la dinámica de las relaciones, en tal sentido, la sistematización lógica funcional del comportamiento apuesta porque los sujetos se adapten al medio, apuesta por una formación diferente en todos los contextos sociales. Permitirá a la persona mejorar su capacidad de comprensión de sensibilidad y de reflexión, logrando la construcción de un conocimiento que le permita surgir sin necesidad de incurrir en hechos delictivos, de ser capaz de generar su ingreso sin tener que apoderarse de los bienes ajenos

3.2 Dimensión de la sistematización de la reinserción socio humana

La dimensión de sistematización de la reinserción socio humana es la expresión que permite relacionar el diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto con la evaluación de la pertinencia psicosocial por la sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes y posible delincuente a través de la generalización del comportamiento social humano.

3.2.1 Sistematización lógica funcional del comportamiento de los delincuentes

En esta segunda parte del modelo propuesto, el proceso planteado permite que una vez diagnosticado el nivel de corrupción en la ciudad de Lambayeque y analizados los factores del contexto que influyen en el comportamiento del delincuente y posible delincuente, con miras a convertir esta formación inicial en una formación del pasado, para incorporar dentro de su estructura mental conceptos herramientas y estrategias que con una planificación adecuada permitirá una formación adecuada de su conducta y una transformación en su pensamiento, dejando los cimientos para plantear el nuevo comportamiento sobre el que girará el delincuente para ser reincorporado a una sociedad que estará apostando por un cambio radical.

En tal sentido esta la nueva dimensión permitirá conectar, agrupar, consolidar nuevas estructuras, conceptos, herramientas, estrategias, alternativas, parámetros, lineamientos, sobre los cuales se desenvolverá el delincuente y como a partir de estos, se establecerán el conjuntos de componentes a tener en cuenta para su evaluación y seguimiento.

Al ser esta etapa un proceso reformador continuo, dinámico, se trabajará de manera coordinada con todos los agentes que se sumen a trabajar por disminuir los índices de la corrupción en la ciudad de Lambayeque como parte de un modelo educativo transformador y guía para el establecimiento de una política criminal coherente con las necesidades de nuestra sociedad.

3.2.2 Diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto

En el presente modelo se consigna el componente diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto como un proceso que busca el aprendizaje del delincuente a través de diversas actividades que se realizan en la sociedad civil, en las escuelas y universidades, tomando dichas experiencias exitosas para ser replicadas, las mismas que serían llevadas a cabo o dirigidas por los agentes que intervendrán en este proyecto.

Asimismo, se debe tener en cuenta que dentro de este proceso de enseñanza se va a aportar con cimientos prácticos que servirán de ejemplo con casos reales con los que se podrían enfrentar y que al ser reales son hechos ciertos que servirán muy bien para ejemplificar lo que acontece en nuestra sociedad, retando a las personas beneficiarias de los mismos a una reforma personal, a una reinención de su personalidad.

Aquí, conforme se explica, se plantean dos alternativas llevar un problema de la sociedad a un taller que desarrollarán en el centro penitenciario con la finalidad de que ellos mismos planteen las posibles soluciones del caso propuesto o en todo caso trabajar con zonas vulnerables de la comisión de los posibles delitos para que con estos se trabaje aspectos sociales, es decir, se practique a través del principio de solidaridad la ayuda mutua, el compañerismo y se aporte a través de la acción con centros que requieren de nuestra ayuda, como son los hospitales, el asilo de ancianos, los albergues para jóvenes, también se podría generar la ayuda con proyectos sociales para cuidar el medio ambiente, la limpieza de zonas de difícil acceso, la recolección de material reciclado que puede servir incluso para generar un ingreso económico legal.

Una vez desarrolladas ambas alternativas, podremos corroborar que serán distintos los resultados logrados aplicando este componente en los diferentes escenarios planteados, ello permitirá trabajar en la sociedad y

para la sociedad civil una vez que se plantee esta propuesta como una actividad permanente

Si bien es importante tener en cuenta que esta propuesta otorgará conceptos y estructuras cognitivas que plantean el ejercicio de la moral y de la solidaridad, es necesario definir como realizar una generalización del comportamiento social humano, de manera tal que se usen todos los recursos disponibles y potencialidades de las instituciones o personas intervinientes. El diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto se relaciona con la evaluación de la pertinencia psico social en la medida que una vez ubicadas las actividades a trabajar se evaluarán si estas se deben o no desarrollar y bajo qué contexto.

3.2.3 Evaluación de la pertinencia psico – social

La pertinencia de las actividades que se logren ubicar del contexto solo serán útiles si encontramos la forma de realizar el seguimiento o de determinar de qué forma, durante qué período y quien será el responsable de llevar un control de las mismas, por tal motivo el modelo propuesto requiere necesariamente de un compromiso no solo para ejecutar acciones que trasladen conocimientos o herramientas sino de acciones propias enfocadas a evaluar en qué medida están sirviendo el conjunto de aportes que se está trabajando con los delincuentes y posibles delincuentes identificados por los “Vigias” (**ver anexo anterior**), de tal manera de sea evidente un cambio de conducta que nos brinde señales de que el trabajo realizado va por buen camino, sin embargo, no solo nos dejaremos llevar por el aspecto subjetivo a través de las entrevistas a los delincuentes sino que una vez incorporados en el programa se tiene que evidenciar que la conducta verdaderamente está trabajando por reincorporarse a la sociedad como ser humano arrepentido del delito y dispuesto a buscar otros medios alternativos para obtener sus bienes y adquirir su propio patrimonio.

Consideramos entonces a este componente como un proceso por el cual se evalúa si los resultados de las actividades realizadas con los

delincuentes con la finalidad de coadyuvar a que no se cometan los delitos de corrupción dentro del centro penitenciario han dado fruto a raíz de la evaluación de los niveles de corrupción después de unos meses de ejecutada la propuesta

La relación entre el diseño de actividades psicosociales reformativas del contexto y la evaluación de la pertinencia psicosocial, constituye un par dialéctico que actúa a través de la generalización del comportamiento social humano.

3.2.4 Generalización del comportamiento social humano

En el modelo propuesto se considera al componente generalización del comportamiento social humano como el proceso que permite consolidar cuáles son las acciones que demuestran el respeto y la solidaridad por la sociedad, de tal manera que se pueda plantear un objetivo o reto con los funcionarios que han incurrido en el delito de corrupción o que son vulnerables a cometerlo, de tal manera que se tengan claras cuáles serían las acciones que nos permitirían saber y reconocer que están actuando conforme a derecho y que no están incurriendo en la comisión de dicho delito.

La generalización del comportamiento social humano se sustenta en la solidaridad y ayuda al próximo, en el compañerismo y trabajo en equipo es necesario tener lineamientos claros para poder trabajar bajo una estructura sobre cuáles son los objetivos trazados y cuáles son las actividades que se van a desarrollar, considerando que estas pueden ir variando de acuerdo a la necesidad y en la medida de que nuevos agentes se van sumando a este trabajo.

4. Estrategia innovadora para combatir la corrupción en el departamento de Lambayeque

4.1. Actividades a nivel de estado

Objetivo: Capturar a los corruptos

1. Establecer alianzas con la sociedad como aliado estratégico para la comunicación efectiva y el aporte valioso cuando se trata de detener a un delincuente, en tal sentido, el estado deberá proporcionar un número confidencial para que cualquier ciudadano colabore con la captura o detención de un delincuente. Asimismo brindar todas las garantías al ciudadano que se decida a denunciar.
2. Reforzar el programa de recompensas el cual será puesto en conocimiento de los ciudadanos a través del portal web con la finalidad de que los ciudadanos conozcan a los delincuentes y se animen a reportarlos sin necesidad de que se tenga que dejar constancia del apoyo que está brindando a la policía
3. Modificar el Nuevo Código Procesal Penal con la finalidad de que se amplíe la etapa de investigación y le permita al Ministerio Público y a la policía realizar más diligencias para llegar al paradero de los delincuentes.

Objetivo: Sancionar a los que cometen delito de corrupción

1. Establecer una cultura de denuncia por parte de la sociedad. Educarlos con los mecanismos para accionar, así como con las sanciones a imponerse y el desarrollo del proceso.
2. Establecer sanciones justas y coherentes.
3. Mejorar el proceso de juzgamiento, hacerlo más cognoscible a la sociedad para una mejor fiscalización.
4. Monitorear a los operadores del Derecho que lleven a cabo los procesos, para evitar suspicacias de la población.
5. Apoyar en el recojo de pruebas que haga viable el juicio.

4.2. Actividades para trabajar con los delincuentes

4.2.1 Actividades para desarrollar autoestima

Objetivo: Desarrollar la autoestima en las personas que han incurrido en el delito de corrupción y con los funcionarios municipales que está inmersos o son propensos a cometer dicho delito.

- a. Se trabaja en grupos pequeños en un salón especial para talleres, donde se les requiere que sentados en círculo uno por uno tome un espejo y señale que es lo que ve, una vez que todos terminan de realizar esta actividad, tomarán nuevamente el espejo y cada uno en su turno señalará que es lo que desea ver, en que le gustaría convertirse.
- b. Cada uno de los participantes escribirá en un papel que es lo que desea recibir, un abrazo, unas palabras de aliento, una canción, una historia, un apretón de manos, todos estos pedidos serán ingresados en una caja, la persona que dirige señala quien saca un papel y otorgará a quien escribió en el papel lo que éste ha pedido.
- c. Se manera quincenal, se recibirá charlas de autoestima a cargo de un psicólogo o de un grupo de estudiantes de los últimos ciclos de la escuela de psicología de la universidad o de las universidades que se *sumen a este proyecto.*

4.2.2 Actividades para desarrollar Inteligencia Emocional como medida para gestionar emociones violentas.

Objetivo: Desarrollar la inteligencia emocional en los delincuentes que han cometido delito de corrupción y en los funcionarios propensos a hacerlo.

- a. Se desarrollará talleres para desarrollar la Inteligencia Emocional

- b.** En el salón de talleres se proveerá de un televisor para que se proyecten videos sobre inteligencia emocional, los mismos que una vez culminados podrán ser discutidos por los asistentes
- c.** Se solicitará a los participantes que se organicen para representar sketch sobre inteligencia emocional en donde se demuestre que si es posible canalizar emociones.
- d.** La psicóloga o el grupo de estudiantes en psicología brindará charlas sobre la inteligencia emocional y sus beneficios.

4.2.3 Actividades para el manejo del estrés

Objetivo: Otorgar estrategias para que los participantes sean capaces de relajarse en un momento de ansiedad y que les permita dirigir sus emociones.

- a.** La psicóloga o el equipo de practicantes enseñarán ejercicios de respiración para que los delincuentes aprendan a canalizar sus energías negativas o puedan calmarse en una situación tenga o cuando enfrenten el sentimiento de cólera.
- b.** Se alcanzará una batería de ejercicios donde se muestra en gráficos ejercicios de respiración, los mismos que los presos practicarán para lograr ejecutarlos correctamente.
- c.** En la sala para talleres se habilitará un equipo de sonido para que se puedan trabajar talleres de danza y de risoterapia en donde los presos puedan sentirse relajados. Se recomienda que estos ejercicios se realicen una vez por semana.
- d.** Se promoverá sesiones para trabajar en grupo donde se podrá conversar cada quince días respecto de los avances y de cómo se sienten con los talleres realizados.

4.2.4 Actividades emprendedoras

Objetivo: Brindar conocimientos y herramientas para generar empresa

1. Los empresarios o las universidades se sumarán a este trabajo brindando capacitaciones para que los participantes puedan emplear su mente y pensamientos en la producción o creación de un proyecto emprendedor rentable que le permita tener su propia empresa.
2. Se podrá trabajar talleres en las cuales se les capacite en temas sobre los cuales se podría generar empresa.
3. Se brindará los conocimientos necesarios para que puedan organizarse para crear empresa.

4.3. Actividades que desarrollarán los vigías (ver anexo 2)

Objetivo: Mayor control en los Municipios

1. Control minucioso de los funcionarios, familiares y amigos que ingresan en los días laborables al lugar.
2. Supervisión con la finalidad de observar cualquier tipo de coordinación para delinquir. Identificar acciones con carácter delictivo e informarlas para prevención.
3. Evaluación psicológica a los trabajadores con la finalidad de tratar los problemas que puedan originar la comisión de actos ilícitos

4.2 AGENTES

Aquí se plasman todos los involucrados o comprometidos con este proyecto, en el cual pueden participar entidades políticas, religiosas, universidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ONGs, y cualquier

otra organización nacional o internacional interesada en apostar por una reforma.

La relación que debe existir entre los actores que contribuirán con el proyecto se debe realizar en base a la cooperación, coordinación y apoyo mutuo trabajando de manera secuencial y organizada a través de una planificación anual que debería ejecutarse con la finalidad de plantearse nuevos retos y evaluar semestralmente el trabajo realizado, de esta manera se podrá determinar si se ha disminuido el nivel de corrupción en la ciudad de Lambayeque.

Las personas que incurrir en los delitos de corrupción lo hacen por muchos factores, y también se debe tener en cuenta que son muchos los aspectos que han influido en su personalidad, por ejemplo, las condiciones sociales en las que se desarrollaron, la falta de acceso a la educación, muchos de ellos han podido iniciar estudios no continuaron por factores económicos que hace la vida más cara y más difícil el acceso para ellos que no cuentan con una posición económica saludable. La familia es delincuente y lo que viene es que todas sus generaciones se dediquen a esto como parte de un negocio familiar que hace que se protejan y trabajen de manera más organizada.

Al existir diversos motivos que han llevado al delincuente a incurrir en este hecho delictivo, son varios los aspectos que se debe tratar, de ahí la necesidad de contar con un equipo de psicólogas que se encargue de transmitir herramientas para controlar y erradicar los sentimientos de culpa, marginación, e injusticia con la que ellos consideran que han vivido, son personas relegadas que no sintieron las mismas oportunidades y que de alguna manera al no tener la orientación necesaria optan por algo tan fácil como quitarle al otro su propiedad sin el mayor esfuerzo posible que con la amenaza o violencia, personas sin escrúpulos que no tienen reparo por la vida de los demás.

Conociendo estos indicadores vemos que no es tarea fácil la propuesta que pensamos desarrollar ya que requerirá la suma de esfuerzos de muchas gentes tanto personas que aporten con su tiempo en este proyecto como organizaciones que apuesten por lograr una sociedad más justa y sin violencia, una sociedad que les permita invertir y crecer libremente, sin miedo, sin temores de que podemos ser amenazados por pretender generar riqueza. Entonces, la labor que desempeñarán las psicólogas, con charlas, talleres, ejercicios, ellos constituyen el eje central para trabajar la conducta de estos seres humanos. Asimismo se requerirá de inyecciones económicas que podrían hacer las empresas las ONGs, aportando con su personal para capacitaciones en proyectos de ayuda social, de responsabilidad social o simplemente proyectos económicos que les brinde a los delincuentes alternativas para darse otra oportunidad en la vida. Los grupos religiosos también tienen una función vital ya que llevando la palabra de Dios y haciendo que los delincuentes lo conozcan pueden lograr el arrepentimiento sincero y la conversión, para llevar un camino de paz y tranquilidad, ya que conociendo el amor de Dios podrá nacer en ellos el amor hacia los demás y no les quedará gana alguna de querer perjudicar a los demás.

El personal que labora en el Municipio debe ser continuamente evaluado porque no se permitirá malos elementos, ya que si lo que se quiere lograr en un mayor control, necesitamos gente bien formada con principios y valores capaces de decir NO, frente a una coima, incorruptibles, ya que son ellos el primer filtro para la comisión de delitos y de existir alguna amenaza a esos funcionarios se tomará cartas en el asunto con la total discreción y protegiendo al personal que labora en dicha institución.

Las familias también deberán ser capacitados y entrenados porque si lo que se pretende es la reeducación, y/o la resocialización de su familiar, deberán ayudar y colaborar con el trabajo que se está realizando en tal sentido, se les explicará el trabajo que se va a realizar con los delincuentes

involucrándolos a alejarse de los hechos delictivos caso contrario también serán sancionados, considerando que son los familiares y amigos los que participan dentro de las organizaciones criminales.

4.3 COMPONENTES

Los componentes se vinculan y se complementan uno de otro, ninguno muestra preferencia, solo dependerá de cómo el agente quiera utilizarlos y en la orden de prelación que el mismo determine. Estos componentes permiten tener una guía de cuáles son los lineamientos a seguir en este proceso, permite saber cuáles son las bases sobre las que se sustenta esta propuesta. El objetivo de los componentes del Modelo es la participación de manera activa y proactiva de cada uno de los agentes, para orientar el cambio y la transformación de la conducta de los delincuentes a través de la transmisión de conocimientos y habilidades, destrezas y comunicación de oportunidades, guiados por una misión y una visión, en este sentido, se convierten en pilares que sustentan la reforma que se pretende alcanzar de manera interna en cada ser humano que ha delinquido como en lo externo, en una sociedad más pacífica y segura.

El primer componente a tener en cuenta es que si bien se designará a un ente que se encargue de dirigir el proyecto, se requiere de un liderazgo sinérgico donde cada representante de una institución que va a participar de este proyecto sea un líder nato y se encargue de aportar desde su propia fortaleza, ya sea con personal, con idea, de forma económica, con espacios físicos, con bienes materiales para la implementación del salón donde se trabajará, ya sea con cronograma, con métodos de supervisión y vigilancia, entre otros, todo aporta suma en esta ardua tarea de lograr combatir con la corrupción

En ese sentido, el municipio juega un rol crucial porque será el quien dirija y asuma este proyecto como suyo y sea quien venda la idea de trabajar de manera organizada para erradicar la corrupción, tanto de manera interna

con el personal a su cargo, como de manera externa con las instituciones públicas y privadas, mientras más sean los que se sumen a esta tarea mejores resultados alcanzarían en el menos tiempo posible.

El trabajo colaborativo será otro componente que formará parte de este proceso, ya que tiene que ser un trabajo desinteresado solidario, consecuente, permanente, transparente y en armonía con los demás, teniendo siempre presente que el beneficio es para toda la sociedad, ya que se estará trabajando por erradicar el miedo de las calles, por una sociedad más justa donde primen los derechos.

Así como actualmente se encuentra en boga la responsabilidad social que están asumiendo las empresas al tener que brindar un servicio o desarrollar un proyecto que beneficie a la sociedad, así también tendremos que visualizar este proyecto, y considerar que es nuestro compromiso con esta sociedad en la que vivimos que todos tengamos las mismas oportunidades y que seamos capaces de contribuir con quienes más lo necesitan, que este sea nuestro aporte con la sociedad el trabajar para que la gente se convierta para que nuestra región Lambayeque sea un lugar digno para vivir.

La Planeación se realiza antes de iniciado el trabajo, donde se deja constancia de todo lo que va a formar parte de este proceso de reforma, se establecen los agentes que se comprometen a participar del proyecto, se establece el cronograma en que se realizarán las actividades, se calendarían desde que momento se realizará la evaluación, asimismo se plantea quienes serán los responsables del seguimiento y del monitoreo, elaborándose los estadísticos que nos permitirán determinar si se ha logrado con el objetivo planificado.

3.4. DURACIÓN y EVALUACIÓN

El modelo se ejecutará de manera permanente hasta que se logre erradicar la corrupción, en tal sentido, se deberá realizar una planeación anual para realizar una evaluación y ver en qué medida se agregan más componentes, nuevas actividades, nuevos protocolos, evaluar si se suman más organizaciones, saber cuáles son los errores que se están cometiendo, quién debe contribuir con la elaboración del proyecto de ejecución, de seguimiento y de evaluación.